

0
H341
T29
II

37135

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE INTEGRACION

DEL MODO DE TRANSPORTE FERROVIARIO

EN LOS PUERTOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PUERTO LA PLATA



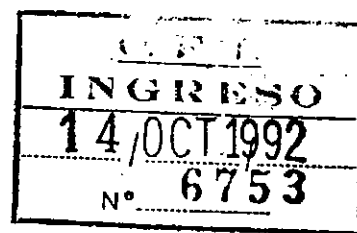
0/H.341
T29
II
H.33
2704
2.46

ASPECTOS JURIDICOS INSTITUCIONALES

N.320

SEGUNDO INFORME PARCIAL

BUENOS AIRES, 13 de Octubre de 1992.



Señor

Secretario General

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Ing. Juan Jose Ciacera

E.

d.

Por intermedio de la presente,
tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los efectos de
adjuntarle el segundo informe parcial de acuerdo a los cursos
de acción que se vienen desarrollando en relación al proyecto
bajo análisis.

Saluda a Ud. atte.

adjtos. : 4 (cuatro) carpetas.

DR. ALBERTO TREZZA

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LOS REGÍMENES NORMATIVOS MÁS IMPORTANTES
DICTADOS EN MATERIA DE LEGISLACIÓN FERROVIARIA Y ANÁLISIS DE LA
ESTRUCTURA LEGAL ACTUALMENTE VIGENTE.-

I.- Tal como lo efectuásemos "ut infra" en relación a la legislación portuaria, corresponde ahora abordar un somero análisis de los regímenes legales más significativos que tuvieran sucesiva vigencia en materia de legislación ferroviaria; para abordar a continuación la consideración y comentario del derecho positivo vigente que regula en el presente el esquema legal aplicable al actual sistema ferroviario.-

Previamente, y a manera de informal introito; no parece inoportuno ensayar - aunque sea en unas pocas líneas - una breve consideración acerca de la explosiva funcionalidad tecnológica, institucional y económica que la aparición del ferrocarril, como nuevo modo de transporte, significó en el desarrollo social y económico de las comunidades a nivel mundial y obvia y fundamentalmente en nuestro país en particular.-

Desde dicho punto de vista resulta decididamente indiscutible que el ferrocarril, como medio y modo de transporte, tanto de cargas como de pasajeros, se constituyó indudablemente en uno de los desarrollos tecnológicos más importantes de la humanidad y uno de los que más influencia y consecuencias tuvo tanto en cuanto al despegue económico de innumerables comunidades cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de sus integrantes.-

Es que si hasta su aparición; y consiguiente desarrollo;

todas las civilizaciones fundamentaban la posibilidad de su desplazamiento sobre tierra firme sobre la base y el soporte de la tracción animal; a partir de su desarrollo el ferrocarril dotó a la sociedad humana de una herramienta de circulación y transporte, de una velocidad y una capacidad de traslación y de tracción tan amplia que hasta las mismas interrelaciones de los factores geográficos - y naturalmente también las geopolíticas - se vieron revolucionariamente alteradas; convirtiendo a las vías férreas en tan o mas importantes que las vías de circulación acuáticas ya fueran fluviales o marítimas.-

El ferrocarril permitió que las zonas mediterráneas tuvieran a partir de entonces contacto estrecho con los litorales marítimos. Las estaciones se convirtieron en polos de desarrollo comercial y urbano, tal como hasta entonces, lo habían sido exclusivamente los puertos.-

Las mismas vías marítimas clásicas se conmocionaron y dieron lugar a la aparición de nuevos puertos o la reactivación de algunos que languidecían porque las nuevas redes de circulación ferroviaria nuevos centros y nuevos esquemas de circulación de mercaderías y riquezas provenientes de inmensas regiones que hasta entonces habían quedado excluidas del tráfico comercial internacional por su relativo aislamiento o por la dificultad de sus comunicaciones externas.-

Y aunque la afirmación aparezca como aventurada puede sin embargo, indudablemente sostenerse, que a mas de un siglo y medio de su aparición, el modo de transporte ferroviario no ha sido aún desplazado en su importancia capital por ningún otro medio de

transporte; que el avión y el automotor se han constituido por el contrario en instrumentos integradores y complementarios del desarrollo ferroviario y que la estructura ferroviaria de una nación es todavía hoy la trama de circulación básica y fundamental tanto de sus sistemas de comunicación interna como de la posibilidad de conectarse a los esquemas de intercambios y transferencias comerciales externas internacionales.-

En el transcurso de este casi siglo y medio de vida el ferrocarril dio vida, pobló e integró a la casi totalidad de nuestro extenso territorio nacional y puede sin lugar a dudas afirmarse que en pocas regiones del mundo el ferrocarril ha sido un factor de progreso y desarrollo tan importante como lo fue en la República Argentina.-

Ya el 5 de setiembre de 1854 el General Urquiza, en su carácter de presidente de la Confederación Argentina sostenía que "...una de las mas preciadas obligaciones del Gobierno Nacional es dotar a la Confederación de vías públicas que activen el comercio de unas provincias con otras, den valor a su producción, faciliten la población del territorio y contribuyan a realizar la constitución política que se ha dado..." al refrendar el decreto por el que se encomendaba al ingeniero Allan Campbell el estudio de factibilidad de la línea de Rosario a Córdoba.-

Poco después; y desde entonces por casi mas de setenta años, se extendió y construyó la nervadura central de lo que hoy constituye la red ferroviaria nacional y a cuyos sucesivos regímenes legales de administración, dirección y explotación pasaremos a continuación a referirnos.-

II.- El primer ferrocarril argentino (el Ferrocarril Oeste) nació oficial e institucionalmente el 12 de enero de 1854, fecha de la sanción de la ley de la provincia de Buenos Aires que, con la firma del Gobernador Pastor Obligado, acordó a un grupo de comerciantes de la ciudad de Buenos Aires una concesión para construir una línea ferroviaria que partiendo de la ciudad podía extenderse indefinidamente hacia el Oeste; produciéndose la inauguración oficial del primer tramo de la línea (de diez kilómetros de extensión) el 29 de agosto de 1857.-

A partir de entonces fueron numerosas las regulaciones provinciales y nacionales que se dictaron en materia ferroviaria, sobre todo como marcos regulatorios de las concesiones que sucesivamente se le fueron otorgando a compañías privadas de capital extranjero para la construcción de líneas nuevas o para la ampliación de las existentes; sin perjuicio de lo cual es válido sostener que la primera regulación legal integral de la materia ferroviaria la constituyó la ley 2873, también llamada " de ferrocarriles nacionales.", y sancionada en 1891.-

La ley regulaba la "...construcción y explotación de todos los ferrocarriles de la República así como las relaciones de derecho a que ellas dieron lugar..." (art.1º) y configuraba a los ferrocarriles públicos como nacionales o provinciales.- A renglón seguido se habilitaba la posibilidad de su explotación por empresas particulares concesionarias, detallándose puntualmente las obligaciones técnicas que deberían cumplimentar las mismas; razón por la cual puede afirmarse que este primer cuerpo de legislación integral ferroviaria funcionó principalmente casi como

un reglamento general técnico de tránsito ferroviario.-

Como organismo de control de gestión de las empresas titulares de las concesiones se creaba en la órbita del Ministerio de Obras Públicas la Dirección de Ferrocarriles cuyas atribuciones y competencias no aparecían sin embargo, claramente definidas por la ley.-

Finalmente, en su último capítulo, la ley incluía la descripción de determinadas conductas penales que se tipificaban como delitos contra la seguridad pública y el tráfico.-

Aunque producto de todo el espontaneísmo y descontrol con el que se desarrollaron las primeras épocas del desarrollo ferroviario nacional; etapa ésta además signada por la aparición y expansión de empresas concesionarias extranjeras (fundamentalmente británicas) que diseñaron la construcción y expansión de la red ferroviaria; la ley 2872 fue el primer intento útil de de relativa regulación y control de un nuevo modo de transporte que irrumpía revolucionariamente y que no reconocía antecedentes en un país en el que hasta ese momento el único medio y modo de locomoción había sido el constituido por la tracción animal o el ofrecido por las vías navegables.-

Algunos años mas tarde y cuando el sistema de concesiones a empresas extranjeras había ya cobrado su máxima preponderancia y dominaba casi todo el esquema troncal de la red ferroviaria nacional, se hizo necesario dictar una reglamentación legal que normativizara minuciosamente el régimen legal de las concesiones ferroviarias.-

Este cometido fue cumplimentado con la sanción de la luego conocida como " Ley Mitre " n° 5315 del 30 de setiembre de 1907.- Por el art. 1° se establecía concretamente que : " Todas las concesiones de ferrocarriles, sean líneas principales o ramales, que en adelante se acordaran serán regidas por las cláusulas de la presente ley; de acuerdo con la ley general de ferrocarriles n° 2873 ".-

Como dato significativo debe señalarse que por primera vez se introduce en una reglamentación ferroviaria la noción -fundamental para el derecho administrativo- del "pliego de condiciones" como base del contrato de concesión; sometiendo al mismo a la previa aprobación del Poder Ejecutivo : " El tren rodante, el peso de los rieles y accesorios y los demás materiales que se empleen en la construcción de la línea se especificarán en el pliego de condiciones que deberá ser sometido a la aprobación del Poder Ejecutivo" (art. 2°).-

Sin embargo lo medular del régimen y lo que en definitiva fue el eje y punto de partida de una interminable polémica - que sin duda todavía no ha finalizado, aunque referida actualmente a otros esquemas normativos - lo constituiría el régimen exenciones y privilegios que se establecían en los arts. 7°, 8° y 9° de la ley.-

Por el art. 7° la ley disponía como sujetas a expropiación por causa de utilidad pública "...las tierras cuya ocupación sea necesaria para las vías, estaciones, talleres, galpones de carga,etc....quedando el concesionario respectivo autorizado para

gestionar su expropiación con arreglo a la ley general de la materia ".-

Por el art.8º se eximía a las empresas concesionarias de todo tipo de derecho de Aduana en relación a las importaciones que debían efectuar para la explotación de las líneas y además se las excluía por un extensísimo plazo; hasta el 1 de enero de 1947; del pago de todo tipo de impuestos nacionales , provinciales y/o municipales.-

En relación a la regulación y control de las tarifas a aplicar por los concesionarios el Gobierno Nacional se autolimitaba en sus facultades de intervención, supeditándolas a la eventual circunstancia de que el producto bruto de la línea entres años seguidos excediera del 17% del capital reconocido por el Estado en acciones y obligaciones al otorgarse la concesión.-

Fácil es deducir que la ineficiencia en el control de gestión y el manejo discrecional de sus contabilidades permitieran que, al amparo de semejantes franquicias - ampliadas inclusive posteriormente por la ley 10657 a tasas, contribuciones y retribuciones de servicios - las empresas concesionarias establecieron de hecho un monopolio cerrado del transporte ferroviario y un manejo arbitrario y discrecional del esquema tarifario que solo pudo ser quebrado por la nacionalización general de todo el sistema operado a partir del 1º de marzo de 1948.-

III.- Con relación a la normativa vigente que regula actualmente la materia ferroviaria en sus distintos, variados y

multifacéticos aspectos; debe inicialmente advertirse que su tratamiento resulta necesariamente difuso por las profusa cantidad de reglamentaciones que a partir sobre todo, de la ley n° 23696 de "reformulación del estado" ; regula el proceso de privatización y provincialización del sistema ferroviario nacional.-

Es por ello que formulada esta advertencia preliminar, parece útil aclarar que no obstante lo expuesto, a los efectos del presente estudio - referido puntualmente a la optimización operativa del modo de transporte ferroviario con relación al esquema portuario del litoral fluvial y marítimo de la Provincia de Buenos Aires - resulta solo conveniente glosar y reseñar estrictamente el régimen legal y reglamentario general que normativiza actualmente a la materia ferroviaria y el esquema de privatización y descentralización delineado por la ley de reforma del estado y sus decretos reglamentarios correspondientes.-

La ley n° 18360; sancionada y promulgada el 17 de setiembre de 1969 resulta hoy todavía - por lo menos técnica y formalmente - el esquema legal medular de la reglamentación legal ferroviaria; aunque necesario es remarcar que la multiplicidad de las modificaciones introducidas en la materia por las sucesivas regulaciones dictadas especialmente con posterioridad y como consecuencia de la sanción de la ley 23696 de reforma del Estado; reduce a estrechos márgenes el espacio real de su actual operatividad funcional.-

Por el art.1° se crea la empresa Ferrocarriles Argentinos (F.A.) a la que se dota de la capacidad de las personas de

derecho privado con plena autarquía en el ejercicio de su gobierno administrativo, técnico, comercial, industrial y financiero.-Por el art.3º se delimita como su objeto "...la explotación de los ferrocarriles de propiedad nacional pudiendo desarrollar las actividades complementarias y subsidiarias que le resulten convenientes..." y se le asigna además todo lo referente a la construcción, explotación, administración de las nuevas líneas que construya la Nación o resulten de convenios celebrados con las provincias.-

En el art.4º y en veinticinco incisos se definen y delimitan puntualmente sus atribuciones, referenciándolas en general a la explotación y administración centralizada de todo el sistema troncal ferroviario nacional.-La dirección y control de la empresa la pone la ley a cargo de un Presidente, un Vicepresidente ejecutivo y un Consejo de Administración designados por el P.E.N. y cuyas funciones y competencias se detallan en los arts. 9 a 14; aunque debe recordarse al respecto que desde el 11 de julio de 1989 y de conformidad a lo ratificado posteriormente por los arts. 2º y 3º de la ley nº 23696 de emergencia administrativa y reestructuración del Estado; la empresa se encuentra integralmente intervenida.-

En el resto de su articulado, la comentada ley 18360 normativiza en detalle y puntualmente el régimen de contratación, de explotación, tarifario, contable, económico y financiero (arts. 15º a 31º) y en los arts. 32º a 36º el régimen de contralor, sindicatura y auditoría externa (actualmente casi totalmente derogado a partir de la creación de la Sindicatura de Empresas Públicas).-

Como dato significativo cabe acotar como régimen sí en vigencia - obviamente en actual transición de reconversión y cancelación a partir de la operatividad del proceso de privatización y descentralización federal - a los arts. 26* y 27* de la ley 18360 que dispone a cargo del Estado nacional y sin obligación de reintegro, la entrega periódica de partidas a fin de sufragar el déficit de explotación de la empresa (innecesario es recordarlo como estructural y permanente) y los planes de inversión aprobados por el P.E. y al art.39* que dispone : "...Ferrocarriles Argentinos no podrá ser declarada en quiebra..." y que el Estado Nacional garantiza integralmente, con cargo a rentas generales, las deudas de la empresa y sus déficit operativos; aunque claro está, muchos de estos aspectos y con excepción de la cobertura del déficit operativo que se mantiene estrictamente vigente; han sido estructuralmente modificados por las leyes 23696 y 23697 y sus decretos reglamentarios.-

IV.- Innecesario parece remarcar ahora que son la ley 23.696 (usualmente conocida como de " emergencia administrativa y reestructuración del Estado" o de "Reforma del Estado") y decretos reglamentarios N* 1105/89 aplicable en general; y N* 666 /89 y N* 1141/91 particulares en lo que hace a la materia ferroviaria; y el N* 502/91 que reorganiza el aparato administrativo de la empresa Ferrocarriles Argentinos; los esquemas normativos que regulan actualmente en su casi totalidad el tema ferroviario; por lo menos en lo que hace al objeto del presente estudio.-

A) La ley 23696; a la que ya aludimos antes de ahora en

diversas oportunidades; es sin duda el instrumento jurídico fundamental de la reformulación administrativa, y en lo que atañe al núcleo del objeto temático en estudio incluye, como veremos en detalle "ut infra", el programa legal directriz de la reconversión ferroviaria.-

La ley de reforma administrativa incorpora distintos contenidos temáticos que someramente analizados y comentados resultan ser los siguientes :

1) Reordenamiento y racionalización de empresas públicas.-

La ley dispone en sus arts. 2* a 4* la intervención directa de la totalidad de los organismos, sociedades y empresas públicas por un plazo determinado (que ha sido sucesivamente prorrogado hasta el presente) promoviendo su reestructuración (art. 9*) ya sea mediante privatización; cuando así lo disponga una ley nacional específica - de hecho, la misma ley incluye en dos anexos la lista inicial de empresas a privatizar y las modalidades específicas de instrumentación que se disponen para cada caso - o mediante la modificación de su situación jurídica en el caso de las empresas que permanecen en la órbita de la esfera estatal.-

Efectuada la declaración legal impuesta por el art. 9* el P.E. debe ejecutar la ley a través de la sanción e implementación de los decretos-planes correspondientes - los que en el caso del sistema ferroviario resultan ser los decretos N* 666/89 y 1141/91 - que establezcan puntualmente las características de las modalidades instrumentales para cada caso concreto de privatización.-

Cabe aclarar que en la reformulación administrativa que planifica la ley, las herramientas instrumentales no se agotan en las privatizaciones propiamente dichas; ya que entre tales instrumentos se incluyen además - y en lo que al tema de la reconversión ferroviaria atañe especialmente -provincializaciones; municipalizaciones; cooperativizaciones; privatizaciones parciales,etc. (art. 15* y cctes.).-

2) Caracterización del Programa de Propiedad Participada (arts 21* y 22*).-Por el cual y conforme lo hemos ya comentado anteriormente, pueden llegar a ser sujetos adquirentes de todo o parte del capital accionario de las empresas sujetas u organismos sujetos a privatización no solo los mismos empleados con relación de dependencia del ente a privatizar, sino además los usuarios titulares de los servicios prestados por el mismo y aún los los productores de materias primas cuya industrialización y/o elaboración constituye el objeto principal del organismo reestructurado.-

3) Reformulación y ordenamiento de los contratos estatales (art.48*).- Por este régimen de excepción se autoriza al P.E.N. a resolver unilateralmente los contratos de locación de obra pública cuyo sinalagma hubiera sido gravemente alterado en su situación financiera producto de la inflación.-

4) Con algunas excepciones puntuales (créditos laborales o provenientes de acciones de daños y perjuicios ; repetición de tributos,etc.) se suspenden por un plazo determinado ; posteriormente también prorrogado; la ejecución compulsiva de condenas judiciales que obliguen al Estado Nacional al pago de

sumas de dinero.-

5) Resguardo de la situación laboral del trabajador público durante las privatizaciones y Plan de Emergencia del Empleo.-

Se garantiza la continuidad de la aplicabilidad de las instituciones legales; convencionales y administrativas del derecho del trabajo a los empleados del Estado afectados por las privatizaciones (art. 41*); manteniendo sus derechos y obligación es en materia previsional y de obra social.-

Se implementa además un plan de afectación de fondos para obras públicas que requieran mano de obra intensiva licitadas y contratadas por las municipalidades (art. 59*).-

6) En lo que se refiere específicamente a la materia ferroviaria; debe señalarse que la empresa Ferrocarriles Argentinos resulta intervenida en virtud de lo dispuesto por los arts.2* a 4* de la ley; y que en el Anexo 1 - como directriz y antecedente del decreto 666/89 -se incluye a dicha empresa tanto a lo que se refiere a transporte de pasajeros y/o de cargas ; como la infraestructura de servicios; en el régimen de concesiones; en tanto que con relación al régimen legal de éstas últimas , reglado por la ley 17520; se reforma dicho estatuto legal conforme al siguiente esquema: Art. 58* .-Incorporase como párrafo 2* del art. 1* de la ley 17520,el siguiente: " Se aclara que podrán otorgarse concesiones de obra para la explotación, administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de obras ya existentes, con la finalidad de obtención de fondos para la construcción o conservación de otras obras que tengan vinculación física, técnica o de otra naturaleza con las primeras, sin perjuicio de las inversiones previas que deba realizar el

concesionario.- Para ello se tendrá en cuenta la ecuación económico-financiera de cada emprendimiento, la que deberá ser estructurada en orden a obtener un abaratamiento efectivo de la tarifa o peaje a cargo del usuario.-

La tarifa de peaje compensará la ejecución, modificación, ampliación, o los servicios de administración, reparación, conservación o mantenimiento de la obra existente y la ejecución, explotación y mantenimiento de la obra nueva. En cualquier caso, las concesiones onerosas o gratuitas, siempre que las inversiones a efectuar por el concesionario no fuesen a ser financiadas con recursos del crédito a obtenerse por el Estado o por el concesionario con la garantía de aquél, podrán ser otorgadas por el ministro de Obras y Servicios Públicos mediando delegación expresa del Poder Ejecutivo Nacional, delegación que podrá efectuarse en cualquier estado del trámite de adjudicación, incluso con anterioridad a la iniciación del procedimiento de contratación que corresponda según el régimen de la presente ley".-

Incorporase como párrafo 2* del inc. c del art. 2* de la ley 17.520 el siguiente: "Aclarase que no se considerará subvencionada la concesión por el solo hecho de otorgarse sobre una obra ya existente".-Sustituyese el inc. c del art. 4* de la ley 17.520 por el siguiente: "c) Por contratación con sociedades privadas o mixtas. En tal caso se admitirá la presentación de iniciativas que identifiquen el objeto a contratar, señalando sus lineamientos generales".-

Si la entidad pública concedente entendiere que dicha obra y

su ejecución por el sistema de la presente ley, es de interés público, lo que deberá resolver expresamente, podrá optar por el procedimiento del inc. a o bien por el concurso de proyectos integrales. En tal caso convocará a la presentación de los mismos mediante anuncios a publicarse en el Boletín Oficial y en dos (2) diarios de principal circulación a nivel nacional por el término de cinco (5) días. Dichos anuncios deberán explicitar la síntesis de la iniciativa, fijar el día, hora y lugar de la apertura. El término entre la última publicación de los anuncios y la fecha de presentación de ofertas será de treinta (30) días corridos como mínimo y noventa (90) días corridos como máximo, salvo supuestos de excepción debidamente ponderados por el ministro competente en los que se podrá extender el plazo máximo.-

De existir una oferta más conveniente que la presentadas por quien tuvo la iniciativa, según acto administrativo debidamente motivado, el autor de la iniciativa y el de la oferta considerada más conveniente, podrán mejorar sus respectivas propuestas en un plazo que no excederá de la mitad del plazo original de presentación.-

El acto de apertura, la continuación del procedimiento licitatorio, la adjudicación y posterior continuación del contrato se regirán en lo pertinente por los principios de la ley 13.064, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 1º de la presente".-

B) El decreto n° 1105/89 del 20 de octubre de 1989 reglamentó minuciosamente todos los aspectos de la ley madre de reestructuración del Estado y en lo que hace a su incidencia en relación a la materia estrictamente ferroviaria; y teniendo en

consideración que en el Anexo 1 de la ley 23696 se indica expresamente a la "concesión" de servicios como la modalidad instrumental mediante la cual debe operativizarse la privatización del sistema ferroviario nacional, es dable señalar la importancia fundamental del art. 15º de la norma reglamentaria comentada por el cual se establecen los requisitos que deben contemplar los permisos, concesiones o licencias para explotación de servicios públicos que se otorguen como consecuencia de un procedimiento de privatización; ordenando expresamente la inclusión de :

- a) la determinación precisa de los servicios comprendidos ;
- b) el plazo de la concesión y el de su eventual prórroga;
- c) el ámbito geográfico comprendido;
- d) las obligaciones puntuales del concesionario;
- e) los derechos comprendidos en la concesión;
- f) el régimen tarifario a aplicar por el concesionario con intervención del Ministerio de Economía;
- g) el régimen sancionatorio;
- h) los regímenes de rescate o reversión, en su caso;
- i) la información a suministrar por el concesionario; y
- j) los beneficios tributarios y/o impositivas que se acuerden al concesionario.-

Por el art. 18º se disponen y establecen las características a las que deberán ajustarse los correspondientes pliegos de condiciones y los organismos responsables de su confección; remarcándose como directrices en tal sentido los de máxima transparencia, publicidad y celeridad; y en el caso de llamado a licitación pública o concurso público se describen con toda minuciosidad los requisitos y formalidades a los que deberá ajustarse el mismo.-

C) El decreto-plan dictado en cumplimiento del art. 15º de la ley 23696, y correspondiente específicamente al sistema ferroviario nacional es el n° 666/89 del 1 de setiembre de 1989.-

Sin perjuicio de que "ex ante" nos hemos ocupado en general del mismo; cabe ahora señalar que en cumplimiento del plan integral de reestructuración estatal diseñado por la ley de reforma del Estado; el decreto instrumental planifica toda una serie de medidas, tanto estructurales como coyunturales cuyas finalidades y objetivos consisten, a tenor de sus considerandos, en disminuir la necesidad de financiamiento; el incremento del transporte de cargas y de los ingresos por dichos conceptos y el aumento de la recaudación de los servicios de pasajeros urbanos y suburbanos.-

No obstante ello; resulta imprescindible aquí señalar que, a mas de tres años de su sanción, la política de privatización para el área ha sido sustancialmente profundizada y desde que no se prevee que al final del proceso permanezcan servicios de ninguna índole en la órbita de las prestaciones atendidas por el Estado Nacional - a tenor de las diversas resoluciones dictadas durante el año en curso por la Secretaría de Transporte tendientes a transferir a las provincias interesadas los servicios no incluidos en llamados a licitación pública y a cancelarlos en caso de indiferencia al respecto por parte de los gobiernos provinciales - no cabe sino concluir que los servicios de carga que atiendan las terminales portuarias de la provincia de Buenos Aires deberán ser necesariamente efectivizados por operadores concesionarios privados que presenten iniciativas al respecto por el sistema de concurso de proyectos integrales en el caso de ramales no

incluidos en licitaciones públicas; y/o empresas u organismos provinciales.-

Resulta de significativa importancia señalar que la enunciación de los objetivos básicos implementados y ordenados por el decreto-plan pueden sucintamente resumirse y ordenarse de acuerdo al siguiente esquema"

1) Racionalización de gastos de explotación y revisión y ordenamiento de gastos en personal.-

2) Reordenamiento del plan de inversiones con especial gravitación de las destinadas al incremento del transporte de cargas.-

3) Racionalización de los servicios nocturnos de pasajeros, urbanos y suburbanos.-

4) Descentralización y reestructuración del aparato burocrático de la empresa.-

5) Aceleración del proceso licitatorio del ramal Borges - Delta.-

6) Impulso del llamado a licitación nacional e internacional para la implementación de un sistema alternativo de expendio y control de boletos en los servicios urbanos e interurbanos.-

7) Impulso del llamado a licitación para la explotación del servicio de encomiendas y paquetería.-

8) Aumento de la operatividad del transporte multimodal.-

9) Incremento del aporte de material tractivo y remolcado por parte de operadores y cargadores privados.-

10) Incrementar la incorporación de material rodante mediante contratos de leasing.-

11) Utilizar la capacidad de la industria ferroviaria nacional para la renovación del material rodante, vías y obras de arte.-

12) Reorganizar y racionalizar los talleres de la empresa.-

13) Vender, alquilar y/o concesionar los inmuebles necesarios para

la explotación ferroviaria.-

14) Impulsar la provincialización y municipalización de ramales .-

15) Clarificar y sincerar el ordenamiento contable de la empresa.-

De conformidad a lo establecido por el Anexo 1 de la ley 23696 el decreto-plan (art.4*) dispone taxativamente la figura de la concesión integral de explotación de líneas o sectores de la red ferroviaria nacional como modalidad de reestructuración administrativa para el área; definiendo como ya hemos visto a la misma como el sistema por el cual el concesionario asume la explotación comercial, la operación de trenes y atención y mantenimiento del material rodante, infraestructura y equipos.- Solamente para casos excepcionales se prevé recurrir a la concesión parcial de servicios.-

A los fines de nuestro estudio y dado de que; como veremos; la profundización de la reorganización en el área hace que la totalidad del sistema deba ser concesionado; privatizando, provincializando o municipalizando; resulta significativo señalar que - atento a que está actualmente en plena ejecución el proceso licitatorio de los distintos ramales ; algunos de los cuales tienen acceso directo o periférico a los distintos sistemas portuarios de la Pcia. de Buenos Aires - que en cuanto a la participación estricta del sector privado el decreto-plan establece puntualmente (art.6*) que la adjudicataria de cada licitación deberá constituir una Sociedad Anónima Concesionaria en los términos de los arts. 163* a 307* de la ley 19550; pudiendo preveer sus estatutos una determinada categoría de acciones a distribuir conforme al Programa de Propiedad Participada regulada

por el capítulo III de la Ley 23.696.-

D) La creación de la Administración de los Ferrocarriles Suburbanos que fue dispuesta por la resolución de Ferrocarriles Argentinos n° 156/89 y el decreto ratificatorio n° 502 del 25 de marzo de 1991; significa una profunda escisión administrativa, operativa y funcional de la empresa y resulta de importancia a los fines de nuestro estudio porque transfiere al área de la nueva sociedad explotadora que se crea (FE.ME.SA.) toda la red de servicios urbanos y suburbanos de pasajeros incluyéndose infraestructuras , materiales e inmuebles de ramales entre los que obviamente se encuentran algunas que sirven directa y/o periféricamente al puerto de La Plata y su zona de influencia (por ej. los ramales Plaza Constitución - La Plata - Río Santiago; Plaza Constitución - Glew - Altamirano; y Bosques - Berazategui entre otros) .-

La originalidad de esta nueva creación empresaria estriba en que resulta ser una sociedad anónima creada en los términos de la ley de sociedades n° 19.550; pero cuyo capital pertenece en un 99% al Estado Nacional (decreto 502/91, art.1) derivando a partir de la fecha de su creación - que el decreto en cuestión fijó en el día 1° de abril de 1991 - en la titular dominial de los bienes inmuebles de propiedad ferroviaria ubicados en el Area Metropolitana Buenos Aires cuya delimitación geográfica la puntualiza el art.17° incluyendo los ubicados en los Partidos de la Pcia. de Buenos Aires que a continuación se ennumeran :

AVELLANEDA - ATE.BROWN -BERAZATEGUI - BERISSO - BRANDSEN -CAMPANA
- CAQUELAS - ENSENADA -ESCOBAR - E. ECHEVERRIA - E. DE LA
CRUZ - F. VARELA - LAS HERAS - GRAL. RODRIGUEZ - GRAL. SARMIENTO

- LA MATANZA - LA PLATA - LANUS - LOBOS - LOMAS DE ZAMORA - LUJAN
- M. PAZ - MERCEDES - MERLO - MORENO - MORON - PILAR - QUILMES -
SAN FERNANDO - SAN ISIDRO - SAN MARTIN - SAN VICENTE -
TIGRE - TRES DE FEBRERO - V. LOPEZ Y ZARATE.-

La nueva empresa se hace cargo además de la titularidad del material rodante y bienes muebles afectados a la explotación ferroviaria en dicha área urbana y suburbana.-Como dato significativo debe pormenorizarse que el art. 20º del decreto comentado fijaba un plazo de 90 días (incumplido en término) para que la empresa elevara al Poder Ejecutivo el plan integral de privatización de sus servicios.-

E) El decreto marco que regula las modalidades a las que deberán ajustarse las concesiones que en cumplimiento de la ley madre n° 23.696 y su decreto reglamentario n° 1105/89 se operativicen en el área de Ferrocarriles Argentinos, es el N° 1141 del 14 de junio de 1991.-

Debe remarcarse que solo resulta aplicable a las concesiones funcionalizadas en el marco de la ley 23.696 con relación a los servicios prestados por ferrocarriles Argentinos; por lo que cabe concluir que por el contrario, el mismo no es aplicable a las privatizaciones y/o concesiones que se dispongan en relación a los servicios prestados actualmente por FE.ME.SA. de conformidad a lo dispuesto por el art. 20 del decreto 502/91 y el art. 1 de sus estatutos sociales incluidos como Anexo 1 de dicha norma reglamentaria.-

V.- EL CONCEPTO DE CONCESION FERROVIARIA Y LOS SISTEMAS DE

PRIVATIZACION FERROVIARIA EN EL MARCO DE LA ACTUAL NORMATIVA
JURIDICA APLICABLE Y SU RELACION CON LOS POSIBLES SISTEMAS DE
OPERATIVIZACION DE LOS ACCESOS FERROVIARIOS A LOS PUERTOS DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES.-

Es hoy un lugar común, instalado desde hace ya largos años en la mayoría de la opinión pública - y eje, además, de una interminable discusión sobre cuyas reales motivaciones y veracidad y sinceridad de los fundamentos resulta realmente difícil expedirse con total certeza dada la multiplicidad de factores políticos, económicos y hasta sociológicos que se entrecruzan - el que los servicios ferroviarios deben ser inmediatamente; y de cualquier modo; eficientizados.-

Los usuarios directos porque comprueban diariamente la deficiente calidad de las prestaciones (incumplimientos de horarios, cancelaciones imprevistas, falta de higiene, irregularidad de las frecuencias, etc.).-Y el resto de la población porque contribuye a sufragar con sus impuestos y contribuciones un déficit operativo crónico al que poderosos medios de comunicación masiva señalan ligera - o interesadamente - como absolutamente eliminable mediante la magia automática de la privatización masiva; soslayando sin mayores precisiones que gran parte del componente financiero del déficit operativo lo constituye el gasto social de asistencia y promoción que se realiza a través del servicio ferroviario; el cual por su naturaleza resulta imposible de medir en términos estrictamente económicos pero que por su improductividad; desde una óptica empresarial y lucrativa; aparece como de difícil, por no decir imposible, privatización.-

Formulada ésta, a nuestro juicio imprescindible, consideración previa resulta en cambio cierto admitir que el saneamiento de las finanzas públicas, el reordenamiento de la asignación de gastos y recursos, la reactivación del desarrollo de nuestro comercio tanto interno como internacional y en fin la eficientización y mejoramiento de la calidad de la gestión operativa de los servicios públicos -objetivos todos, estos, delineados claramente y estructurados y ordenados por las leyes de reformulación administrativa y emergencia económica N° 23.696 y 23.697 y sus decretos reglamentarios de toda índole dictados en su consecuencia ; algunos de los cuales hemos ya analizado en cuanto a sus detalles mas importantes relacionados con la materia ferroviaria - hacen por supuesto aconsejable la reestructuración ; mediante privatización; de determinados servicios ferroviarios.-

Como la ley de reforma del Estado N° 23696 de 1989, ya incluía en su anexo 1 a la Empresa - hasta entonces íntegramente pública - Ferrocarriles Argentinos entre las sujetas a privatización, una primera aproximación al tema nos indica que ad-inicio ya se encontraba cumplido en cuanto al tema ferroviario el requisito de la ratificación por ley del Congreso que en relación a las privatizaciones ordenadas P.E.N. impone el art. 9° de la Ley .-

Cabe ahora recordar, que; como hemos visto en materia de privatizaciones ferroviarias el instrumento exclusivo designado por la ley es la "concesión" (Ley 23696, anexo 1) directriz administrativa que como también ya hemos comentado fue inicial y absolutamente implementada con el Decreto Plan correspondiente N°

666/89.-

Con relación a la "concesión", figura típica del Derecho Administrativo, la Ley de Reforma del Estado diseña dos aspectos diferenciados de la misma; la primera en el art. 17 y la restante en los arts. 57 y 58.-En los arts. 57 y 58 se alude claramente a la concesión de obra pública, sistema por el cual a grandes rasgos; y como es sabido; el Estado habilita la construcción de una obra pública nueva o la reparación de una existente sin afrontar directamente la financiación correspondiente; la cual es sufragada por los usuarios mediante el pago de tasas, tarifas o peajes que son directamente recaudados por el concesionario.-

La concesión de obra pública tiene en nuestro ordenamiento jurídico una regulación puntual y precisa: La Ley 17520 cuyo art. 1* es ampliado por el art. 58 de la Ley de Reforma del Estado en los términos que ya hemos citado y comentado más arriba.-

El art. 17 en cambio se refiere únicamente a las modalidades y/o formas con las que pueden tener lugar las privatizaciones y dado que allí se describe a la concesión sin ningún agregado ni calificativo y que tampoco lo hace en el anexo 1 de la Ley cuando dispone simplemente a la concesión como forma de privatización en materia ferroviaria; no cabe sino concluir que a su respecto la clara voluntad del legislador ha sido admitir para el caso las tres formas clásicas de concesión: esto es la de obra pública, la de uso y la de servicios; conclusión ésta que además aparece expresamente apuntalada por las disposiciones del art. 11 (primer párrafo) de la Ley.-

Hemos visto antes la caracterización general del concepto de "concesión de obra pública" (el Estado delega la construcción de una obra pública en un particular al cual le permite en un plazo determinado su explotación como compensación del financiamiento de una obra que el mismo afronta inicialmente) y hemos también recordado que el estatuto legal del sistema lo constituye la ley 17520 reformada por el art. 58 de la ley de reconversión administrativa.-

La "concesión" de servicios públicos (contrato mediante el cual el Estado asigna durante un plazo la organización, el funcionamiento y explotación de un servicio público a un particular que actúa por su propia cuenta y riesgo y que se retribuye con la recaudación que efectúa respecto al precio del servicio que pagan los usuarios) y la concesión de uso de un bien de dominio público; no tiene en cambio aún regulación legal integral específica en nuestro derecho positivo, a excepción de la prescripción contenida en el inciso 7º del art. 15 de la Ley de Reforma del Estado N° 23696 con relación al cual el art. 11 del Decreto Reglamentario N° 1105/89 dispone taxativamente: Art. 11: "Luego de sancionada y promulgada la Ley que aprueba la declaración de "sujeta a privatización", o a partir de la vigencia de este reglamento en el caso de las sociedades comprendidas en el párrafo 2do. del art. 8 de la ley 23696, el Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación en cuya jurisdicción se encuentre el ente, empresa o sociedad a privatizar iniciará, de inmediato y de oficio, los procedimientos tendientes a la privatización, aplicando estrictamente el principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites, previsto en el art. 1º inc. b de la ley 19549 y su modificatoria 21686. A tal efecto la

autoridad de aplicación podrá constituir comisiones de trabajo específicas con los cometidos que se les asignen. En los casos en que se aplique un programa de propiedad participada, un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social integrará dichas comisiones. En los supuestos previstos en el 3er. párrafo del art.11 de la ley 23696, deberá invitarse al Gobierno de la Provincia que corresponda a designar su representante en dichas comisiones de trabajo. Se podrá proceder a la contratación de asesores de las comisiones de trabajo cuando ello resultare necesario.-La ejecución de obras por la modalidad y concesión de obra pública estará regida por la ley 17520, con las reformas introducidas por los art. 57 y 58 de la ley 23696 y su reglamentación, normas que serán también de aplicación para la concesión de obras alcanzadas por la declaración de "sujeta a privatización". El régimen de la concesión de obra pública será de aplicación analógica, hasta tanto se sancione el cuerpo normativo pertinente, a las concesiones de uso y servicio que no tengan por objeto principal la ejecución de obras nuevas o de mantenimiento, reparación o ampliación en cuyo caso regirá en forma directa el régimen jurídico de la concesión de obra pública".-

Del juego de esta normativa se desprende a nuestro juicio la columna vertebral del esquema jurídico legal de la privatización ferroviaria: si la concesión de servicio no implica como finalidad principal y única la ejecución de obras nuevas o el mantenimiento de las existentes se aplicará por analogía el régimen legal de la concesión de obra pública, el que en cambio será obviamente directamente aplicable si se trata de una específica concesión de obra pública.-

En consecuencia del esquema legal descripto, y coherentemente con el mismo hemos visto como el Decreto Plan o Decreto Marco de Reestructuración Ferroviaria N° 666 del 1° de Septiembre de 1989; contiene e implica en su desarrollo normativo todas las formas de concesión descripta:concesión de servicios, integrales o parciales (art. 4); concesión de uso de bienes del dominio público, (art. 1° inciso "n"); concesión de obra pública (art. 1° inciso "e").-

De lo expuesto parece claro deducir que en general en materia de concesiones ferroviarias - y dado el crónico estado de obsolescencia que presentan las instalaciones y el material tractivo y rodante del sistema y la aguda desinversión que padece el mismo desde hace ya largos años- la mayoría de las concesiones no podrán ser exclusivamente de servicios debiendo en cambio adoptar alguna forma combinada que incluya también a la concesión de obra pública.-

Es claro que, como viene sucediendo hasta el momento, una iniciativa determinada en este aspecto puede originarse tanto en el propio estado que debe financiar los estudios del proyecto y alternativas para su realización y diseñar el pliego pertinente para el correspondiente llamado a licitación pública (ley 23696 arts. 11, 15, 17, etc.) y su Decreto Reglamentario N° 1105/89 (arts. 57 y 58).-

Pero la iniciativa puede también partir del sector privado proponiendo al Estado el proyecto, afrontando los costos de los estudios de factibilidad previos y sometiénndose oportunamente sin privilegios especiales y si el Estado al proyecto como de interés público; a procedimientos de selección abiertos para todos los

interesados, ya sea mediante licitación pública o mediante concurso de proyectos integrales (art. 58 inc. "i" Decreto Reglamentario 1105/89).-

Este esquema jurídico inicial de reformulación administrativa del sistema ferroviario; que necesario es ahora recordar no se agotó en el diseño de la ley 23696 y del Decreto Plan N° 666/89 en la mera privatización sino que incluye la implementación de la reestructuración ferroviaria por provincialización y/o municipalización; se ha visto ahora profundizado y descentralizado, no solo por el desdoblamiento del aparato administrativo y de explotación de la empresa Ferrocarriles Argentinos operativizado en relación a los servicios de pasajeros a partir de la creación de la empresa FE.ME.SA. (Decreto 502/91) sino además por la decisión política del Poder Ejecutivo de transferir definitivamente a las Provincias la casi totalidad de los servicios residuales que aún no estuvieran incluidos en un llamado a licitación (véase por ejemplo, en relación a la Provincia de Buenos Aires la nota N° 69 de fecha 4 de Febrero de 1992; originada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación por la cual se invita a la provincia a pronunciarse acerca de su interés en la transferencia de determinados servicios de pasajeros).-

Como la totalidad de los accesos ferroviarios directos o periféricos al Puerto Bonaerense de La Plata, se encuentran ubicados en el Área Metropolitana Buenos Aires; definida geográficamente por el art. 17 del dec. 502/91; cabe recordar lo dispuesto por el art.20 del referido decreto que otorga un plazo a FE.ME.SA. para proponer al Poder Ejecutivo el Plan de

Privatización de sus servicios, refiriéndonos sin embargo al marco legal de la ley 23696.-

Sin embargo cabe acotar que el art.1 del mencionado decreto 502/91 diseña a FE.ME.SA. como una sociedad anónima típica del derecho privado en los términos de los arts. 163 a 307 de la Ley 19550, que el art. 14 excluye expresamente a su respecto la aplicabilidad de los regímenes de las leyes de obras públicas, de contabilidad, de procedimientos administrativos y en general de las normas o principios del Derecho Administrativo y que los arts. 4 y 5 inc. 23 de sus estatutos sociales habilitan a FE.ME.SA. para llevar a cabo por sí o por intermedio de terceros o asociados ó asociada a terceros la explotación de sus servicios y a tal efecto a otorgar concesiones totales o parciales de sus obras o servicios.-

Si bien es cierto que FE.ME.SA. solo administra la explotación de los servicios de pasajeros en el Area Metropolitana Buenos Aires como el Decreto 502/91 le transfiere la totalidad de los bienes muebles e inmuebles afectados a la explotación, resulta claro que los transportes ferroviarios de carga que accedan a la zona portuaria de La Plata, deberán convenir con la misma (o con sus concesionarios en el futuro), y ya se trate de organismos provinciales u operadores privados también concesionarios; alternativas de peajes y tarifas por la utilización de la infraestructura a su cargo; convenios que dada la forma jurídica societaria de FE.ME.SA.; deberán ser preferentemente típicos acuerdos de derecho privado.-

Como puede verse el esquema institucional legal habilita una

intrincada y multifacética posibilidad de relaciones jurídicas entre los operadores ferroviarios de carga (sean provinciales por transferencias de servicios, o concesionarios directos privados de Ferrocarriles Argentinos) que decidan funcionalizar y operar los accesos ferroviarios a la zona del Puerto de La Plata y la misma Provincia de Buenos Aires o sus Municipalidades atravesadas por los ramales correspondientes; la empresa FE.ME. S.A. o sus futuros concesionarios cuando se utilicen lugares, vías u obras de la que la misma es titular exclusiva; y hasta aún con el Estado Nacional cuando se precise la utilización de lugares sometidos a la jurisdicción nacional; aunque claro está en este último aspecto el traspaso de los Puertos a la jurisdicción provincial bonaerense ha hecho casi desaparecer íntegramente esta última posibilidad.-

La casuística del tema impide una caracterización general y puntual; no obstante lo cual se sugerirán oportunamente algunos modelos posibles y alternativas de convenios.-

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE SITUACIONES JURIDICAS PUNTUALES
REFERIBLES A LA OPTIMIZACION DE LOS ACCESOS FERROVIARIOS AL
PUERTO DE LA PLATA.-

Atento a las características del tema estudiado por el presente informe resultan diversas y múltiples - en realidad no podrían ser abarcados en su totalidad, por la puntualidad de una individualidad multifacética que excedería ciertamente los marcos de nuestro objeto específico - las alternativas jurídicas que ofrece la posibilidad de optimizar y eficientizar los accesos ferroviarios al puerto de La Plata.-

Hay sin embargo dos situaciones puntuales que se interrelacionan estrechamente y cuya verificación y desarrollo operativo concreto dotan de sentido real y proporcionan metas tangibles a la viabilidad de informes como el presente; sin duda destinados a proponer y a sugerir cursos de acción determinados en temas específicos, a las políticas macroeconómicas nacionales y regionales insertadas en los marcos del nuevo modelo de desregulación económica y reestructuración administrativa que intenta poner término definitivo al crónico estado de postración económica y crisis de desarrollo; que sufre nuestro país desde hace tantos años.-

Nos referimos concretamente a :

- 1 * La implementación definitiva de la proyectada Zona Franca comercial e industrial en el puerto de La Plata ; sus consideraciones y antecedentes jurídicos, normativos e institucionales y;

2 * La reactivación y rehabilitación de los ramales ferroviarios actualmente clausurados que sirven en la zona de influencia del puerto de La Plata (de los que solo formularemos una enunciación general) y concreta y específicamente la del denominado "ex Ferrocarril Provincial" (técnicamente ramal P-1 de la línea General Belgrano) que unía la estación Avellaneda con la ciudad de La Plata; situación ésta que estudiaremos en particular, agregando además una propuesta de reprovincialización del mismo en los marcos de la ley 23696 y sus decretos reglamentarios y el modelo del acuerdo -convenio que podría suscribirse en tal sentido entre Ferrocarriles Argentinos y la Provincia de Buenos Aires.-

Como puede verse ambas cuestiones; implementación definitiva de la Zona Franca en el puerto de La Plata; y rehabilitación y reestructuración de accesos ferroviarios con alcance a la zona portuaria de dicha ciudad ; constituyen temas interrelacionados ; inescindibles e impensables separadamente o fuera de una política integral de reactivación industrial y económica a la que pueda servir un estudio de objeto como el del presente informe.-

1a.- LA DELIMITACION JURIDICA Y ECONOMICA DEL CONCEPTO DE ZONA FRANCA - ANTECEDENTES Y POSIBILIDADES DE IMPLEMENTACION DEFINITIVA DE UNA ZONA FRANCA EN EL PUERTO DE LA PLATA.-

En la idea y en el concepto de Zonas Francas debe

concretamente ubicarse la necesidad económica de establecer espacios geográficos perfectamente delimitados dentro de un territorio nacional, en el cual no rijan ni las reglamentaciones arancelarias ni aduaneras ni gran parte del resto de las tributaciones aplicables y vigentes en el resto del país; y para el cual se establecen, además, regímenes específicos de promoción y/o subsidios.-

El objetivo es generar un ambiente espacial de total y absoluta libertad económica con íntegra desgravación de aranceles de importación y exportación que propicie la multiplicación de los intercambios y transferencias comerciales desde y hacia el exterior; y en el que se favorezca la radicación de industrias estrictamente orientadas a la exportación.-

Las Zonas Francas pueden ser comerciales ; cuando simplemente se diseña un enclave dentro de un territorio aduanero nacional dentro del cual es totalmente libre de derechos de importación de bienes y materias primas las que pueden o no, ser sometidas a transformaciones poco significativas (embalajes, tareas de presentación, etc.) y cuya posterior exportación es igualmente libre de todo tipo de derechos y retenciones.-

Son además industriales (ZOFRIN , en la jerga técnica de los especialistas en comercio exterior) cuando lo que se propicia es la instalación, dentro del enclave, de empresas industriales en las que se elabora y transforma la materia prima y los bienes ingresados también libres de derechos y la exportación masiva de los productos elaborados también se efectúa libre de aranceles de exportación, retenciones y todo otro tipo de

tributos.-

A los efectos arancelarios aduaneros es normal considerar a las operaciones de ingreso o de egreso de mercaderías entre la Zona Franca (comercial o industrial) y el territorio nacional en el que se encuentra situado como operaciones típicas de importación o exportación según el caso y sujetas al régimen aduanero general.-

El estímulo al incremento de la actividad comercial o industrial dentro de la Zona Franca puede ser incentivado con medidas adicionales tales como subsidios (implícitos o explícitos); legislación laboral flexibilizada; tipos de cambio preferenciales; gastos de infraestructura a cargo del gobierno del territorio anfitrión, etc.).-

Las Zonas Francas se establecen e instalan en terrenos perfectamente cercados, circundados por controles y delimitados y aislados precisamente pero con fácil acceso a los distintos medios de transporte (puertos, aeropuertos y estaciones ferroviarias) resultando obvia, en tal sentido, la conveniencia de su instalación en zonas aledañas a los litorales marítimos y/o fluviales.-

En el interior de la Zona Franca no existen, como hemos dicho, ningún tipo de controles arancelarios ni aduaneros para la entrada y salida de mercadería ni tampoco impuestos internos ni contribuciones a favor del país anfitrión. La experiencia internacional indica genéricamente que las zonas francas industriales son habitualmente instaladas en países en

vías de desarrollo o con poco desarrollo industrial y bajo índice de urbanización y tecnología (es el caso de las instaladas durante la década del setenta en el Sudeste Asiático y a partir de 1982 en la zona del Caribe cuando el gobierno de E.U. generó un marco de preferencias comerciales para los países de dicha área al declarar a las exportaciones proveniente de los mismos libres de derechos y restricciones).-

Por el contrario, en áreas de gran desarrollo industrial y avanzado nivel tecnológico es mas frecuente la instalación de zonas francas exclusivamente comerciales enclavadas en las grandes concentraciones portuarias (Hamburgo, Nueva York, etc.) establecidas con el fin específico y puntual de optimizar al máximo y agilizar la rotación y velocidad del comercio exterior.-

Como resultados apreciables y verificables de las experiencias internacionales consideradas como antecedentes puede advertirse que sus resultados mas ostensibles consisten en :

- Una gran traslación y movilidad de empresas que tienden a radicarse en las zonas francas para aprovechar las franquicias arancelarias e impositivas.-

- Gran adaptabilidad empresaria a las cambiantes fluctuaciones de los mercados internacionales.-

- Poca incidencia en el nivel de protección de la industria doméstica del país anfitrión y escasa influencia negativa de las distorsiones económicas del mismo en las actividades exportadoras de las firmas instaladas en la Z.F..-

- Empleo intensivo de mano de obra no calificada o semi - calificada.-

- Posibilidad de capacitación para niveles gerenciales y de

administración provenientes del país anfitrión.-

- Empleo masivo de tecnologías poco especializadas.- g) Relativa radicación de capitales.-

- Saldos fiscales frecuentemente negativos para el país anfitrión.-

1b.- ANTECEDENTES JURIDICOS NORMATIVOS.-

La primera regulación normativa sancionada para delimitar el marco jurídico de una Zona Franca en el país fue la ley 5142 por la cual se autorizaba al P.E.N. para admitir en el puerto de La Plata ó en una zona delimitada del mismo un enclave de dichas características.

Sin embargo su no implementación efectiva en su momento y los formidables cambios que tanto en lo que se refiere al desarrollo tecnológico aplicable a la industria y al comercio cuanto a la propia inserción de nuestro país en el contexto del comercio internacional, han tenido lugar desde entonces ; determinaron, aunque nunca fuera derogada, su paulatina pérdida de funcionalidad hasta el dictado del decreto reglamentario n° 1868/91 que a continuación comentaremos.-

Fuera de ello, aunque sin tratamiento directo sobre el tema Zonas Francas pero con indiscutible incidencia en cuanto al desarrollo del comercio exterior, debe mencionarse a la ley 23101 de 1983; aclarando al respecto que la eliminación de todo tipo de subsidios exenciones y privilegios dispuestos por la ley de emergencia económica n° 23697, limitó casi absolutamente su significado práctico; relevando de la necesidad de su tratamiento

puntual.-

El antecedente normativo mas concreto lo constituye entonces el prealudido decreto n° 1868/91 que trató específicamente la creación, admisión y establecimiento (aún en vías de implementación efectiva) de una Zona Franca en el puerto de la ciudad de La Plata, compatibilizando al respecto -con las salvedades que mas adelante analizaremos -las jurisdicciones nacionales y provincial.-

En sus considerandos se menciona como fundamento de la iniciativa el impulso al comercio y a la actividad industrial exportadora como instrumentos de liberalización y crecimiento de la economía y la posibilidad de la Zona Franca a crearse de competir con otras de la región incorporándose al proceso de integración ; adelantándose que por el momento, y hasta el planeamiento de una política global al respecto, resulta aconsejable dar a la Zona Franca a crearse un inicial perfil comercial sin perjuicio de habilitar también, oportunamente la posibilidad de actividades industriales destinadas a la exportación.-

En el art.1° se define a la al contenido significativo de los conceptos de "Zona Franca La Plata" (el definido geográficamente por el Anexo 1° del decreto como zona potencial abarcaría espacios situados en los Partidos de La Plata, Berisso y Ensenada); Territorio Aduanero general (el correspondiente al resto del país, excepto :) ; Territorio Aduanero Especial (el definido por el art. 600 del Código Aduanero, aplicado p.ej. a Tierra del Fuego) Terceros Países.-

En el art. 4º se dispone que la Pcia. de Buenos Aires "...destina para su afectación exclusiva a la Zona Franca La Plata los terrenos de su propiedad que comprenden la totalidad de la superficie demarcada en el Anexo 1º ; los que constituyen la zona inicial en que operará la Zona Franca. Dichos terrenos son aptos, libres de derechos de terceros, fuera de litigio y desocupados para los fines previstos por la ley..."-Sin perjuicio de que existe el correspondiente acuerdo celebrado entre la Nación y la Pcia. de Buenos Aires (Anexo 2 del decreto) no puede dejarse de señalar la deficiente técnica jurídica que implica legislar en un decreto sobre jurisdicciones ajenas a la competencia del órgano que dicta el reglamento.-

Además y obviamente el dictado del decreto nº 817/92 del P.E.N. y la ley nacional nº 24.093 que transfieren definitivamente a la jurisdicción provincial determinados puertos - entre ellos el de La Plata - modifica sustancialmente el esquema jurisdiccional a aplicar al espacio territorial periférico al que se asienta la Zona Franca y sin perjuicio de que al respecto la autoridad nacional y específicamente en el ámbito estrictamente legislativo conservará la facultad delegada (arts. 67 y 104 C.N.) por las provincias al Congreso de la Nación de legislar con exclusividad en materia de aduanas comercio exterior y derechos de importación.-

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación a través de la Subsecretaría de Industria y Comercio (art.9º); la Administración General de Aduanas dictará las reglamentaciones

pertinentes a fin de simplificar y agilizar los trámites aduaneros (art.11*) pero el Organo de Administración y Explotación de la Zona Franca será un organismo público estrictamente provincial integrado por representantes del Poder Ejecutivo provincial y de las Municipalidades de La Plata, Berisso y Ensenada (art. 14*).-

La explotación se ofrecerá en concesión por licitación pública a empresas de carácter privado o mixto; quedando a cargo del concesionario el financiamiento de las obras de infraestructura necesarias para el funcionamiento de la Zona Franca (art. 12*).- El Organo de Administración y Explotación será el responsable de redactar el pliego de bases y condiciones correspondientes a la licitación pública referida y tendrá a su cargo la elaboración del Reglamento de Funcionamiento ; la administración y el control del funcionamiento y la adjudicación al concesionario de la Zona Franca (art.15).-

Se establece como actividad principal inicial de la Zona Franca las específicamente comerciales (conservación, presentación, acondicionamiento para el transporte y transferencias de mercaderías) postergándose para una segunda etapa la autorización para actividades industriales destinadas a la exportación (art.21*); desregulándose a su respecto todo el régimen arancelario aplicable a las operaciones de comercio internacional (art.22*) y previéndose el dictado de un régimen excepcional de desgravaciones impositivas específicas (art.23*).-

Las mercaderías que ingresen a la Zona Franca son libres de derechos de importación (art.24*) y las que salgan son libres de derechos de exportación (art. 25*) considerándose

importaciones o exportaciones; según el caso; el flujo de mercaderías entre la Zona Franca y el Territorio Aduanero General.-

Como puede apreciarse, se trata de una Zona Franca exclusivamente comercial que se encuentra en plena etapa de implementación funcional; y aunque resulta prematuro conjeturar ahora sobre la eficacia de su funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos que presidieron su planificación; resulta sin embargo obvio que una vez efectivizada su plena implementación operativa, será de la mayor importancia contar con accesos ferroviarios directos a la misma que posibiliten una adecuada, ágil y eficiente traslación y transporte de las mercaderías que se transfieran y comercialicen en la Zona Franca.-

2.- ANALISIS DE LA ACTUAL SITUACION JURIDICA DEL RAMAL FERROVIARIO "AVELLANEDA - LA PLATA" PROYECTANDO AL MISMO TIEMPO UN MODELO JURIDICO PARA SU TRANSFERENCIA AL AMBITO PROVINCIAL.

2A.- Breve reseña histórica :

El ferrocarril provincial de Buenos Aires (La Plata a Meridiano V), fue construido por el gobierno provincial, de acuerdo con la ley de su legislatura del mes de octubre de 1907, que autorizó al trazado de una línea del puerto de La Plata Meridiano V, con varios ramales. Entre los años 1912 y 1914 se libraron al servicio público los primeros 460 kilómetros, atravesando Brandsen, General Paz, Cañuelas, Monte, Saladillo, 25 de Mayo, Nueve de Julio, Pehuajó, Trenque Lauquén, Olavarria y Azul.

El ferrocarril del título abarcaba las siguientes líneas y ramales :

Ramales : - Buenos Aires - Riachuelo
- Villa Madero - Mercado de Liniers
- Gonzalez Catán - Fuerto La Plata
- Villars - General Villegas
- Patricios - V. de la Plaza

Líneas : - Puente Alsina - Carhué

Ramal : Puente Alsina - Intercambio con ferrocarril Oeste.

Línea : La Plata - Mira Pampa

Ramales : La Plata - Avellaneda
Berguerie - Loma Negra
Ariel - Miñano
Miñano - Sierra Chica

En 1951 se dicta el Decreto Nro. 20549 (B.O. 5-10-54), ratificado por la ley provincial 5791/54 por la cual se traspasa a la Nación el ferrocarril Provincial de Buenos Aires.

A través del tiempo y luego del mencionado traspaso se le fueron realizando clausuras y levantamientos, a saber :

Ramales : Villa Madero - Matadero

Etcheverry - La Plata

Patricios - Villegas

Patricios - V. de la Plaza

Línea : Elías Romero - Carhué

Etcheverry - Mira Pampa

Ramales : - La Plata - Gobernador Monteverde

- Berquerie - Loma Negra

- Ariel - Miñano

- Miñano - Sierra Chica

En consecuencia. actualmente se
encuentran habilitados :

Línea : La Plata - Etcheverry

Ramal : Avellaneda - Gobernador Monte Verde

Ramal : Gonzalez Catán - Etcheverry

Línea : Puente Alsina - Elías Romero

Ramal : Puente Alsina - Intercambio Midland

Debe tenerse presente que por Decreto
Nro. 502/91 y ampliatorio res. S.S.T. Nro. 145/91 de fecha 3-6-91,
desde fecha 1-4-91 dependen de Ferrocarriles Metropolitanos S.A.

2b) SITUACION JURIDICA - ANTECEDENTES LEGALES - DOCTRINA

Se hace necesario precisar que el análisis propuesto, debe ser encuadrado dentro del proyecto de desarrollo y reforma integral del rol del Estado, que se viene produciendo a partir del año 1989.

- El avance del Estado Nacional por sobre las autonomías provinciales :

Hace falta expresar que el permanente proceso de centralización política, administrativa y económica (moneda corriente en la vida institucional de nuestro país), aquél que posibilitó el avance de un Estado macrocéfalo y poderoso sobre áreas de específica competencia provincial, aquel en el que el funcionamiento ineficiente y totalizante del Estado, asfixió la capacidad y potencialidad productiva, es el que atentó y burló los principios proclamados por nuestra Carta Magna, en los que se basaron la descentralización, la desestatización y la participación efectiva y protagonista de las provincias y competencias regionales.

En orden a estas ideas debe advertirse que el federalismo debe ser y es la base del proceso de reformulación administrativa con el que convivimos en la actualidad.

Y es así como la ley 23.696, de emergencia administrativa y de reestructuración de empresas públicas, admite expresamente tanto la iniciativa estatal, como la privada, en el desarrollo de la reformulación del Estado, posibilitando de esta manera convenios entre la Nación y las

Provincias.



Establece a su turno, clara y concretamente, cuales son las empresas (entre ellas el transporte ferroviario de cargas) y áreas del Estado sujetas a privatización y reforma.

Asimismo, del decreto 666/89. surge, conforme al art. 1ro., inc. b), que se ordena a la intervención de Ferrocarriles Argentinos "... reordenar el plan de inversiones.. en particular en relación al incremento del transporte de cargas"; y en su art. 4to., se dispone la modalidad de la concesión integral para líneas o sectores de la red ferroviaria nacional, y en caso de no ser posible, concesiones parciales.

Es decir, establece un mecanismo de reordenamiento integral del servicio, tendiente a efectivizar y optimizar sus prestaciones. Ya en sus mismo considerandos se define como uno de sus objetivos, el aumento de la participación del modo ferroviario en la movilización del tráfico de cargas.

A su vez, en el art. 1ro., inc. j, se establece la promoción del aporte de material tractivo y remolcado para la explotación del servicio de carga.

Estipula claramente además, objetivos como la provincialización y municipalización de ramales.

A su turno, la ley orgánica de ferrocarriles argentinos, nro. 18360, en su art. 4, inc. x),

permite a la empresa "Dirigirse, gestionar y contratar en forma directa con las provincias, municipios y organismo nacionales, provinciales y municipales.

Por otro lado y como ya quedara expresado, el ramal que da origen al presente estudio, desde el 1-4-91, pasó a depender de FE.ME.S.A.

- Contratos Administrativos :

Para Bielsa, "es con trato administrativo al que la administración pública celebra con otra persona pública o privada, física o jurídica, y que tiene por objeto una prestación de utilidad pública"

A su vez. Díez, llega a definir el instituto que nos ocupa, diciendo que el contrato administrativo "es una declaración de voluntad común de un órgano de la administración pública que actúa por el procedimiento de gestión pública y de un particular, destinada a regular relaciones jurídicas patrimoniales".

Marienhoff enseña, con acierto, que para el logro de sus fines administrativas, el Estado, por medio de la administración pública, actúa en dos formas distintas : o ejerce por sí mismo la actividad respectiva, o requiere el administrado o particular para que colabore con él, generándose, en este último caso, los contratos de la administración pública.

Fera la administración puede generar

dos tipos de contratos : administrativos, propiamente dichos, y de derecho común (civil o comercial), integrando esas dos categorías el género "contratos de la administración pública". reconoce asimismo la existencia de los contratos administrativos, ya sea que los haya celebrado la administración con otros entes administrativos, ya sea que los haya celebrado con los particulares. En mérito a lo dicho define el mencionado autor a los contratos administrativos como : "El acuerdo de voluntades, generador de obligaciones, celebrado entre un órgano del Estado en ejercicio de las funciones administrativas que le competen, con otro órgano administrativo o con un particular o administrando, para satisfacer finalidades publicas.

Se dice además que el acuerdo de voluntades puede tener lugar entre un órgano estatal "con otro órgano estatal o con un particular o administrado", esto obedece a que los contratos administrativos pueden celebrarse entre entes públicos o entre un ente público y un administrado o persona particular.

Por último, establece que el contrato se celebre "para satisfacer finalidades públicas"; dado que la finalidad pública puede lograrse en forma directa o inmediata (ej. concesión de servicio público), y también en forma mediata o indirecta (ej. concesión de uso del dominio público), en virtud de esto utiliza una expresión genérica, comprensiva de las dos hipótesis. Es decir entonces, que no todos los contratos administrativos tiene en cuenta el servicio público, stricto sensu, ni la utilidad pública, pues bien puede tratarse de la utilidad privada, en la cual se otorga inmediata y directamente en

interés privado del concesionario; vale decir, que no hay servicio público ni utilidad pública, al menos "directa e inmediata".

- Dominio Público :

Continuando con la opinión de Marienhoff, el dominio público consiste, en síntesis, en una masa o conjunto de bienes. Estos, por los fines que con ellos se tiende a satisfacer, se hallan sometidos a un régimen jurídico especial de derecho público. La determinación de lo que ha de entenderse por dominio público depende de cada ordenamiento jurídico, pues cada uno de estos contiene, notas particulares que en ese orden de ideas lo distinguen de otros ordenamientos jurídicos. No es creación de la naturaleza; no hay bienes públicos naturales o por derecho natural. El dominio público es un concepto jurídico, se existencia depende de la voluntad del legislador; una cosa o bien puede revestir carácter público en un país dado, mientras que en otro país esa misma cosa puede constituir un bien privado.

- Concesión de Uso :

Para Marienhoff la concesión de uso es uno de los medios que la ciencia jurídica ofrece o dispone para el otorgamiento de derechos especiales de uso sobre dependencias del dominio público. En la concesión de uso no hay transferencia o delegación de facultades de la Administración Pública, o de un ente público, a un ente privado, sino exclusivamente la mera atribución de un poder jurídico especial sobre la respectiva dependencia pública. Consiste en la creación de un (poder jurídico) en favor del concesionario.

- Caracteres :

a) Dado el fin en cuyo mérito se otorgan las concesiones de uso, salvo previsión expresa, pueden ser transferidas sin conformidad del concedente.

b) La concesión de uso es bilateral, pues para su existencia o formación es esencial la concurrencia de la voluntad del concesionario o administrado. Sin la voluntad de éste no es posible concebir la existencia de la concesión.

Crea derechos y obligaciones recíprocas entre concedente y concesionario (la obligación del Estado será la de permitir el uso al concesionario de la respectiva porción de cosa dominical; y la del concesionario será la de contribuir al aumento de la riqueza o del bienestar pública mediante el adecuado uso del bien dominical)

c) La duración de la concesión de uso del dominio público puede ser temporaria o perpetua según principios de política y de criterio legislativo. La mayor o menor duración de la concesión no influye en su naturaleza; por ende la misma puede ser otorgada por pocos años, por muchos años o a perpetuidad, (en cuanto a esta última es indispensable aclarar que la concesión no traduce enajenación alguna de la dependencia dominical, lo concedido es sólo el uso de éste. Las concesiones no son traslativas de dominio; son meramente constitutivas de un derecho de uso).

d) La gratuidad u onerosidad no corresponden a la esencia del dominio público, por su naturaleza puede ser gratuita u onerosa.

De esta forma puede establecerse a cargo del concesionario una obligación económica, que habitualmente consiste en el pago de una suma de dinero (llamada casos), pero en algunos casos puede aparejar, además, una obligación en especie.

e) La concesión de uso es otorgada en interés privado o particular del concesionario, apareciendo de esta forma el interés público o general atendido sólo en forma indirecta o mediata (esto se da a través del uso acertado que el concesionario haga de la concesión y como consecuencia del beneficio particular que obtenga el concesionario). Es por todo esto que la concesión sólo se otorgará si no se contrapone con el destino de la respectiva cosa dominical.

f) De la concesión nace para su titular un derecho patrimonial protegido por las garantías consagradas en los arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional.

g) Para poner en ejercicio su derecho a la concesión de uso, el concesionario debe generalmente realizar obras o instalaciones, cuya condición legal, según la uniformidad de la doctrina, es que esas obras le pertenecen en propiedad; pero no constituyen bienes regidos por el derecho privado, sino por el derecho público.

h) Toda concesión de uso debe ser otorgada con la cláusula "sin perjuicio de terceros" que permitirá poner término al agravio patrimonial causado por la nueva concesión, a intereses de terceros afectados.

i) La concesión de uso se extingue por las siguientes causales :

- nulidad : se relacionan con el acto que origina la concesión y es contemporánea a la formación de dicho acto. En consecuencia la concesión será nula si en su fondo o en su forma viola preceptos legales.

- vencimiento del término : es la forma mediante la cual el contrato se extingue al expirar o vencer el término por el cual se concedió.

- caducidad : esta causal procede cuando el concesionario incumple las obligaciones a su cargo, pero siempre y cuando dicho incumplimiento le sea imputable.

- renuncia : el principio general o regla jurídica que posibilita este modo de extinción se basa en que cada cual puede renunciar a sus derechos patrimoniales. Asimismo en ese tipo de contrato el interés público sólo resulta considerado en forma indirecta o mediata y directamente en el interés privado o particular del concesionario. Como acto jurídico, la renuncia idónea para extinguir por sí el contrato, es unilateral. Produce efectos extintivos por sí misma y no requiere aceptación por parte del Estado, (que no obstante debe ser notificado de tal acto)

- rescisión : entiéndase por tal al acto emitido en forma conjunta por las partes poniendo fin al contrato (rescisión bilateral); como así también el realizado por una de las partes o el que se dicte a pedido de una de éstas, debido a hechos, comportamientos, o conductas de la otra que conforme al derecho aplicable permiten la terminación del contrato (rescisión unilateral).

- revocación : es un modo excepcional, verdaderamente anormal, sólo procede en supuesto de discordancia entre el acto y el interés público o la violación originaria del orden jurídico positivo. Es sólo un medio para corregir ciertos males; pero los males nunca pueden integrar la normalidad del acto; lo normal es el acto correcto, el acto sin irregularidades.

Es la extinción de un acto dispuesta por la propia administración, para satisfacer actuales exigencias del interés público o para restablecer el imperio de la legitimidad.

Por último, la concesión puede finalizar por la extinción de la cosa (objeto del contrato).

2c) PROYECTO DE CONVENIO :

De conformidad a los presupuestos y marcos jurídicos comentados y sobre la base de los antecedentes preexistentes, ubicados en los organismos públicos consultados (gerencia de la Línea Belgrano de Ferrocarriles Argentinos, Secretaría de Transporte de la Nación y Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires) se diseña el siguiente proyecto de modelo de convenio a celebrarse entre Ferrocarriles Argentinos y FE.ME.S.A. por el Gobierno Nacional y la Provincia de Buenos Aires para la concesión de uso de Ramal Avellaneda-La Plata para el transporte de cargas.

PROYECTO DE CONVENIO

ENTRE ----- REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU -----
----- CON DOMICILIO EN -----
-----EN ADELANTE "LA EMPRESA" Y LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES;
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL -----
EN ADELANTE "LA PROVINCIA", SE ACUERDA :

ARTICULO 1ro. : "LA EMPRESA", concede a "LA PROVINCIA" en las condiciones establecidas en el presente contrato, el uso del Ramal P. 1 del Ferrocarril General Belgrano que une las Estaciones AVELLANEDA y LA PLATA en la Provincia de Buenos Aires, en las condiciones de infraestructura que se consignan en Anexo I - cartografía general indicativa del trazado - Anexo II - inventario general de infraestructura, instalaciones e inmuebles - para la prestación del transporte de carga con arreglo a las normas legales vigentes en la materia, que resulten aplicables. El Inventario General según anexo II se efectuará a posteriori de la firma del presente convenio y pasará a ser parte integrante del mismo con iguales alcances y efectos.

Asimismo y previo estudio por parte de la Comisión Técnica creada según artículo 2do., en un lapso que no deberá exceder los ----- días a partir de su creación, "La Empresa" otorgará permiso de uso compartido sobre infraestructura e instalaciones necesarias para que los servicios de transporte de carga tengan acceso a Capital Federal y estación La Plata P. (ramal P.1), desde km. a km. , para ello la citada Comisión Técnica analizará la alternativa más conveniente.

"La Empresa" otorgará a "La Provincia" el derecho a explotar los

espacios y/o inmuebles en jurisdicción de "La Empresa" integrantes del ramal P. 1, indicados en los anexo I y II con sujeción a las normas de seguridad vigentes, que resulten aplicables.

La entrega a "La Provincia" de la tenencia de los inmuebles en jurisdicción de La Empresa integrantes del Ramal P. 1, concedido en uso, es un accesorio del objeto principal del contrato - transporte ferroviario de carga- y se efectuará conforme a las particularidades que se establezcan. En consecuencia, los inmuebles de que se trata deberán devolverse a La Empresa libre de ocupantes, en la oportunidad del vencimiento del Contrato, o antes, si el mismo es rescindido, según convención específica del artículo 29, La Provincia podrá solicitar a La Empresa revisión de aquellas decisiones que impliquen desafectación, realizadas o en gestión, de inmuebles en jurisdicción de La Empresa e integrantes del Ramal P. 1.

La Empresa podrá disponer la desafectación y ventas de terrenos integrantes del ramal que no resulten necesarios.

Será de responsabilidad exclusiva de la Empresa cumplir todos los trámites por transferencias realizadas con anterioridad al convenio.

Se excluyen del presente convenio los terrenos adyacentes a estaciones o zona de vía afectados a enlaces o cruces con otras líneas o ramales.

ARTICULO 2do. : Entre La Empresa y La Provincia se acuerda integrar una Comisión Técnico-Jurídica que entrará en funciones dentro de los ----- días de firmado por las partes el presente convenio, la que tendrá como objetivo primordial al estudio y análisis de propuestas para la posterior aprobación de las mismas por parte de las autoridades competentes de La Empresa y La

Provincia. Dicha Comisión tendrá carácter permanente durante la vigencia del mismo. Sus facultades e integración quedarán determinadas en su propio Reglamento de Funcionamiento, el cual una vez aprobado, pasará a formar parte integrante del presente convenio con sus mismos alcances y efectos.

La misma estará integrada por representantes de cada parte a designar por La Empresa y La Provincia, respectivamente.

Además de lo establecido explícitamente para su intervención en el presente convenio, serán atribuciones de la comisión técnico-jurídica.

2.1. Dictarse su propio reglamento de funcionamiento, atendiendo expresamente al espíritu de conciliación en la interpretación y objetivos contenidos en el presente convenio como también como también estudiar la ampliación o mejoras a las condiciones en el establecidas, ad referendum, de las autoridades de La Empresa y La Provincia, para lo cual dispondrá de un plazo máximo de ----- días.

2.2. Realizar el inventario general de la infraestructura, instalaciones e inmuebles, dentro de los ----- días a partir de la fecha de firma del presente convenio, el que será agregado el mismo como anexo II con sus mismos alcances y efectos.

Dicho inventario deberá describir y expresar en cantidad y calidad todo lo incluido, dejando establecido además la forma y grado de compromiso de ocupación o cesión cuando se trate de espacios, terrenos, locales, edificios, etc. en manos de terceros o dependientes de La Empresa.

2.3. Será la depositaria de las cosas que integran el inventario general de infraestructura e instalaciones e inmuebles, hasta tanto se resuelva la aprobación legislativa, en ambas jurisdicciones, del presente convenio (art. 27, inc. 1 y 2).

2.4. Analizar las diferentes alternativas o propuestas para que los servicios de transporte de carga a prestar a través del ramal P. 1, tengan una conexión fluida y dinámica con terminales en Capital Federal y/o cualquier otro centro de interese beneficio de sus usuarios, determinando la forma y metodología más conveniente y apropiado para ambas partes.

2.5. Entender y proponer sobre cualquier cuestión de orden técnico o jurídico que implique dificultad de definición o apreciación en los compromisos contraídos entre La Empresa y La Provincia en el presente convenio.

2.6. Estudiar y proyectar acciones conducentes al normal y buen funcionamiento de los servicios prestados sobre el ramal P. 1, cuando aquellos excedan el marco del presente convenio de concesión de uso, otorgado por La Empresa y La Provincia con sujeción a las normas vigentes en ambas jurisdicciones.

2.7 Estudiar y sugerir propuestas de transferencia definitiva de dominio a favor de La Provincia, sobre inmuebles propiedad de La Empresa cuando La Provincia tenga previsto para los mismos otros usos ajenos a los fines del presente convenio, atendiendo a lo establecido en la ley 18360 y ratificado por las leyes 23696, 23697 y decreto del P.E.N. 666/89.

Estudiar las condiciones técnico-operativas en que se habilitará la circulación de los trenes de La Provincia en las vías de uso compartido, definiendo las implementaciones que sean necesarias para adecuar sus condiciones de seguridad a las reglamentaciones vigentes.

ARTICULO 3ro. Tanto la explotación del servicio ferroviario como el de los espacios previstos en el artículo 1ro., podrán ser efectuados total o parcialmente por La Provincia en forma directa o por media de terceros a contratar por La Provincia en condición

de subcontratista, sin opción de transferencia del presente contrato.

En todos los casos la responsabilidad de La Provincia sustituirá la responsabilidad de La Empresa tanto por el cumplimiento del contrato como por todas sus consecuencias, con relación a terceros y por todos los actos que La Provincia ejecute, además de la responsabilidad solidaria del subcontratista en la parte correspondiente a la subcontratación.

ARTICULO 4to. La Empresa concede a La Provincia y ésta recibe instalaciones, espacios inmuebles, integrantes del ramal P. 1, en el estado de conservación y ocupación en que se encuentren y que La Provincia conocer y acepta de conformidad.

En el caso de publicidad, concesionarios, permisionarios o arrendatarios de carácter comercial, La Provincia subrogará a La Empresa hasta el vencimiento de los plazos contractuales, cumplidos los mismos la primera, podrá contratar por su cuenta y riesgo nuevos convenios hasta el vencimiento del plazo de la concesión. Idéntico temperamento se adoptará con las renovaciones en trámite a la fecha del presente.

Los inmuebles que a la fecha de este convenio se encuentren cedidos para parquizaciones a entidades privadas y oficiales, responden a un tipo de cesión estrictamente precaria y rescindible a un plazo de ----- días, en la que es condición principal la prohibición de efectuar instalaciones fijas, asumiendo La Empresa la responsabilidad para las comunicaciones pertinentes a sus ocupantes y su consecuente desocupación. Idéntica responsabilidad asume La Provincia al vencimiento del convenio. La Empresa en su carácter de propietaria colaborará el desalojo de terceros intrusos, o con ocupación ilegal, ala fecha del presente, en jurisdicción del Ramal P. 1. ARTICULO 5to.

La realización de mejoras, nuevas construcciones, nuevas paradas, adaptación de instalaciones existentes, reconstrucción de la instalación o infraestructura de vías levantadas o desmanteladas, incluyendo los materiales necesarios correrán por exclusiva cuenta de La Provincia y respetarán los gálibos para circulación del material rodante de la Empresa. La provisión de rieles y aparatos de vías faltantes, con más la cantidad de ellos necesarios para poner en funcionamiento los servicios ferroviarios al momento de realizarse el inventario citado en el art. 1ro. del presente, será efectuado por la Empresa, en lugar a convenir entre las partes. La Provincia por sí o por terceros diseñará y ejecutará todas las obras civiles, de señalización, barreras, etc., que sean necesarias para una adecuada y eficiente prestación. Asimismo, se hará cargo de la operación y mantenimiento de todas las obras a las que se refiere este artículo.

ARTICULO 6to. La provisión de todo el material rodante, tractivo o remolcado, para el servicio a prestar por La Provincia será de su exclusiva competencia y cargo.

El material rodante de La Provincia que deba circular por vías de uso compartido y otras de FERROCARRILES ARGENTINOS y/o FE.ME.S.A. deberá cumplir con las condiciones técnicas vigentes en La Empresa al momento de vigencia del presente convenio.

ARTICULO 7mo. Todos los gastos que demanden la explotación de los servicios, mantenimiento de infraestructura y material rodante, de los sistemas de señalización y control será por cuenta de La Provincia, en todo lo que corresponda al Ramal P. 1 mientras tenga vigencia el presente convenio.

ARTICULO 8vo. Mientras tenga vigencia el presente convenio, en caso de ser necesario la renovación del material de vías por mantenimiento, los gastos producidos por ello serán asumidos por

La Provincia.

ARTICULO 9no. El alistamiento y el mantenimiento preventivo (y toda otra reparación) será realizado por La Provincia.

Las reparaciones será realizadas en el lugar que el tipo de reparación a efectuar requiera. A estos efectos La Empresa permitirá la libre circulación del vehículo o vehículos desde el ramal en explotación hasta el mencionado lugar.

En lo referente a la inspección y habilitación del material rodante, ambas partes se reservan el derecho de intervenir en estos aspectos cuando el material rodante de que se trate efectúe servicios en la red de la otra.

ARTICULO 10mo. Se deja expresamente establecido que la totalidad del material rodante, de tracción o remolque provisto por La Provincia o sus concesionarios, en cualquiera de sus formas posibles, una vez extinguida la relación contractual, sea por el transcurso del término previsto en el mismo o por cualquier otra causa, continuará siendo propiedad de La Provincia.

ARTICULO 11ro. En relación a la vigencia y aplicación del Reglamento General de Ferrocarriles y el Reglamento Interno Técnico Operativo, La Provincia hace suya la opción establecida por el decreto 9 del decreto Nro. 666/89 del P.E.N. sobre los mismos.

ARTICULO 12do. La Provincia asume la responsabilidad de mantener libre de desperdicios la zona de vías, como asimismo controlará la apertura de pasos peatonales clandestinos que impidan la normal circulación de los trenes.

ARTICULO 13ro. Los horarios y las tarifas del servicio serán de exclusiva competencia de La Provincia.

Será por cuenta exclusiva de La Provincia la provisión de combustibles y lubricantes y todo otro insumo necesario para la

realización del servicio.

ARTICULO 14to. La Provincia deberá tramitar y obtener las autorizaciones, licencias, permisos y/o habilitaciones que correspondan, de cualquier origen y jurisdicción, sobre las actividades objeto del presente convenio y dar cumplimiento a todas las normas vigentes en la materia. Cuando estos trámites deban ser efectuados ante La Empresa, ésta se compromete a dar a las mismas preferente atención, para su rápido diligenciamiento.

ARTICULO 15to. La Provincia y la Empresa acordarán dentro del marco de las reglamentaciones y usos técnicos vigentes, la oportunidad y metodología aplicable en el caso de obras de terceros que deban ser efectuadas en sector objeto de la presente concesión.

ARTICULO 16to. El personal necesario, que se determine, para la explotación de los servicios, estarán en relación de dependencia con La Provincia o de los terceros a quien ella contrate o conceda los servicios a prestar.

El personal existente a la fecha de firma del presente convenio en el sector concedido y dependiente de La Empresa deberá ser incluido dentro de lo establecido en la ley nro. 23.696 y su decreto reglamentario, salvo que La Empresa decida lo contrario. La Provincia asume la total responsabilidad de todo lo que concierne a las relaciones de trabajo entre ella y sus dependientes sea en relación de dependencia o contratados.

La Provincia asume toda responsabilidad por todo tipo de reclamos originados en accidentes de trabajo, sea que estos se canalicen por vía de la ley 9688 o su modificatoria o por la de derecho común al personal con relación de dependencia de La Provincia.

ARTICULO 17mo. La Provincia deberá contratar por sí o exigir a quien o quienes presten el servicio y/o realicen la explotación de

los espacios, contraten y se mantengan vigentes y actualizados durante toda la duración del presente, seguros que cubran como mínimo.

a) responsabilidad civil sobre todos los riesgos vinculados con personal transportado, personas no transportadas, cosas transportadas.

b) incendio con adicionales, derrumbe, explosión, etc. que cubra la totalidad de las construcciones realizadas y/o a realizar.

c) Responsabilidad por daños a La Empresa, terceros, dependientes por la prestación del servicio y/o explotación de las tierras.

d) Accidentes de trabajo, enfermedades, accidentes y/o los reclamos fundados en la ley 9688 o su modificatoria.

ARTICULO 18vo. La Provincia asume la total responsabilidad por daños a La Empresa o a terceros, personas, bienes muebles o inmuebles, semovientes que pudieran sobrevenir por la utilización, explotación y circulación de los servicios objeto del presente convenio, dentro de la jurisdicción del artículo 1ro., para el ramal P. 1

ARTICULO 19no. La Empresa asume la total responsabilidad por daños o siniestros causados a terceros, sean personas, bienes muebles o inmuebles, o semovientes, al personal dependiente de La Provincia y/o sus concesionarios y/o los bienes de que se sirve la misma en la ejecución de la prestación de sus servicios, cuando aquellos ocurran por imprudencia, o error o culpas de maniobras inadecuadas o fallidas, por problemas técnicos derivados de esas maniobras o por falta de un adecuado mantenimiento de infraestructura de vías, aparatos de vía, equipos de señalización, etc. pertenecientes a los sectores de uso compartido según el artículo 1, o bajo su control operacional dentro de los sectores a utilizar por los servicios prestados por La Provincia o sus concesionarios.

ARTICULO 20mo. La Provincia asume la responsabilidad por los daños que ocasione en las vías, pasos a nivel, accesos y otras instalaciones, en los sectores bajo su jurisdicción en los términos del artículo 3ro. para el P. 1, por el uso y circulación de sus trenes y/o vehículos o los que de su concesionarios, o los que ocasione a sus clientes o posibles irregularidades en el cumplimiento de los servicios.

ARTICULO 21ro. La Empresa no asume ninguna responsabilidad por insuficiencia de señalización vial en los pasos ferroviarios, o por daños, siniestros y otros perjuicio que pudieses acaecer a terceros, a los integrantes de La Provincia y/o sus dependientes y/o a los bienes de que la misma se sirve, en la ejecución de las prestaciones que son objeto del presente convenio, siempre y cuando ello ocurra en jurisdicción del ramal P. 1.-

ARTICULO 22do. Se considera fuerza mayor o caso fortuito eximente de responsabilidad para ambas partes, a todos aquellos hechos o actos previstos como tales por el Código Civil y la Jurisprudencia de los Tribunales competentes.

ARTICULO 23ro. La Empresa deberá informara La Provincia cualquier inconveniente que afecte a la infraestructura de los sectores bajo su control, en cuanto estos se produzcan, indicando también en cuanto tiempo estima poder subsanarlo, cuando el inconveniente ocurra en los sectores o instalaciones de uso compartido.

ARTICULO 24to. El plazo de duración del presente convenio será de ----- días contados a partir de la fecha de toma de posesión por parte de La Provincia de los bienes e instalaciones.

La tomade posesión se hará efectiva dentro de los ----- días de la aprobación legislativa, en el presente convenio.

Las partes con ----- meses de antelación al vencimiento del presente convenio, podrán acordar su renovación.

Asimismo podrá, cualquiera de las partes denunciarlo con una anticipación no menor de ----- meses a la fecha de terminación del convenio.

Si en el término de ----- contado a partir de la fecha de firma del presente convenio, no se contase con la aprobación legislativa a que se hace referencia en en según párrafo del presente, el mismo queda sin efecto.

ARTICULO 25to. La Provincia se hace responsable de las situaciones dominiales derivadas de ocupaciones indebidas, asentamientos de intrusos y usurpaciones que pudieran suscitarse durante el periodo que comprende el convenio.

En los inmuebles adyacentes y/o aledaños de propiedad de La Empresa en los cuales se otorga la explotación a La Provincia, esta se hará cargo de la construcción, m reparación y/o renovación de los cercos, alambrados divisorios, etc. a lo largo de la zona de vías que establece la ley 22.647, art. 1ro., punto 7).

ARTICULO 26to. La Provincia o sus concesionarios, deberán hacerse cargo de abonar todos los impuestos, tasas, derechos, aranceles que correspondan, que graven el objeto del presente convenio y que no se encuentren comprendidos en normas de exención, y que tengan relación con los servicios prestados y/o tierras y espacios cedidos a partir del momento de toma de posesión.

ARTICULO 27mo. La Empresa autoriza a La Provincia a realizar los estudios y el proyecto para la vinculación, en el Municipio de Florencio Varela, entre la Línea General Roca con el Ramal P. 1, tendiendo a establecer en Gob. Monteverde una estación y Playa de Cargas Generales.

Convenida la factibilidad, realizado el proyecto y previa aprobación del mismo junto con el correspondiente cronograma, por parte de la Comisión Técnica designada, La Provincia quedará

facultada para ejecutar las obras necesarias y a su exclusivo cargo.

Oportunamente y dentro del marco acordado en el presente convenio, entre La Empresa y la Provincia se convendrá la forma de compartir la explotación de dichos servicios.

En la eventualidad de encarar La Provincia la rehabilitación del Sector Gob. Monteverde a La Plata, deberá tener en cuenta la necesidad de adecuar los cruces a desnivel con líneas electrificadas ajustándolos a las condiciones técnicas vigentes.

ARTICULO 28vo. En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en -----
----- a los----- días de -----

-- oOo --

Anexo Documental Normativo.

- 1.- Ley 18360 - del 17/9/69.
- 2.- Ley 23696 - del 17/8/89.
- 3.- Decreto Reglamentación 1105/89
20/10/89.
- 4.- Decreto 666/89 - 1/9/89.
- 5.- Resolución F.A. 156/89 - 28/12/89.
- 6.- Decreto 502/91 - 25/3/91.
- 7.- Decreto 1141/91 - 11/6/91.

1.- LEY 18.360.- (*)

Ferrocarriles Argentinos - Funcionamiento - Régimen legal.-

Sanción y promulgación: 17 de setiembre 1969.

Publicación: B.O. 25/IX/69.-

Art. 1° - La empresa que se denominará Ferrocarriles Argentinos (F.A.) tendrá la capacidad de las personas de derecho privado, con autarquía en el ejercicio de su gobierno administrativo, técnico, comercial, industrial y financiero, de conformidad con las normas de los Códigos Civil, de Comercio y de la presente ley. En sus relaciones con el Poder Ejecutivo actuará por intermedio de la Secretaría de Estado de Transporte.-

Art. 2° - Ferrocarriles Argentinos tendrá su domicilio en la ciudad de Buenos Aires, pudiendo establecer representaciones o agencias en cualquier punto del país o del extranjero.-

Art. 3° - Ferrocarriles Argentinos tendrá por objeto la explotación de los ferrocarriles de propiedad nacional, pudiendo desarrollar las actividades complementarias o subsidiarias que le resulten convenientes. Le corresponde también todo lo referente a la construcción, explotación y administración de nuevas líneas que le encomendare la Nación o resultaren de convenios con las provincias, así como la facultad de intervenir en los estudios de concesiones que en la materia otorgare el Gobierno nacional a terceros.-

Art. 4° - Para el cumplimiento de sus fines, Ferrocarriles Argentinos tiene las siguientes atribuciones y obligaciones:

- a) Aprobar su estructura orgánica y funcional.
- b) Dictar sus propios reglamentos internos y las

normas relativas a control y auditoria interna, pagos, adquisiciones, contrataciones, construcciones y demás inversiones y erogaciones en general.-

- c) Elevar al Poder Ejecutivo sus planes de largo, mediano y corto plazo, conforme al sistema nacional de planeamiento; Presupuesto Integral, Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas y Memoria Anual y dictar las normas de organización técnica de la contabilidad empresarial y del sistema de procesamiento de datos y estadísticas correspondientes.-
- d) Administrar, disponer y distribuir los fondos y recursos de Ferrocarriles Argentinos y los que les asigne la ley de presupuesto y leyes especiales.-
- e) Determinar y asignar la red de explotación de cada administración y de los servicios que las integran, en procura de una mejor racionalización y reducción de los costos. Proceder a la fusión, desdoblamiento o supresión de las administraciones.-
- f) Contratar la ejecución de trabajos y la fabricación de elementos ferroviarios bajo el régimen privado de locación de obras y servicios.
- g) Designar, contratar, promover, retrogradar, trasladar, suspender o separar de sus cargos, al personal empleado en la empresa, cuya relación jurídica con la misma se regirá por las normas del derecho laboral o civil, según la modalidad de prestación de servicios, con exclusión de las

normas de derecho administrativo establecidas en las leyes 13.653 [IX-A,353], 14.380 [XIV-A,185] y 15.023 [XIX-A,I°,218].-

- h) Fijar las escalas de sueldos y demás retribuciones al personal que por esta ley está facultada a designar.-
- i) Contratar empresas consultoras, auditora, agentes, corredores y comisionistas en las condiciones corrientes de plaza y sin relación de dependencia para todos los objetos específicos del transporte y de otras actividades administrativas o comerciales de Ferrocarriles Argentinos.-
- j) Mantener su propio cuerpo de Policía de Seguridad que actuará en jurisdicción ferroviaria conforme a normas que establecerá Ferrocarriles Argentinos reglamentando su organización, facultades y competencias.-
- k) Adquirir bienes.-
- l) Enajenar los bienes muebles o inmuebles incluidos en su patrimonio.-
- ll) Constituir, modificar, transferir o extinguir toda clase de derechos reales.-
- m) Aceptar donaciones o legados con o sin cargo.-
- n) Realizar operaciones financieras y bancarias con instituciones de crédito oficiales o privadas, del país o del exterior, con las limitaciones que impongan las normas cambiarias en vigor.-
- o) Formar parte de sociedades, inclusive accidentales y efectuar aportes a las mismas, de cualquier naturaleza.-

- p) Contratar mutuos y préstamos de uso.-
- q) Celebrar contratos de publicidad en sus bienes y servicios.-
- r) Adquirir fondos de comercio, registrar patentes y adquirir licencias industriales o comerciales sobre procedimientos técnicos aplicables a la explotación ferroviaria.-
- s) Hacer pagos, incluso los que no sean los ordinarios de la administración, novaciones o transacciones, conceder créditos, quitas o esperas y efectuar donaciones.-
- t) Exonerar total o parcialmente los cargos por pasajes, fletes, estadías, almacenaje, depósitos, servicios, conceder franquicias y renunciar a prescripciones operadas, cuando estas medidas se justificaren.-
- u) Estar en juicio como actora, demandada o en cualquier otro carácter, ante cualquier fuero o jurisdicción, inclusive en el extranjero, y hacer uso de todas las facultades procesales para la mejor defensa de los intereses de Ferrocarriles Argentinos.-
- v) Otorgar poderes generales o especiales. Sus apoderados judiciales podrán asumir el rol de querellantes ante los tribunales de fuero criminal de la Nación o de las provincias, sin necesidad de poder especial.-
- x) Dirigirse, gestionar y contratar en forma directa con las provincias, municipios y organismos nacionales, provinciales y municipales.-
- y) Tomar todas las medidas conducentes para la

correcta aplicación del régimen de explotación.-

Capital:

Art. 5°- El patrimonio de Ferrocarriles Argentinos está constituido por todos los bienes que integran el activo y pasivo de la actual empresa Ferrocarriles Argentinos.-

Dirección y administración:

Art. 6° - La dirección y administración de Ferrocarriles Argentinos estará a cargo de un presidente, un Consejo de Administración y un vicepresidente ejecutivo. Serán miembros del Consejo, el presidente, quien lo presidirá, el vicepresidente ejecutivo y los directores.-

Art. 7° - El presidente, el vicepresidente ejecutivo y los directores, en número de 3 a 6, serán designados por el Poder Ejecutivo y durarán en sus funciones con las limitaciones del art. 14.-

Para ello, se requiere ser argentino nativo o naturalizado, con 10 años de ejercicio de la ciudadanía y mayor de 30 años de edad; se deberá tener notoria experiencia y probada capacidad ferroviaria, o bien en materia administrativa, comercial, industrial o financiera.-

Art. 8° - No podrán ser designados presidente, vicepresidente ejecutivo o directores:

- a) Los comprendidos en las inhabilitaciones de orden ético o legal que, para los funcionarios de la Administración Pública, establece la legislación vigente.
- b) Los concursados civilmente o declarados en estado de quiebra dentro de los 10 años anteriores a su designación, con excepción de los que hubieran pagado todos los créditos verificados en los respectivos juicios, ni los condenados en causa

criminal por delitos comunes dolosos, ni aquellos cuyas quiebras hubieran sido declaradas o calificadas de culpables y/o fraudulentas por autoridad competente.

- c) Los que por el desarrollo de sus actividades privadas están ligados directamente a empresas proveedoras de equipos, materiales o servicios a los ferrocarriles, salvo que medie la previa desvinculación total de las mismas.-

Art. 9°- El presidente tendrá todas las facultades requeridas para el cumplimiento de sus funciones, sin más limitaciones que las establecidas en la presente ley.-

Serán atribuciones y funciones del presidente:

- a) Ejercer la Conducción Superior de Ferrocarriles Argentinos, la Presidencia del Consejo de Administración y la representación legal de la empresa.-
- b) Ejercer todas las atribuciones mencionas en la presente ley.-
- c) Concluir contrataciones consultando o no al Consejo de Administración, por licitación pública hasta por m\$n.500.000.000.-.
- d) Contratar directamente, consultando o no al Consejo de Administración, hasta la suma de m\$n.100.000.000.-.

Art. 10° - El vicepresidente ejecutivo, además de ejercer la dirección Ejecutiva de Ferrocarriles Argentinos, ejercerá las funciones que le encomiende el presidente y lo reemplazará temporariamente, con todas sus atribuciones, en caso de delegación expresa, ausencia, impedimento o acefalía. Cuando actúe en reemplazo del presidente, el Consejo de

Administración será presidido por él.-

Art. 11° - El Consejo de Administración intervendrá obligatoriamente en los siguientes casos:

- a) En todas las cuestiones que se refieren a los incs. a), b), c), d), e), h), l), ll), m), o), y t) del art. 4°; a los incs. a), b), c), d) y g) del art. 18 y al inc. a) del art. 19.
- b) En las cuestiones y bajo la forma determinada en el art. 17.
- c) En todos los casos en que le sea requerida su opinión por el presidente.-

Art. 12.- El Consejo de Administración sesionará con más de la mitad de sus miembros. Su pronunciamiento será el que haya recibido la adhesión de la mayoría y revestirá el carácter de un dictamen, correspondiendo la decisión final al presidente.-

No obstante, toda vez que éste se oponga a una actitud del Consejo, deberá dejar constancia en acta por escrito y detalladamente sobre las razones y fundamentos de clara eficiencia o beneficio empresario que lo asistieron en su actitud. También se dejará constancia en actas de la disidencia de algún miembro.-

Los miembros del Consejo serán corresponsables con el presidente en aquellas decisiones que concuerden con su asesoramiento.-

En el caso del art. 17, incs. a) y b), la decisión final corresponde únicamente al Consejo.-

Art. 13.- El Consejo de Administración será convocado por el presidente quien presidirá la sesión. Será secretario a efectos de la confección de actas, archivo de registros y trámites, el secretario general de Ferrocarriles

Argentinos. Los síndicos a que se refiere el art. 33, deberán ser citados para concurrir a todas las reuniones del Consejo de Administración.-

Art. 14.- El presidente, vicepresidente ejecutivo y los directores, responderán personal y solidariamente por el irregular desempeño de sus funciones. Quedarán exentos de responsabilidad quienes no hubieran participado en el acto violatorio de disposiciones legales o reglamentarias o hubiesen dejado constancia de su disconformidad o disidencia.

La eficiencia de la gestión administrativa se juzgará por el Poder Ejecutivo a través de los resultados y rendimientos, y las deficiencias que se establecieren serán causales de remoción de las autoridades o agentes que incurran en ellas.-

Régimen de contrataciones:

Art. 15.- Ferrocarriles Argentinos efectuará las contrataciones conforme a los principios básicos de publicidad y competencia de precios, de acuerdo a las normas de la presente ley, debiendo asimismo ordenarse el régimen a que deberán ajustarse los proveedores, especialmente en lo referente a capacidad técnica, solvencia moral y financiera. Los procedimientos de licitación se regirán por el reglamento que sancione el presidente de Ferrocarriles Argentinos. En sus relaciones con terceros, Ferrocarriles Argentinos se regirá exclusivamente por el derecho privado. Se consideran terceros no solamente las personas jurídicas privadas, sino también el Estado nacional, provincias y municipios, cuando actúen como personas de derecho privado.-

Art. 16.- Ferrocarriles Argentinos ajustará su accionar en la materia a los procedimientos corrientes de licitación pública o privada y contratación directa, según

convenga o se adapte mejor a los intereses de la gestión empresarial. La presidencia, en consulta con el Consejo de Administración y conforme a lo establecido en el art. 4º, inc. b) y el art. 11, ordenará el régimen en materia de contrataciones, delegando en cada uno de los niveles las facultades que correspondan a efectos de facilitar una adecuada agilidad en la gestión y un correcto escalonamiento de las atribuciones.-

Art. 17.- El Consejo de Administración tendrá la decisión final e intervendrá obligatoriamente en los casos siguientes:

a) Licitaciones públicas por más de
m\$n.500.000.000.-

b) Contrataciones directas por más de
m\$n.100.000.000.-

Las contrataciones inferiores a las mencionadas en los precedentes incisos podrán ser efectuadas por el presidente, siendo facultativo de éste recabar o no la opinión del Consejo, tal como se dispone en el art. 9º, incs. c) y d).

Dichos montos podrán ajustarse en la forma que determine la reglamentación de esta ley cuando las circunstancias así lo aconsejen en beneficio del quehacer empresarial.-

La decisión del Consejo se tomará por simple mayoría de votos, votando el presidente sólo en caso de empate.-

Régimen de explotación:

Art. 18.- Sin perjuicio de las facultades y deberes que le corresponden de conformidad con leyes y disposiciones reglamentarias que no se opongan a la presente ley, en la aplicación de su régimen de explotación, Ferrocarriles Argentinos podrá:

- a) Proponer al Poder Ejecutivo la habilitación, clausura temporaria o definitiva y el levantamiento o reubicación de ramales, desvíos y otros servicios. La Secretaría de Estado de Transporte dará intervención a los organismos especializados que determine la reglamentación, a fin de resolver sobre las propuestas dentro de un plazo de 120 días, a contar desde la elevación efectuada por Ferrocarriles Argentinos. En aquellos casos en que las propuestas se relacionen con la clausura y levantamiento de ramales, si fueran rechazadas, deberá determinarse por el Poder Ejecutivo, a que cuenta se transferirá el déficit resultante de su mantenimiento.-
- b) Establecer las normas técnicas relativas a los materiales y elementos de uso y consumo de Ferrocarriles Argentinos, determinando la cantidad y características correspondientes y los requisitos para librarlos y mantenerlos en servicio, así como su radicación y baja:
- c) Solicitar del Gobierno nacional la declaración de utilidad pública de los bienes necesarios para el tendido de nuevas líneas o ampliación de las existentes y promover los procedimientos judiciales de expropiación de los mismos.-
- d) Establecer en base a estudios técnico-económicos el horario, la corrida y composición de los trenes de todo tipo, así como la tripulación y velocidad a emplear. En el caso de los horarios de trenes de pasajeros, mixtos y de servicios de

encomienda, se requerirá la aprobación de la Secretaría de Estado de Transporte, salvo que se trate de cambios o modificaciones menores que no alteren la estructura básica del servicio.-

El tipo de protección y señalamiento a darse en los pasos a nivel existentes o a crearse, se establecerán de acuerdo a las normas que al efecto establezca la Secretaría de Estado de Transporte en acuerdo con los demás organismos estatales, provinciales o municipales interesados.-

e) Atender las quejas que los usuarios. Las que no puedan ser satisfechas por Ferrocarriles Argentinos se sustanciarán ante la Secretaría de Transporte.-

f) Habilitar al personal para la conducción de locomotoras y demás vehículos automotores ferroviarios, afectados al servicio público.-

g) Establecer, en relación con la función de policía sanitaria, el organismo técnico que habrá de controlar los problemas vinculados con la salubridad o higiene ambiental; de tránsito y expendio de materias primas y productos alimenticios, tránsito de animales vivos o sacrificados, etc., conforme a una reglamentación que determinará específicamente, organización, facultades y competencia, siempre dentro de las normas, directivas o intervención, cuando corresponda, de los organismos del Estado competentes en la materia.-

Régimen tarifario:

Art. 19.- Ferrocarriles Argentinos estará sujeto, en materia de tarifas, a las siguientes reglas de acuerdo a las cuales podrá:

- a) Determinar el nivel de las tarifas ordinarias y sus condiciones de aplicación y proponer a la Secretaría de Estado de Transporte su aprobación.
- b) El pronunciamiento de la Secretaría de Estado de Transporte deberá efectuarse dentro de los 30 días corridos de su presentación, en caso contrario se entenderá que las tarifas propuestas han sido aprobadas.-
- c) Fijar, sin necesidad de homologación por la Secretaría de Estado de Transporte, tarifas especiales, con precios reducidos de aplicación general, a los cargadores que se sujeten a las condiciones establecidas en las mismas, para los transportes que se realicen entre los puntos que en ellas se señalen.-
- d) Otorgar, sin obligación de publicidad, reducciones sobre las tarifas en vigor acordando igualdad de trato a todos los remitentes si, en las mismas circunstancias en cuanto a clase de mercadería, riesgo, tonelaje y puntos entre los que se efectúe el transporte, se sujetan a idénticas condiciones, modo y forma de realizarlo.-
- e) Celebrar contratos de transporte y acordar tarifas con usuarios que se comprometan a utilizar el ferrocarril en condiciones particulares especialmente pactadas.-
- f) Celebrar convenios con empresarios de transporte

y propietarios de material rodante ferroviario o de elementos complementarios del mismo, para realizar servicios especiales o combinados.-

Art. 20.- Toda prestación de servicios realizada por Ferrocarriles Argentinos a favor del Estado nacional o de sus dependencias, será facturada y percibida en las mismas condiciones que si el servicio hubiera sido prestado al público o, si se tratara de servicios especiales, como el transporte de correspondencia o el mantenimiento de las líneas telegráficas, a la tarifa que se fije con el procedimiento indicado en el artículo anterior.-

Régimen contable, económico y financiero:

Art. 21.- La contabilidad general y de costos de Ferrocarriles Argentinos deberá ajustarse a los principios generales, aceptados en la materia. Se organizará de tal modo que simultáneamente permita la preparación de presupuestos, el control integral y presupuestario, el seguimiento de la gestión de cada una de las administraciones, dependencias y servicios en forma independiente, aunque posibilitando su ulterior consolidación.-

Art. 22.- Ferrocarriles Argentinos deberá elevar a la aprobación del Poder Ejecutivo con intervención de las secretarías de Estado de Hacienda y Transporte, planes de acción que abarquen largo, mediano y corto plazo, conforme al sistema nacional de planeamiento. Anualmente deberá formular su plan de acción a desarrollar durante el ejercicio respectivo, que se enmarcará en las previsiones de dichos planeamientos, juntamente con el presupuesto patrimonial, económico y financiero correspondiente.-

Art. 23.- Los presupuestos y planes de acción a desarrollar durante el ejercicio respectivo deberán adecuarse

en cuanto a su confección, ejecución, procedimiento y plazos de elevación para su aprobación por el el Poder Ejecutivo, a las normas que establezca la reglamentación.-

Art. 24.- El ejercicio económico-financiero comenzará el 1° de enero y terminará el 31 de diciembre de cada año; a esta última fecha se confeccionará la memoria y se practicará el balance general y cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas.-

Art. 25.- Los documentos previstos por el artículo anterior deberán ajustarse a las disposiciones de carácter general que se dicten por el Poder Ejecutivo para la formulación de balances de sociedades anónimas y serán elevados al Poder Ejecutivo para su aprobación, juntamente con un informe de los síndicos a que se refiere el art. 33, con intervención de las secretarías de Estado de Hacienda y de Transporte.-

La reglamentación establecerá dentro de qué plazos máximos deberá darse cumplimiento a lo establecido precedentemente, así como también, con que anticipación al momento de la elevación deberán ser puestos los documentos pertinentes en conocimiento de los síndicos, a sus efectos.-

Art. 26.- Mediante entregas sin cargo de reintegro el Estado nacional sufragará los déficit de explotación de Ferrocarriles Argentinos que preventivamente surjan de los presupuestos confeccionados de conformidad con lo dispuesto por los arts. 22 y 23. Las entregas que el Estado nacional efectuare de conformidad serán rendidas anualmente por Ferrocarriles Argentinos.-

Art. 27.- Cuando el Estado nacional debe contribuir a la realización de los planes de inversión que apruebe el Poder Ejecutivo, lo hará a través de aportes de capital.-

Art. 28.- En los casos en que la propuesta del art. 18 inc. a) se relacione con la clausura y levantamiento de ramales de resulten antieconómicos y aquélla fuera reclazada, el Estado nacional determinará cómo se sufragará el déficit resultante de su mantenimiento. Asimismo, cuando en razón de decisiones del Gobierno nacional, Ferrocarriles Argentinos debe cumplir con actividades no rentables o se rechacen las tarifas que proponga, el Estado nacional le reintegrará los importes correspondientes a las pérdidas provocadas. Del mismo modo se proveerá en los casos en que se dispongan por el Poder Ejecutivo adquisiciones obligatorias a proveedores estatales o particulares, cuyos precios no fueren los más convenientes en relación con los de otras plazas. La aplicación de éste artículo se ajustará a las condiciones que establezca la reglamentación.-

Art. 29.- Los déficit que respondan a las causales del artículo anterior, no deberán ser imputados a los resultados de explotación de Ferrocarriles Argentinos.-

Art. 30.- Si no obstante la oportuna elevación del plan de acción y presupuesto, al iniciarse un ejercicio no se hubieren aprobado ni rechazado, total o parcialmente, tales instrumentos, Ferrocarriles Argentinos los pondrá transitoriamente en ejecución en cualquiera de los dos supuestos siguientes:

- a) Cuando se haya fijado el monto de la contribución del Tesoro nacional para subvenir sus necesidades y el plan de acción y presupuesto presentados no superen dicha contribución y
- b) Cuando no habiendo sido fijado el monto de la contribución del Tesoro nacional para subvenir sus necesidades, el plan de acción y presupuesto

presentados contemplen un monto de contribución inferior al del ejercicio inmediato anterior o no contemplen contribución alguna.-

Art. 31.- Cuando en el curso de un ejercicio y por causas de fuerza mayor, Ferrocarriles Argentinos debiera afrontar compromisos superiores a los autorizados en su presupuesto, procederá a reforzar las partidas respectivas en la forma que fije la reglamentación, si dicho exceso no comporta una contribución adicional del Tesoro nacional. En caso contrario, la modificación deberá ser elevada a consideración del Poder Ejecutivo.-

Contralor - Sindicaturas y auditoria externa:

Art. 32.- El contralor de eficiencia en la gestión de Ferrocarriles Argentinos será ejercida por el Poder Ejecutivo a través de las secretarías de Estado de Transporte y de Hacienda, mediante los síndicos y procedimientos a que se refiere el artículo siguiente.-

Art. 33.- El Poder Ejecutivo, a propuesta de las Secretarías de Estado mencionadas en el artículo anterior, designará a 2 síndicos titulares y sus respectivos suplentes, con las mismas atribuciones y deberes establecidos para ellos en el Código de Comercio, en cuanto se adecuen a la naturaleza de Ferrocarriles Argentinos. Sin perjuicio de estas atribuciones, les corresponderá en particular:

a) Al síndico de la Secretaría de Estado de Transporte:

1. Analizar e informar a la Secretaría de Estado de Transporte acerca de la gestión empresarial en todo lo que haga a la eficiencia operativa y al estado de cumplimiento de los planes, dentro del marco de referencia de la política

general de transporte y toda vez que lo juzgue conveniente.

2. Verificar el cumplimiento de las leyes y decretos relativos a la prestación del servicio público.
3. Informar a la Secretaría de Estado de Transporte acerca de los actos de las autoridades de Ferrocarriles Argentinos que no encuadren en su competencia legal o reglamentaria.-

La toma de conocimientos que hiciere el síndico de la Secretaría de Estado de Transporte de las medidas dispuestas por las autoridades de Ferrocarriles Argentinos, equivaldrá a la comunicación que por esta ley o por la ley 2873 [1889-1919,239], decretos y resoluciones dictadas en su consecuencia, debiere efectuarse a la Secretaría de Estado de Transporte o a sus dependencias.-

b) Al síndico de la Secretaría de Estado de Hacienda:

1. Informar ante la Secretaría de Estado de Hacienda acerca del cumplimiento del plan de acción y presupuesto, cuando lo estime necesario.
2. Informar y diagnosticar acerca de la situación y gestión patrimonial, económica y financiera de Ferrocarriles Argentinos, tanto en oportunidad de la elevación de la memoria, balance general y cuenta de ganancias y pérdidas, como cuando lo estime conveniente.
3. Informar ante la Secretaría de Estado de Hacienda la necesidad y oportunidad de los

requerimientos de fondos que efectúe el Tesoro nacional.

4. Informar ante la Secretaría de Estado de Hacienda acerca de los actos que comporten transgresión al ordenamiento legal financiero de Ferrocarriles Argentinos.-

Art. 34.- Las autoridades de Ferrocarriles Argentinos están obligadas a facilitar las tareas de análisis y control de gestión a cargo de los síndicos y a este objeto deberán:

- a) Mantener actualizados los registros contables principales y auxiliares.
- b) Remitirles todos los informes y antecedentes que requieran para el ejercicio de sus funciones.
- c) Facilitarles el libre acceso a todas las dependencias, libros y comprobantes.
- d) Proporcionarles los medios materiales necesarios para el cumplimiento de sus tareas.-

Art. 35.- Los síndicos y el personal de su dependencia percibirán las retribuciones que les fije el Poder Ejecutivo y éstas serán incluidas en el presupuesto de Ferrocarriles Argentinos. La reglamentación fijará los requisitos e incompatibilidades que serán tenidas en cuenta para la designación de los síndicos.-

Art. 36.- El contralor de legitimidad y del régimen contable, será ejercido por un órgano de auditoría externa en la forma que determinará el Poder Ejecutivo.-

Disposiciones generales:

Art. 37.- Toda transferencia de bienes de Ferrocarriles Argentinos a favor de dependencias del Estado nacional, provincias, municipalidades, empresas del Estado o

sociedades anónimas con participación estatal, deberá ser consentida por aquélla y se efectuará a título oneroso, sobre la base del valor actualizado del bien.-

Art. 38.- Ferrocarriles Argentinos estará exento del pago de contribuciones, impuestos, recargos cambiarios o sobreprecio para la constitución de fondos y de tasas de carácter nacional, provincial o municipal. Exceptúase el pago de tasas que correspondan a servicios efectivamente prestados, que hubieran sido requeridos por la Administración Ferroviaria. Asimismo, se hallan liberadas de los citados tributos las actividades publicitarias y explotaciones comerciales que se cumplen por la propia Administración Ferroviaria o por terceros que hubieren contratado con ella y que se efectúen dentro de las estaciones, zonas de vía y demás bienes ferroviarios afectados a la explotación. Respeto de dichos terceros, la exención no alcanzará a los impuestos y tasas de carácter nacional.-

Art. 39.- Ferrocarriles Argentinos no podrá ser declarado en quiebra. El Estado nacional garantiza el pago de sus deudas y sufragará con cargo a rentas generales los déficit que se produzcan de acuerdo con las previsiones de los arts. 26 y 27 de la presente ley.-

Art. 40.- En la locación u ocupación de bienes de Ferrocarriles Argentinos no serán de aplicación las leyes sancionadas con carácter de emergencia sobre arrendamientos urbanos y rurales.-

Art. 41.- No serán de aplicación a Ferrocarriles Argentinos las disposiciones de las leyes de contabilidad, de obras públicas, de empresas del Estado y normas reglamentarias o complementarias de las mismas.-

Art. 42.- La presente ley tendrá carácter

transitorio para Ferrocarriles Argentinos y regirá mientras dure la situación especial en que su conducción superior esté integrada por personal militar en situación de actividad, prorrogándose, sin embargo, temporalmente su vigencia aún frente a nuevas situaciones, mientras las autoridades competentes no adopten las providencias del caso, para el imperio de un nuevo status legal.-

Art. 43.- La reglamentación de esta ley, en aquello que corresponda, será proyectada y elevada con intervención de Ferrocarriles Argentinos y de las secretarías de Estado de Hacienda y de Transporte.-

Art. 44.- Comuníquese, etc.

(*) NOTA AL PODER EJECUTIVO ACOMPAÑANDO EL PROYECTO DE LEY 18.360.-

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1969.

Al Excmo. señor Presidente de la Nación:

La Empresa Ferrocarriles Argentinos ha elaborado el adjunto proyecto de ley destinado a reglar, básicamente, el funcionamiento de la citada empresa, de conformidad con las directivas contenidas en el Plan de Reorganización y Recuperación de los Ferrocarriles Nacionales aprobado por dec. 3969/66 [XXVI-C.1743]. En éste se prescribe que se adoptarán las providencias que correspondan para implantar una filosofía empresarial moderna, de tipo industrial y comercial. Para superar los inconvenientes que actualmente traban la consecución de tal propósito, la empresa propondrá la modificación, sustitución o supresión de las leyes, decretos y reglamentaciones que, a su juicio, se oponen a una gestión empresarial y comercial.-

Hasta el presente los Ferrocarriles Argentinos han

venido desarrollando su acción bajo el régimen legal común a las restantes empresas del Estado, creado por la ley 13.653 [LX-A,353] modificada posteriormente por las leyes 14.380 [XIV-A,185] y 15.023 [XIX-A,I°,218].-

La práctica de la aplicación de ese régimen ha venido a mostrarlo como inadecuado a los fines de alcanzar el nivel de eficiencia requerido por la naturaleza del servicio público y por las exigencias de la competencia que ejercitan otros medios de transporte. Trátase en consecuencia de arbitrar el instrumento legal que, al ponderar las particulares circunstancias de la explotación ferroviaria, provea los medios legales y reglamentarios específicos de la actividad; aspectos éstos que no consultan la actual realidad legislativa que se halla conformada por las citadas leyes de empresas del Estado, el Estatuto aprobado por el dec. 3135/64 [XXIV-B.1413] y 8274/65 [XXV-B.1558] y las leyes de contabilidad [XVII-A,155] y de obras públicas.-

Como crítica esencial a este régimen vigente no puede dejarse de lado que los Ferrocarriles son empresa comercial e industrial y esa condición no cambia, pertenezcan o no al Estado. Como tal lo reconoce el adjunto proyecto de ley que tiende a otorgar tratamiento especial a la cuestión ferroviaria, vinculada como se encuentra de modo trascendente y por muchos factores al bienestar y desarrollo de la Nación.

Se define el proyecto como ley orgánica básica, toda vez que sus disposiciones constituyen preceptos tendientes a estructurar y formular las normas que permitan remover, en los distintos sectores que integran la administración y explotación ferroviaria, los obstáculos que afecten una gestión activa y acorde con los objetivos que motivan la actuación de la empresa.-

Desde ese punto de vista, reitérase para determinadas situaciones el articulado del estatuto vigente, aunque confiriéndole en el proyecto la jerarquía de ley.-

Se señala en el mismo que la Empresa Ferrocarriles Argentinos tendrá la capacidad de las personas de derecho privado, con autarquía para su desenvolvimiento dentro de la caracterización de empresa comercial e industrial.-

Bajo el concepto de Constitución, Denominación, Capacidad, Domicilio y Atribuciones, se incluyen en su objeto no solo las actividades típicamente ferroviarias sino otras que, calificadas de complementarias o subsidiarias, su ejercicio comporta conveniencia manifiesta para su economía.-

Se formula asimismo una enunciación de todas aquellas atribuciones y obligaciones que se ha estimado constituyen necesaria implementación e instrumentación de atribuciones legales para cumplir las finalidades previstas en el sistema de planeamiento, programación y control que se han propuesto las autoridades del organismo.-

Con relación a dichos aspectos, que hacen a la competencia, cabe hacer presente que todas las atribuciones conferidas implican simplemente afirmar el concepto de autarquía en la gestión; sin perjuicio de la responsabilidad que concierne a las autoridades por deficiencias e irregularidad en su desempeño.-

A este respecto la reforma legal que se propone instaurar el sistema de acuerdo al cual, la potestad de vigilar la correcta inversión de fondos y el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias, no configura menoscabo ni sustitución de la voluntad de los administradores. Estímase oportuno destacar que, por la promiscuidad de mecanismos de control que actúan al presente en relación con el organismo,

aquéllos han venido en el hecho a limitar la autarquía y posibilidades de decisión del ente. Los efectos inmediatos de esa situación se traducen en burocratización de la actividad administrativa por la gravitación de un ordenamiento normativo que se aplica, primordialmente, al exámen de los medios a que se ha recurrido y no a la apreciación de los resultados logrados en función de los objetivos propuestos.-

Bajo los diversos títulos que agrupa el articulado del proyecto, se definen las situaciones siguientes:

Constitución, denominación, capacidad, domicilio y atribuciones: Se incluyen en esta nómina de atribuciones y obligaciones, aquellas que hacen a su actuación como ente de carácter comercial, proporcionándole las facultades que normalmente corresponden a todo ente empresario en el manejo de sus propios bienes y en la contratación de los servicios que requiere o que presta.-

Capital: Se deja expresamente establecido que el patrimonio de Ferrocarriles Argentinos estará formado por el pasivo y el activo que constituyen el de la Empresa actualmente vigente.-

Dirección y administración: Se da la fórmula básica del gobierno de la entidad, prefijando la existencia de un presidente, un vicepresidente ejecutivo y un Consejo de Administración en función asesora, como regla general; pero con facultad decisoria en materia de contratación, cuando los grandes montos así lo aconsejen. Se ha considerado oportuno, al propio tiempo, referir la determinación y el alcance de la competencia de las restantes autoridades en consonancia con la estructuración interna.-

En esta parte se ha definido el principio de la responsabilidad ponderada a través de los resultados y

rendimiento de la gestión empresarial. Habida cuenta que ésta debe caracterizarse por su capacidad creadora y su dinámica, incompatible por esencia con la actuación de engranajes burocráticos paralelos a la acción ejecutiva.-

Régimen de contrataciones: Garantizado el ágil y eficaz control del Poder Ejecutivo por medio de las sindicaturas y de una auditoría externa, es a todas luces conveniente dotar a Ferrocarriles Argentinos de la suficiente autoridad sin trabas de tramitaciones estériles. Se han estructurado así los lineamientos del régimen de contrataciones, que deben complementarse con un ordenamiento del régimen interno de la Empresa, fundamentado en la delegación de atribuciones que hacen a la dinámica de toda empresa industrial y comercial, que en el caso que nos ocupa se halla limitado solamente por los planes de inversiones y por el presupuesto de la misma.-

Régimen de explotación: En este título se reglan ciertos tópicos que en un régimen de concesión a empresas privadas, deberían ser tratados en el mismo. Se autoriza en él, a Ferrocarriles Argentinos, a ejercer determinadas facultades, algunas de las cuales, al no poder realizarlas actualmente, inciden agravando su déficit de explotación. Se logra así el equilibrio necesario entre la actual legislación que se mantiene en cuanto no se oponga a la presente ley, y la existente realidad ferroviaria. Se libera de esta forma a Ferrocarriles Argentinos de soportar mayores costos que los que naturalmente deben gravitar sobre su economía, tal como surge de acápite y de los siguientes.-

Régimen tarifario: En cuanto a su Régimen Tarifario la empresa, por la concurrencia de determinadas circunstancias y conforme al procedimiento que se señala en el artículo

pertinente, podrá poner en vigor tarifas y celebrar convenios de transporte que importen llegar con estos medios en forma oportuna y adecuada a la atención de necesidades de los usuarios logrando al propio tiempo concretar operaciones de la máxima conveniencia para sus intereses. Con estos preceptos la empresa podrá superar la situación que cabe calificar de anacrónica proveniente de la aplicación de disposiciones de la ley nacional de ferrocarriles 2873 [1889-1919,239], sancionada teniendo en vista la inspección gubernativa de sociedades comerciales privadas concesionarias de servicio público. Se destaca asimismo el carácter estricto de la onerosidad de las prestaciones de servicios efectuadas a favor del Estado y de sus dependencias, librando a la Empresa de una pesada carga económica que gravita sobre su déficit.-

Régimen contable, económico y financiero:

Se fijan aquí las normas generales que, recogiendo las experiencias de la actividad privada en relación con los aspectos del título, concretan soluciones específicas para la explotación ferroviaria. Se persigue dotar de la máxima agilidad compatible con la dependencia financiera del Tesoro Nacional, al trámite de aprobación y reajuste, de los créditos presupuestarios. Destácase, concomitantemente con lo establecido en el título de la Explotación, que todas las actividades no rentables y todos los gastos impuestos a Ferrocarriles Argentinos por decisiones del Gobierno nacional, que naturalmente no deben gravitar sobre su déficit, no serán imputados a los resultados de su explotación.-

Control - Sindicaturas y auditoría externa: A los fines de conciliar la necesidad de un eficiente contralor administrativo que implique verificación correcta de la inversión de fondos al propio tiempo que vigilancia de la

eficiente prestación del servicio en función de la política que fije el Gobierno, se acuerdan esas misiones a una doble sindicatura representativa de las secretarías de Estado, con jurisdicción en las respectivas materias, además de la actuación de una auditoría externa.

Sobre ese particular se ha tenido muy en cuenta la necesidad de estructurar la actuación de dichos órganos de manera de no interferir la gestión típicamente comercial y sin restricciones de la autarquía de Ferrocarriles Argentinos. Este sistema que se introduce por el proyecto y que se ejercitará sobre los resultados de la gestión, es el que se practica comúnmente en las empresas privadas. El mismo goza de antecedentes en algunos aspectos similares, en la organización Banco Central de la República Argentina (art. 29 de su ley orgánica). De otros países cabe traer a colación el régimen impuesto a su organización por la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE). Ello, cuando decididamente no se ha colocado la administración ferroviaria bajo el régimen liso y llano de las sociedades anónimas, aún cuando la participación estatal fuere absoluta (caso de Francia, Société Nationale des Chemins de Fer).-

Disposiciones generales: Por último, se han considerado con el encuadre dado por el proyecto que se eleva, la necesidad de excluir a Ferrocarriles Argentinos, del régimen general dado por las leyes de contabilidad, de obras públicas, de empresas del Estado y sus normas reglamentarias y complementarias, ya que como queda dicho, ello no atendía a la real necesidad en que le toca desenvolverse a la Empresa.-

En momentos en que se advierte que los regímenes estatutarios se han venido sucediendo y reemplazando con relativa frecuencia, en esta oportunidad se han orientado la

reforma hacia la modificación legislativa básica. Con ella se apunta al reconocimiento de la realidad, tomando en todo lo posible el esquema funcional de las personas jurídicas de derecho privado, de modo de lograr que el concepto de administración pública sea suplantado definitivamente por el más apropiado de empresa, identificando así la verdadera esencia y sentido de la organización.-

Dios guarde a V.E. - José M. Dagnino Pastore. -

Armando S. Ressa. - Luis E. Mey.-

2.- LEY 23.696.-

EMERGENCIA ADMINISTRATIVA Y REESTRUCTURACION DEL
ESTADO.-

Sanccionada el 17/8/89.-

Promulgada el 18/8/89.-

B.O., 23/8/89.-

CAPITULO I

DE LA EMERGENCIA ADMINISTRATIVA

ART. 1° - [DECLARACION.] Declárase en estado de emergencia la prestación de los servicios públicos, la ejecución de los contratos a cargo del sector público y la situación económica-financiera de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, servicios de cuentas especiales, obras sociales del sector público, bancos y entidades financieras oficiales, nacionales y/o municipales y todo otro ente en el que el Estado Nacional o sus entes descentralizados tengan participación total o mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones societarias. Esta ley es aplicable a todos los organismos mencionados en este artículo, aun cuando sus estatutos o cartas orgánicas o leyes especiales requieran una inclusión expresa para su aplicación. El régimen de la presente ley será aplicable a aquellos entes en los que el Estado Nacional se encuentre asociado a una o varias Provincias y/o Municipalidades, siempre que los respectivos Gobiernos provinciales y/o municipales presten su acuerdo. Este estado de emergencia no podrá exceder de un (1) año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. El Poder Ejecutivo Nacional podrá prorrogarlos por una sola vez y por

igual término. [ver dect. 1605/90, arts. 1° y 2°]

Art. 2° - [INTERVENCIONES.] Autorízase al Poder Ejecutivo Nacional a disponer por un plazo de ciento ochenta (180) días, prorrogables por una sola vez y por igual término, la intervención de todos los entes, empresas y sociedades, cualquiera sea su tipo jurídico, de propiedad exclusiva del Estado Nacional y/o de otras entidades del sector público nacional de carácter productivo, comercial, industrial o de servicios públicos. Exclúyese expresamente a las universidades nacionales del régimen de intervención establecido en el presente artículo. [ver dect. 544/90, art. 1°, 1605/90, arts. 1° y 2°, y 2220/90, art. 1°]

Art. 3° - [FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL INTERVENTOR]

Las funciones y atribuciones del interventor, serán las que las leyes, estatutos o cartas orgánicas respectivas, otorguen a los órganos de administración y dirección, cualquiera fuere su denominación, con las limitaciones derivadas de esta ley y su reglamentación. Le corresponderá al interventor la reorganización provisional del ente, empresa o sociedad intervenida, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 5° de la presente. A tal fin, el interventor podrá disponer, cuando lo estimare necesario, se mantenga o no el cargo o función, el despido o baja del personal que cumpla con funciones de responsabilidad y conducción ejecutiva en el ente, empresa o sociedad intervenida, se encuentre o no en ejercicio efectivo del cargo o función. En cualquier caso, la indemnización a reconocer será idéntica a la prevista en los arts. 232, 245 y concc. y complementarios de la ley 20.744 y sus modificatorias sin perjuicio de la aplicación de indemnizaciones superiores cuando ellas legal o convencionalmente correspondan. En el desempeño de su gestión el interventor deberá dar estricto

cumplimiento a las instrucciones que le imparta el Poder Ejecutivo Nacional, o en su caso, el ministro o secretario del que dependa. Será designado también un subinterventor con funciones gerenciales y de suplencia del interventor cuando ello fuere necesario. El interventor estará facultado para realizar delegaciones de su competencia en el subinterventor.

Art. 4° - [FACULTADES DEL MINISTRO] El ministro que fuere competente en razón de la materia, o los secretarios en quienes aquél delegue tal cometido, se encuentran expresamente facultados para avocarse en el ejercicio de la competencia de los interventores aquí previstos. Asimismo, mientras dure la situación de intervención, reside en el citado órgano ministro la competencia genérica de conducción, control, fiscalización, policía de la prestación y gestión del servicio público o de la actividad empresaria o administrativa de que se trate, pudiendo a tal fin disponer y realizar todas las medidas que estime conveniente para cumplir su cometido, incluso solicitando el auxilio de la fuerza pública e ingresar por su propia decisión en los lugares donde se ejercite tal actividad empresaria o administrativa.

Art. 5° - [ORGANOS DE CONTROL] En todos los casos quedarán subsistentes los órganos de control externo, Tribunal de Cuentas de la Nación y SIGEP (Sindicatura General de Empresas Públicas), los que cumplirán sus cometidos según su normativa específica. En caso de intervención, en sustitución de las facultades de las asambleas societarias, los síndicos en representación del sector público, serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional, según la propuesta del órgano respectivo cuando así corresponda.

Art. 6° - [TRANSFORMACIONES] Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional para transformar la tipicidad jurídica de

todos los entes, empresas y sociedades indicadas en el art.2° dentro de las formas jurídicas previstas por la legislación vigente, y por el término establecido en el art.1° de la presente ley. [ver dectrs.1605/90, arts. 1° y 2°, y 2220/90, art. 1°]

Art. 7° - Facúltase el Poder Ejecutivo Nacional para disponer por acto fundado la creación de nuevas empresas sobre la base de escisión, fusión, extinción o transformación de las existentes, reorganizando, redistribuyendo y reestructurando cometidos, organización y funciones u objetos sociales de las empresas y sociedades indicadas en el art. 2°, efectuando en su caso las correspondientes adecuaciones presupuestarias, sin alterar los montos máximos autorizados, y sin comprometer avales y/o garantías oficiales.-

CAPITULO II

DE LAS PRIVATIZACIONES Y PARTICIPACION DEL CAPITAL PRIVADO

Art. 8° - [PROCEDIMIENTO,] Para proceder a la privatización total o parcial o a la liquidación de empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado Nacional, incluyendo las empresas emisoras de radiodifusión y canales de televisión, es requisito previo que hayan sido declaradas "sujeta a privatización" de acuerdo a las previsiones de esta ley.

Cuando el Estado Nacional y/o sus entidades, cualesquiera sea su personalidad jurídica, fuesen propietarios de acciones o de participación de capital en sociedades en las que no le otorgue la mayoría de capital social necesario para ejercer el control de la respectiva entidad, dichas acciones o participaciones de capital podrán ser enajenadas aplicando los procedimientos previstos en esta ley, sin que se requiera en

tales casos, la declaración aquí regulada.

Art. 7° - La declaración de "sujeta a privatización" será hecha por el Poder Ejecutivo Nacional debiendo, en todos los casos, ser aprobada por ley del Congreso. Asignase trámite parlamentario de preferencia a los proyectos de esta naturaleza.

Sin perjuicio del régimen establecido precedentemente, por esta ley se declaran "sujeta a privatización" a los entes que se ennumeran en los listados anexos.

Art. 10.- [ALCANCES.] El acto que declare "sujeta a privatización" puede referirse a cualesquiera de las formas de privatización, sea total o parcial, pudiendo comprender tanto a una empresa como a un establecimiento, bien o actividad determinada. Con el mismo régimen que el indicado en el artículo anterior, el decreto del Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer, cuando fuere necesario, la exclusión de todos los privilegios y/o cláusulas monopólicas y/o prohibiciones discriminatorias aun cuando derivaren de normas legales, cuyo mantenimiento obste a los objetivos de la privatización o que impida la desmonopolización o desregulación del respectivo servicio.

Art. 11.- [FACULTADES DEL PODER EJECUTIVO] Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional para proceder a la privatización total o parcial, a la concesión total o parcial de servicios, prestaciones u obras cuya gestión actual se encuentre a su cargo, o a la liquidación de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado Nacional, que hayan sido declaradas "sujeta a privatización" conforme con las previsiones de esta ley. En el decreto de ejecución de esta

facultad se establecerán, en cada caso, las alternativas, los procedimientos y modalidades que se seguirán.

Siempre y en todos los casos cualquiera sea la modalidad o el procedimiento elegido, el Poder Ejecutivo Nacional, en áreas que considere de interés nacional se reservará en el pliego de condiciones la facultad de fijar las políticas de que se trate.

En el caso de que la empresa declarada "sujeta a privatización" tuviera su principal asentamiento y área de influencia en territorio provincial, el Poder Ejecutivo Nacional dará participación al Gobierno de la respectiva Provincia en el procedimiento de privatización.

En el caso de que la empresa declarada "sujeta a privatización" tuviera construcciones, edificios u otros elementos de reconocido valor histórico y/o cultural o ecológico, el Poder Ejecutivo Nacional dictará la norma para su preservación en el procedimiento de privatización.

Art. 12.- En las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca parcialmente al Estado Nacional, la facultad otorgada en el art.11 se limita a la proporción perteneciente al Estado Nacional. La liquidación de las mismas sólo podrá llevarse a cabo cuando el Estado Nacional sea titular de la proporción de capital legal o estatutariamente requerido para ello, o alcanzando las mayorías necesarias, mediante el consentimiento de otros titulares de capital.

Art. 13.- [AUTORIDAD DE APLICACION] Será Autoridad de Aplicación a todos los efectos de esta ley, el ministro en cuya jurisdicción se encuentre el ente a privatizar.

Art. 14.- [COMISIÒN BICAMERAL] Créase en el ámbito del Congreso Nacional una Comisión Bicameral integrada por seis

(6) senadores y seis (6) diputados, quienes serán elegidos por sus respectivos cuerpos, la que establecerá su estructura interna.

Dicha Comisión tendrá como misión constituir y ejercer la coordinación entre el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo Nacional, a los efectos del cumplimiento de la presente ley y sus resultados debiendo informar a los respectivos cuerpos legislativos sobre todo el preceso que se lleve adelante conforme a las disposiciones de esta ley.

Para cumplir su cometido, la citada Comisión deberá ser informada permanentemente y/o su requerimiento de toda circunstancia que se produzca en el desenvolvimiento de los temas relativos a la presente ley, remitiéndosele con la información la documentación correspondiente.

Podrá requerir información, formular las observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinentes y emitir dictamen en los asuntos a su cargo. A estos efectos la Comisión Bicameral queda facultada a dictarse su propio reglamento de funcionamiento.

Asimismo el Tribunal de Cuentas y la Sindicatura General de Empresas Públicas actuarán en colaboración permanente con esta Comisión.

Art. 15.-[ALTERNATIVAS DE PROCEDIMIENTO] Para el cumplimiento de los objetivos y fines de esta ley, el Poder Ejecutivo, a través de la Autoridad de Aplicación o en forma directa en su caso, podrá:

1º) Transferir la titularidad, ejercicio de derechos societarios o administración de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas declaradas "sujeta a privatización".

2º) Constituir sociedades; transformar, escindir o

fusionar los entes mencionados en el inciso anterior.

3°) Reformar los estatutos societarios de los entes mencionados en el inc. 1° de este artículo.

4°) Disolver los entes jurídicos preexistentes en los casos en que por transformación, escisión, fusión o liquidación, corresponda.

5°) Negociar retrocesiones y acordar la extinción o modificación de contratos y concesiones, formulando los arreglos necesarios para ello.

6°) Efectuar las enajenaciones aun cuando se refieran a bienes, activos o haciendas productivas en litigio en cuyo caso el adquirente subrogará al Estado Nacional en las cuestiones, litigios y obligaciones.

7°) Otorgar permisos, licencias o concesiones, para la explotación de los servicios públicos o de interés público a que estuvieren afectados los activos, empresas o establecimientos que se privaticen, en tanto los adquirentes reúnan las condiciones exigidas por los respectivos regímenes legales, así como las que aseguren la eficiente prestación del servicio y por el término que convenga para facilitar la operación. En el otorgamiento de las concesiones cuando medien razones de defensa nacional o seguridad interior a criterio de la Autoridad de Aplicación, se dará preferencia al capital nacional. En todos los casos se exigirá una adecuada equivalencia entre la inversión efectivamente realizada y la rentabilidad.

8°) Acordar a la empresa que se privatice beneficios tributarios que en ningún caso podrán exceder a los que prevean los regímenes de promoción industrial, regional o sectorial, vigentes al tiempo de la privatización para el tipo de actividad que aquélla desarrolle o para la región donde se

encuentra radicada.

9°) Autorizar diferimientos, quitas, esperas o remisiones en el cobro de créditos de organismos oficiales contra entidades que se privaticen por aplicación de esta ley. Los diferimientos referidos alcanzarán a todos los créditos, cualesquiera sea su naturaleza, de los que sean titulares los organismos centralizados o descentralizados del Estado Nacional. Las sumas cuyo cobro se difiera, quedarán comprendidas en el régimen de actualización correspondiente a cada crédito de acuerdo a su naturaleza y origen y en ausencia del régimen aplicable al que determine el Poder Ejecutivo Nacional. En todos los casos las quitas, remisiones o diferimientos a otorgar, así como su régimen de actualización deberán formar parte de los pliegos y bases de licitación cualesquiera fueran las alternativas empleadas para ello.

10) Establecer mecanismos a través de los cuales los acreedores del Estado y/o de las entidades mencionadas en el art.2° de la presente puedan capitalizar sus créditos.

11) Dejar sin efecto disposiciones estatutarias o convencionales que prevean plazos, procedimientos o condiciones especiales para la venta de acciones o cuotas de capital, en razón de ser titular de éstas el Estado o sus organismos.

12) Disponer para cada caso de privatización y/o concesión de obras y servicios públicos que el Estado Nacional asuma el pasivo total o parcial de la empresa a privatizar, a efectos de facilitar o mejorar las condiciones de la contratación.

13) Llevar a cabo cualquier tipo de acto jurídico o procedimiento necesario o conveniente para cumplir con los objetivos de la presente ley.

Art. 16.- [PREFERENCIAS] El Poder Ejecutivo podrá

otorgar preferencias para la adquisición de las empresas, sociedades o haciendas productivas declaradas "sujeta a privatización", cuando los adquirentes se encuadren en alguna de las clases que se ennumera a continuación; salvo que originen situaciones monopólicas o de sujeción:

1°) Que sean propietarios de parte del capital social.

2°) Que sean empleados del ente a privatizar, de cualquier jerarquía, con relación de dependencia, organizados o que se organicen en Programa de Propiedad Participada o Cooperativa, u otras entidades intermedias legalmente constituidas.

3°) Que sean usuarios titulares de servicios prestados por el ente a privatizar, organizados o que se organicen en Programa de Propiedad Participada o Cooperativa u otras entidades intermedias legalmente constituidas.

4°) Que sean productores de materias primas cuya industrialización o elaboración constituya la actividad del ente a privatizar organizados en Programa de Propiedad Participada o Cooperativa, u otras entidades intermedias legalmente constituidas.

5°) Que sean personas físicas o jurídicas que aportando nuevas ventas relacionadas con el objeto de la empresa a privatizar, capitalicen en acciones los beneficios producidos y devengados por los nuevos contratos aportados.

Art. 17.- [MODALIDADES] Las privatizaciones reguladas por esta ley podrán materializarse por alguna de las modalidades que a continuación se señalan o por combinaciones entre ellas, sin que esta enumeración pueda considerarse taxativa:

1°) Venta de los activos de las empresas como unidad

o en forma separada.

2°) Venta de acciones, cuotas partes del capital social o en su caso, de establecimientos o haciendas productivas en funcionamiento.

3°) Locación con o sin opción a compra, por un plazo determinado, estableciéndose previamente el valor de precio de venta.

4°) Administración con o sin opción a compra, por un plazo determinado estableciéndose previamente el valor de precio de su venta.

5°) Concesión, licencia o permiso.

Art. 18.- [PROCEDIMIENTOS DE SELECCION] Las modalidades establecidas en el artículo anterior, se ejecutarán por alguno de los procedimientos que señalan a continuación o por combinaciones entre ello. En todos los casos se asegurará la máxima transparencia y publicidad, estimulando la concurrencia de la mayor cantidad posible de interesados. La determinación del procedimiento de selección será justificada en cada caso, por la Autoridad de Aplicación, mediante acto administrativo motivado.

1°) Licitación pública, con base o sin ella.

2°) Concurso público, con base o sin ella.

3°) Remate público, con base o sin ella.

4°) Venta de acciones en Bolsas y Mercados del país.

5°) Contratación directa, únicamente en los supuestos de los incs. 2°, 3°, 4° y 5° del art. 16 de la pte. Cuando los adquirentes comprendidos en este inciso participen parcialmente en el ente a privatizar la contratación directa, sólo procederá en la parte en que los mismos participen.

La oferta más conveniente será evaluada no sólo teniendo en cuenta el aspecto económico, relativo al mejor

precio, sino las distintas variables que demuestren el mayor beneficio para los intereses públicos y la comunidad. A este respecto, en las bases de los procedimientos de contratación podrán, cuando resulte oportuno, establecerse sistemas de puntaje o porcentuales referidos a distintos aspectos o variables a ser tenidos en cuenta a los efectos de la evaluación.

Art. 19.- [TASACION PREVIA] En cualquiera de las modalidades del art. 17 de esta ley se requerirá la tasación que deberá ser efectuada por organismos públicos nacionales, provinciales o municipales. En el caso de imposibilidad de llevar a cabo dicha tasación, lo que deberá quedar acreditado por autoridad competente en informe fundado, se autoriza a efectuar las contrataciones respectivas con organismos internacionales o entidades o personas privadas nacionales o extranjeras, las que en ningún caso podrán participar en el procedimiento de selección previsto en el art. 18 de la presente ley. En cualquier caso la tasación tendrá carácter de presupuesto oficial.

Art. 20.- [CONTROL] El Tribunal de Cuentas de la Nación y la Sindicatura General de Empresas Públicas, según sus respectivas áreas de competencia, tendrán intervención previa a la formalización de las contrataciones indicadas en los arts. 17, 18, 19 y 46 de la presente y en todos los otros casos en que esta ley expresamente lo disponga, a efectos de formular las observaciones y sugerencias, que estimen pertinentes. El plazo dentro del cual los órganos de control deberán expedirse será de diez (10) días hábiles desde la recepción de las actuaciones con su documentación respectiva. En caso de no formularse observaciones o sugerencias en dicho plazo, se continuará la tramitación, debiendo devolverse las

actuaciones dentro del primer día hábil siguiente. En el supuesto de formular observaciones o sugerencias, las actuaciones serán remitidas a la Comisión Bicameral creada por el art. 14 de la presente ley y al ministro competente quien se ajustará a ellas o de no compartirlas, elevará dichas actuaciones a decisión del Poder Ejecutivo Nacional.-

CAPITULO III

DEL PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA

Art. 21.- El capital accionario de las empresas sociedades, establecimientos o haciendas productivas declaradas "sujeta a privatización", podrá ser adquirido en todo o en parte a través de un "Programa de Propiedad Participada" según lo establecido en los artículos siguientes.

Art. 22.- [SUJETOS ADQUIRENTES] Podrán ser sujetos adquirentes en un Programa de Propiedad Participada los enumerados a continuación:

- a) Los empleados del ente a privatizar de todas las jerarquías que tengan relación de dependencia. No podrá ser sujeto adquirente el personal eventual, ni el contratado, ni los funcionarios y asesores designados en representación del Gobierno o sus dependencias.
- b) Los usuarios titulares de servicios prestados por el ente a privatizar.
- c) Los productores de materias primas cuya industrialización o elaboración constituye la actividad del ente a privatizar.

Art. 23.- [ESTRUCTURA Y REGIMEN JURIDICO] El ente a privatizar según el Programa de Propiedad Participada deberá estar organizado bajo la forma de Sociedad Anónima en caso de ser necesario, el Poder Ejecutivo Nacional hará uso de las

facultades que le otorga esta ley para el cumplimiento de este requisito.

Art. 24.- El capital de la Sociedad Anónima estara representado por acciones, todas con derecho a voto según las condiciones de su emisión. En caso de ser necesario, se podrán emitir acciones totalmente nuevas en remplazo de las existentes, haciendo uso de las facultades que otorga esta ley.

Art. 25.- Cuando en un Programa de Propiedad Participada concurren adquirentes de distintas clases, sea entre los enumerados en el art. 16 de esta ley, sea con inversores privados, todas las acciones serán del mismo tipo para todas las clases de adquirentes.

Art. 26.- A través del Programa de Propiedad Participada, cada adquirente participa individualmente en la propiedad del ente a privatizar. La proporción accionaria que le corresponderá a cada uno, será determinada en relación directa al coeficiente matemático definido en el artículo siguiente. La proporción accionaria deberá mantenerse aún en los futuros aumentos de capital.

Art. 27.- La Autoridad de Aplicación elaborará un coeficiente de participación para cada clase de adquirente, adecuado a cada proceso de privatización, de acuerdo con lo establecido en este artículo.

a) Para el caso de los empleados-adquirentes el coeficiente deberá ser representativo de la antigüedad, las cargas de familia, el nivel jerárquico o categoría y el ingreso total anual del último año, actualizado.

b) Para el caso de los usuarios-adquirentes, el coeficiente deberá ser representativo del valor

actualizado de los servicios utilizados o de los consumos efectuados durante el último año. Para el caso de usuarios-adquirentes individuales, el coeficiente será también representativo de las cargas de familia. Para el caso de que el usuario adquirente fuere una empresa, el coeficiente será también representativo del total de salarios pagados durante el último año, actualizado.

c) Para el caso de los productores-adquirentes, el coeficiente deberá ser representativo del valor actualizado de la producción del último año. Para el caso de productores-adquirentes individuales, el coeficiente será también representativo de las cargas de familia. Para el caso de que el productor-adquirente sea una empresa, el coeficiente será también representativo del total de salarios pagados durante el último año, actualizado.

Art. 28.- Para cada clase de adquirentes, la asignación del coeficiente deberá ser resultado de la aplicación uniforme de la misma fórmula de determinación para todos y cada uno de ellos. Cuando en un Programa de Propiedad Participada concurren adquirentes de distintas clases de las enumeradas en el art. 16 de esta ley, la Autoridad de Aplicación, al elaborar los coeficientes, establecerá explícitamente los criterios de homologación entre los coeficientes correspondientes a cada clase.

Art. 29.- En los Programas de Propiedad Participada el ente a privatizar deberá emitir bonos de participación en las ganancias para el personal, según lo previsto en el art. 230 de la ley 19.550. A tal efecto, el Poder Ejecutivo

Nacional podrá hacer uso de las facultades que le otorga esta ley. Cada empleado, por su mera relación de dependencia recibirá una cantidad de bonos de participación en las ganancias determinada en función de su remuneración, su antigüedad y sus cargas de familia.

Art. 30.- El precio de las acciones adquiridas a través de un Programa de Propiedad Participada será pagado por los adquirentes en el número de anualidades y del modo que se establezca en el Acuerdo General de Transferencia conforme con lo establecido en esta ley, que no debe entenderse como limitativo de otros modos de pago que pudieren acordarse.

Art. 31.- En el caso de los empleados-adquirentes, se destinarán al pago de las acciones los dividendos anuales, hasta su totalidad, de ser necesario. Para el caso de que éstos resultaran insuficientes, se podrá destinar hasta el cincuenta por ciento (50%) de la participación en las ganancias instrumentada en el bono previsto en el art. 29 de esta ley.

Art. 32.- En el caso de los productores-adquirentes, se podrá destinar al pago de las acciones hasta el veinticinco por ciento (25%) de la producción anual que se elabore en el ente a privatizar. Para el caso de que resultara insuficiente, se podrá destinar al pago hasta el cincuenta por ciento (50%) de los dividendos anuales.

Art. 33.- En el caso de los usuarios-adquirentes, se destinará al pago de las acciones un porcentaje que se adicionará a la facturación de los servicios utilizados o los consumos efectuados. Para el caso de que resulte insuficiente, se podrá destinar al pago hasta el cincuenta por ciento (50%) de los dividendos anuales.

Art. 34.- Como garantía de pago, los adquirentes

comprendidos en un Programa de Propiedad Participada constituirán una prenda sobre las acciones objeto de la transacción, a favor del Estado vendedor o de la Autoridad de Aplicación, en su caso. A ese efecto, las acciones se depositarán en un banco fideicomisario.

Art. 35.- La Sociedad Anónima privatizada, depositará en el banco fideicomisario los importes destinados al pago de las acciones previstos en el Acuerdo General de Transferencia y en los arts. 30, 31, 32 y 33 de esta ley. El Banco pagará al Estado vendedor o a la Autoridad de Aplicación en su caso, las anualidades correspondientes, por cuenta de cada uno de los adquirentes.

Art. 36.- Con el efectivo pago de cada anualidad, se liberará de la prenda prevista en el art. 34 de esta ley la cantidad de acciones ya pagada. Las acciones liberadas serán distribuidas por el banco fideicomisario entre todos los adquirentes, individualmente considerados en función del coeficiente que cada uno le corresponda según lo establecido en los arts. 27 y 28 de esta ley.

Art. 37.- Las acciones pagadas, liberadas de la prenda y asignadas a los adquirentes por el procedimiento establecido en el artículo anterior, será de libre disponibilidad para su propietario, salvo las limitaciones establecidas en el Acuerdo General de Transferencia, las condiciones de emisión o convención en contrario.

Art. 38.- Mientras las acciones no hayan sido pagadas ni liberadas de la prenda, su manejo será obligatoriamente sindicado. El ejercicio de los derechos políticos emergentes de las acciones objeto de un Programa de Propiedad Participada, será regulado por un Convenio de Sindicación de Acciones suscripto por todos los sujetos

adquirentes, según lo establecido en este artículo.

- a) Los Convenios de Sindicación de Acciones se adecuarán a las condiciones de cada Programa de Propiedad Participada en concreto, pudiendo establecerse reglas específicas para cada clase de adquirente enumerada en el art. 22.
- b) Los Convenios de Sindicación de Acciones establecerán la obligación para todos los adquirentes de gestionar colectivamente el conjunto de acciones sindicadas y adoptar por mayoría de acciones sindicadas las posiciones a sostener en las asambleas de la sociedad, con fuerza vinculante para todos.
- c) Los Convenios de Sindicación de Acciones establecerán la obligación de designar por mayoría de acciones sindicadas, un representante o síndico para que ejerza el derecho de voto de todos en las asambleas de la Sociedad Anónima.

Art. 39.- Una vez cumplidos los recaudos del art.37 de esta ley la sindicación será facultativa, según las condiciones de emisión, las disposiciones del Acuerdo General de Transferencia y otras normas convencionales.

Art. 40.- En los casos en que a la adquisición de un ente a privatizar concurren adquirentes comprendidos en un Programa de Propiedad Participada con otro tipo de inversores privados, en el Acuerdo General de Transferencia podrán establecerse mecanismos consensuales independientes de las proporciones relativas de votos entre los distintos grupos de adquirentes, para la adopción de ciertas decisiones esenciales como la designación del Directorio y de los cuadros superiores de la empresa.-

CAPITULO IV

DE LA PROTECCION DEL TRABAJADOR

Art. 41.- [PROTECCION DEL EMPLEO Y SITUACION LABORAL.] En los procesos de privatización ejecutados según las disposiciones de esta ley, por cualesquiera de las modalidades y procedimientos previstos en sus arts. 17 y 18, deberá tenerse en cuenta como criterios en el diseño de cada proyecto de privatización, evitar efectos negativos sobre el empleo y la pérdida de puestos de trabajo, en el marco de una función productiva estable y eficiente. A tal efecto, las organizaciones sindicales representativas del sector correspondiente, podrán convenir con los eventuales adquirentes y la Autoridad de Aplicación mecanismos apropiados

Art. 42.- Durante el proceso de privatización ejecutado según las disposiciones de esta ley por cualesquiera de las modalidades y procedimientos previstos en sus arts. 17 y 18 el trabajador seguirá amparado por todas las instituciones legales, convencionales y administrativas del derecho del trabajo.

Art. 43.- [ENCUADRAMIENTO SINDICAL.] El proceso de privatización por sí, no producirá alteraciones o modificaciones en la situación, encuadramiento y afiliación en materia sindical de los trabajadores de un ente sujeto a privatización, salvo resolución de la autoridad competente en esa materia.

Art. 44.- [SEGURIDAD SOCIAL.] Los trabajadores de un ente sometido al proceso de privatización establecido en esta ley, mantienen sus derechos y obligaciones en materia previsional y de obra social. Las obligaciones patronales, pasan al ente privatizado.

Art. 45.- La condición de empleado-adquirente

comprendido en un Programa de Propiedad Participada no implica para el trabajador en tanto tal -independientemente de su condición de adquirente- modificación alguna en su situación jurídica laboral. En consecuencia le son aplicables sin discriminación alguna las previsiones de los arts. 41, 42, 43 y 44 de esta ley.-

CAPITULO V

DE LAS CONTRATACIONES DE EMERGENCIA

Art. 46.- Durante el término de ciento ochenta (180) días a partir de la vigencia de la presente, prorrogable por igual período y por una sola vez por el Poder Ejecutivo Nacional, los órganos y entes indicados en el art. 1°, previa resolución fundada del órgano competente para contratar que justifique la aplicación al caso del régimen aquí establecido, estarán autorizados a contratar sin otras formalidades que las que se prevén a continuación, la provisión de bienes, servicios, locaciones, obras concesiones, permisos y la realización de todo otro contrato que fuere necesario para superar la presente situación de emergencia. Los procedimientos de contratación en curso podrán continuar según su régimen o ser extinguidos o transformados para su prosecución según el procedimiento aquí previsto. En cualquier caso se aplicará lo dispuesto en los incs. c, d y e del art. 47 lver decrs.544/90, art.2°, 1605/90, arts. 1° y 2°, y 2220/90, art. 1°1.-

Art. 47.- [PROCEDIMIENTO.] Este procedimiento de contratación de emergencia estará sujeto a los siguientes requisitos:

- a) El órgano o ente contratante deberá solicitar la presentación de por lo menos dos (2) ofertas o cotizaciones a empresas reconocidas, cuando ello

resulte posible.

- b) Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado precedente, se recibirán otras ofertas espontáneas, a cuyo efecto, el órgano o ente contratante deberá publicar en cartelera e informar a las Cámaras Empresarias respectivas las bases del requerimiento.
- c) Si la contratación no supere el monto de unidades de contratación que determine la reglamentación, el órgano o ente contratante podrá disponer la adjudicación y perfeccionamiento del contrato, sin requerirse la intervención previa de los órganos de control externo.
- d) En caso de que el monto superase la cantidad de unidades de contratación que la reglamentación determine, se seguirá el procedimiento previsto por el art. 20 de esta ley. En estos casos será obligatoria la publicación de anuncios dintetizados por dos (2) días como mínimo en el Boletín Oficial de la República Argentina, con una anticipación no menor los dos (2) días. Cumplido dicho procedimiento, se celebrará el contrato, el que deberá ser aprobado, a los efectos de su eficacia, por el ministro competente.
- e) Se entenderá por "unidad de contratación", la medida de valor expresada en moneda de curso legal, empleada para determinar el monto de los contratos comprendidos en este régimen.

El valor en moneda de curso legal de cada unidad de contratación será fijado en la reglamentación de la presente,

y su adecuación a las circunstancias de cada órgano o empresa de las indicadas en el art. 1° de esta ley, será determinado y actualizado mensualmente por el ministro de Economía. .

En todos los casos y durante el periodo de emergencia definido en el art. 46 de esta ley y su eventual prórroga, el ministro competente podrá admitir, por resolución fundada y requiriendo la opinión previa de las Cámaras Empresarias atendiendo especialmente la protección antidumping y situaciones especiales de lealtad comercial, la presentación de ofertas sin restricción alguna basada en la nacionalidad del oferente. En este último caso y a los efectos de la comparación de ofertas, serán de aplicación las medidas de protección y preferencia para la industria nacional definidas en las normas que regulen la materia.-

CAPITULO VI

DE LAS CONTRATACIONES VIGENTES

Art. 48.- [EXTINCION POR FUERZA MAYOR.] Facúltase al ministro que fuere competente en razón de la materia a declarar la rescisión de todos los contratos de obra y de consultoría celebrados con anterioridad a la vigencia de esta ley por el sector público descripto en el art. 1° de la presente, por razones de emergencia, que a los efectos de esta ley se considera que constituyen causales de fuerza mayor según el régimen previsto en los arts. 54 de la ley 13.064 y 5° de la ley 12.910, normas que se declaran aplicables a estos efectos a todas las mencionadas locaciones de obra y contratos de consultoría, cualquiera sea el tipo jurídico del ente comitente. Lo dispuesto en este capítulo será aplicable analógicamente a todos los contratos vigentes celebrados por el sector público descripto en el art. 1° de esta ley, con las modalidades que surjan de los regímenes jurídicos de esas

contrataciones.

Art. 49.- [RECOMPOSICION DEL CONTRATO.] La rescisión prevista en el artículo precedente, no procederá en aquellos casos en que sea posible la continuación de la obra, o la ejecución del contrato, previo acuerdo entre comitente o contratante y contratista que se inspire en el principio del sacrificio compartido por ambas partes contratantes. Estos acuerdos deberán ser aprobados por el ministro competente en razón de la materia y deberán contemplar las siguientes condiciones mínimas:

- a) Adecuación del plan de trabajos a las condiciones de disponibilidad de fondos de comitente, sin afectar sustancialmente la ocupación del personal de obreros y empleados afectado directamente a la obra, existente a la fecha de la presente ley.
- b) Aplicación sobre los certificados de variación de costos, incluyendo los relativos a costos financieros por el período de pago, de factores de corrección que contemplen la compensación por la distorsión de los sistemas de ajustes de costos contractuales y que a los efectos de preservar el principio del sacrificio compartido incluyan en sí mismos o por separado un índice de reducción aplicable sobre las diferencias resultantes. La aplicación de este sistema será a partir de la certificación o liquidaciones correspondientes a obra ejecutada en marzo de 1989 y hasta la vigencia del acuerdo que aquí se prevé, el que podrá incluir la aplicación para el futuro de un nuevo sistema de reajuste de costos en reemplazo del vigente a la fecha de la

presente. Los factores de corrección y en su caso sus índices de reducción serán fijados con carácter general por resolución del ministro de Obras y Servicios Públicos en la que también se establecerán los plazos y condiciones de pago de las diferencias resultantes, todo lo cual requerirá la expresa aceptación de la contratista formalizada en el convenio a que hace referencia el presente artículo.

Para la aplicación de este inciso se requerirá que los contratistas acrediten una distorsión significativa por la aplicación de los sistemas de ajustes o reconocimientos de variaciones de costos previstos en el contrato. [ver res.MOSP 249/90]

- c) Refinanciación de la deuda en mora a la fecha de vigencia de la presente, con aplicación del sistema establecido en la ley 21.392, con excepción de su art. 8º, por todo el período de mora. Este régimen no será aplicable en el supuesto de que se conviniera la cancelación de la acreencia resultante de este inciso y del anterior mediante títulos de la deuda pública, en cuyo caso regirán las condiciones y modalidades en ellos establecidos.
- d) Adecuación del proyecto constructivo a las necesidades de ahorro efectivo de recursos cuando aquello resulte técnicamente posible.
- e) Prórroga del plazo de ejecución, para lo cual podrán justificarse las demoras ocurridas a partir del mes de marzo de 1989 y hasta la fecha

de vigencia de la resolución ministerial indicada en el ap. b del presente artículo, sin aplicación de penalidades ni congelamiento del reajusto de costos, cuando el contratista probare la incidencia directa de la situación de emergencia referida al art. 1° de esta ley, en la demora contemplada en este apartado.

f) Renuncia de la contratista a su derecho a percibir gastos improductivos, mayores gastos generales directos o indirectos o cualquier otra compensación o indemnización derivada de la reducción del ritmo o paralización total o parcial de la obra, devengados entre el 1° de marzo de 1989 y la fecha del acuerdo que aquí se prevé.

g) Renuncia de la contratista a reclamar otras compensaciones o créditos por variaciones de costos no certificadas salvo las resultantes del acuerdo celebrado, por el período indicado en el apartado anterior.

Los acuerdos deberán celebrarse en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, prorrogables por igual período máximo y por una sola vez por resolución del ministro competente por razón de la materia. Vencido dicho término sin que se arribe al acuerdo definitivo se procederá según lo indicado en el art. 48 de esta ley. En este caso la continuación de las obras podrá contratarse de acuerdo al procedimiento previsto en los arts. 46 y 47 de esta ley. [ver decrs. 1605/90, arts. 1° y 2°, y 2220/90, art.1°]

CAPITULO VII
DE LA SITUACION DE EMERGENCIA
EN LAS OBLIGACIONES EXIGIBLES

Art. 50.- [SENTENCIAS.] Suspéndese la ejecución de las sentencias y laudos arbitrales que condenen el pago de una suma de dinero dictadas contra el Estado Nacional y los demás entes descriptos en el art. 1° de la presente ley por el plazo de dos (2) años a partir de la fecha de vigencia de la presente ley. Quedan comprendidas en el régimen establecido en el presente capítulo tanto las sentencias condenatorias dictadas contra el Estado Nacional y los entes mencionados en la primera parte de este artículo, en causas promovidas por las Provincias y/o Municipalidades, como aquellas sentencias pronunciadas en juicios que hubiera deducido el Estado Nacional contra las Provincias y/o Municipalidades. Este capítulo será aplicable en jurisdicción provincial en aquellos casos en que se produzca la adhesión prevista en el art. 68 de la presente ley. Quedan comprendidas en el régimen del presente capítulo, las ejecuciones que pudieran promoverse por cobro de honorarios y gastos contra cualquiera de las partes en los juicios contemplados en el presente artículo.

Art. 51.- Las sentencias y laudos arbitrales que se dicten dentro del plazo establecido en el artículo anterior no podrán ser ejecutados hasta la expiración de dicho plazo.

Art. 52.- Vencido el plazo del art. 50 de esta ley, el juez de la causa fijará el término de cumplimiento de la sentencia o laudo arbitral, previa vista al organismo demandado, para que indique el plazo de cumplimiento. En ningún caso ese organismo podrá fijar un plazo mayor al de seis (6) meses. Si dicho organismo no contestare la vista o indicare un plazo irrazonable conforme con las circunstancias

de la causa, el término para el cumplimiento lo fijará el juez.

Art. 53.- [NATURALEZA DE LA OBLIGACION.] A los efectos de los artículos precedentes es indiferente que el objeto de la obligación se hubiera constituido originariamente en una suma de dinero o que se transformara en tal, con motivo de un incumplimiento.

Art. 54.- [EXCEPCIONES.] Quedan excluidos del régimen precedente:

- a) El cobro de créditos laborales, o nacidos con motivo de la relación de empleo público.
- b) El cobro de indemnizaciones por expropiación.
- c) La repetición de tributos.
- d) Los créditos por daños en la vida, en el cuerpo o en la salud de personas físicas o por privación o amenaza de la libertad, o daños en cosas que constituyan elementos de trabajo o vivienda del damnificado.
- e) Toda prestación de naturaleza alimentaria.
- f) Los créditos originados en incumplimientos de aportes y contribuciones previsionales y para obras sociales. Aportes sindicales no depositados en término.
- g) Los créditos generados en la actividad mercantil de los bancos oficiales y de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro.
- h) Las jubilaciones y pensiones, las que se regirán por su régimen específico.
- i) Las acciones de amparo.
- j) Las acciones por recuperación patrimonial de bienes ilegítimamente desposeídos.

Art. 55.- [TRANSACCIONES.] Durante la sustanciación del pleito o el período de suspensión de la ejecución de la sentencia o laudo arbitral podrá, no obstante, arribarse a transacciones en las cuales:

- a) Las costas se establezcan por el orden causado y las comunes por mitades.
- b) Se determine el pago de las sumas debidas en títulos de la deuda pública o equivalentes, con las condiciones y modalidades en ellos determinadas o bien se establezca una quita no inferior al veinte por ciento (20%) y la refinanciación del saldo resultante, o contemplen mecanismos que posibiliten la reinversión en obras y servicios de la deuda reconocida en la transacción. [ver dechr. 1757/90, art 103]

Art. 56.- [RECLAMACIONES Y RECURSOS.] Los actos que resuelvan recursos o reclamaciones, regidos o no por la ley 19.549, relativos a contraversias sobre los supuestos fácticos o de interpretación y aplicación de normas, y que reconozcan créditos en favor del recurrente o reclamante, relativos al pago de una suma de dinero o que se traduzcan en el pago de una suma de dinero, se limitarán al mero reconocimiento del derecho, quedando regidos en cuanto a su ejecutoriedad y en lo que resulte pertinente, al régimen de los arts. 50 a 55 inclusive, de la presente ley. Lo previsto en el citado artículo 55 también resultará aplicable durante la tramitación del recurso o reclamo de que se trate. [ver dechr. 1757/90, art. 102].-

CAPITULO VIII

DE LAS CONCESIONES

Art. 57.- Las concesiones que se otorguen de acuerdo

con la ley 17.520 con las modificaciones intruducidas por la presente ley deberán asegurar necesariamente que la eventual rentabilidad no exceda una relación razonable entre las inversiones efectivamente realizadas por el concesionario y la utilidad neta obtenida por la concesión.

Art. 58.- Incorpórase como párr. 2° del art. 1° de la ley 17.520, el siguiente:

"Se aclara que podrán otorgarse concesiones de obra para la explotación, administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimientos de obras ya existentes, con la finalidad de obtención de fondos para la construcción o conservación de obras que tengan vinculación física, técnica o de otra naturaleza con las primeras, sin perjuicio de las inversiones previas que deba realizar el concesionario. Para ello se tendrá en cuenta la ecuación económico-financiera de cada emprendimiento, la que deberá ser estructurada en orden a obtener un abaratamiento efectivo de la tarifa o peaje a cargo del usuario.

La tarifa de peaje compensará la ejecución, modificación, ampliación, o los servicios de administración, reparación, conservación o mantenimiento de la obra existente y la ejecución, explotación y mantenimiento de la obra nueva. En cualquier caso, las concesiones onerosas o gratuitas, siempre que las inversiones a efectuar por el concesionario no fueren a ser financiadas con recursos del crédito a obtenerse por el Estado o por el concesionario con la garantía de aquél, podrán ser otorgadas por el ministro de Obras y Servicios Públicos mediante delegación expresa del Poder Ejecutivo Nacional, delegación que podrá efectuarse en cualquier estado del trámite de adjudicación, incluso con anterioridad a la iniciación del procedimiento de contratación que corresponda

según el régimen de la presente ley".

Incorpórase como párr. 2° del inc. c del art.2° de la ley 17.520, el siguiente:

"Aclárase que no se considerará subvencionada la concesión por el sólo hecho de otorgarse sobre una obra ya existente".

Sustitúyese el inc. c del art.4° de la ley 17.520 por el siguiente:

"c) Por contratación con sociedades privadas o mixtas. En tal caso se admitirá la presentación de iniciativas que identifiquen el objeto a contratar, señalando sus lineamientos generales.

Si la entidad pública concedente entendiere que dicha obra y su ejecución por el sistema de la presente ley, es de interés público, lo que deberá resolver expresamente, podrá optar por el procedimiento del inc. a o bien por el concurso de proyectos integrales. En tal caso convocará a la presentación de los mismos mediante anuncios a publicarse en el Boletín Oficial y en dos (2) diarios de principal circulación a nivel nacional por el término de cinco (5) días. Dichos anuncios deberán explicitar la síntesis de la iniciativa, fijar el día, hora y lugar de presentación de las ofertas y los días, horarios y lugar de la apertura. El término entre la última publicación de los anuncios y la fecha de presentación de ofertas será de treinta (30) días corridos como mínimo y noventa (90) días corridos como máximo, salvo supuestos de excepción debidamente ponderados por el ministro competente en lo que se podrá extender el plazo máximo.

De existir una oferta más conveniente que la presentada por quien tuvo la iniciativa, según acto administrativo debidamente motivado, el autor de la iniciativa

y el de la oferta considerada más conveniente, podrán mejorar sus respectivas propuestas en un plazo que no excederá de la mitad del plazo original de presentación.

El acto de apertura, la continuación del procedimiento licitatorio, la adjudicación y posterior continuación del contrato se regirán en lo pertinente por los principios de la ley 13.064, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 1° de la presente".

Declárase que la ley 17.520 con las modificaciones aquí introducidas, es de aplicación a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, correspondiéndole al intendente municipal y al secretario competente en la materia las facultades que en dicha ley se le otorgan al Poder Ejecutivo Nacional y al ministro de Obras y Servicios Públicos, respectivamente.-

CAPITULO IX

PLAN DE EMERGENCIA DEL EMPLEO

Art. 59.- Autorízase al Poder Ejecutivo Nacional a establecer un Plan de Emergencia del Empleo, que consistirá en la afectación de fondos para encarar obras públicas de mano de obra intensiva, que sustituya cualquier tipo de trabajo por medio mecánico, y cuyos valores de contratación y plazo de ejecución no superen individualmente los cien millones de australes (A.100.000.000), a valor constantes y seis (6) meses de plazo respectivamente.

Dichas obras deberán ser licitadas y contratadas por las Municipalidades, previos convenios a celebrarse con las autoridades provinciales, mediante procedimientos de contratación que aseguren celeridad, eficiencia e inmediata creación de nuevos puestos de trabajo.

Se exigirá que por lo menos el cincuenta por ciento

(50%) de la mano de obra a ocupar tenga residencia en el lugar donde se ejecuten los trabajos.

Dichas obras se llevarán a cabo, preferentemente, en centros que exhiban los mayores índices de desocupación y subocupación, respetando para su distribución entre las jurisdicciones provinciales los coeficientes fijados por el art.4° de la ley 23.548 [ver res.conjunta del MOSP y MI 158/89 y 24/89]

CAPITULO X

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 60.- [PRIVATIZACION DE SERVICIOS] A los efectos de disminuir el gasto público, mejorar prestaciones o aumentar la eficiencia, autorizase a contratar con el sector privado la prestación de servicios de administración consultiva, de contralor o activa, perteneciente a todos los entes y organismos de la Administración centralizada y descentralizada enumerados en el art. 1° de la presente ley, con excepción del contralor externo establecido por normas especiales.

Art. 61.- [ORGANISMOS ESPECIALES.] Autorizase al Poder Ejecutivo Nacional a suprimir, transformar, reducir, limitar o disolver las comisiones, reparticiones, entes u organismos creados por leyes especiales y a transferir y redistribuir sus bienes y fondos conforme lo considere conveniente.

Art. 62.- [EXPLICITACION DE SUBSIDIOS] A los efectos de sincerar y reflejar en forma expresa el resultado de explotación de las empresas y sociedades estatales, el Poder Ejecutivo Nacional remitirá al Honorable Congreso de la Nación dentro de los noventa (90) días de promulgada la presente ley, el detalle de la estimación de los montos mensuales y anuales ponderados conforme establezca la reglamentación respectiva,

con respecto a los ingresos dejados de percibir como consecuencia de descuentos, bonificaciones, eximición de facturación o facturación reducida y, en general, de cuanta ventaja o privilegio se otorguen a grupo de personas físicas o jurídicas de cualquier índole. Esta información abarcará todos los organismos, empresas y sociedades mencionadas en el art.2° de la presente ley y precisará la o las causas que dieron origen a que se dejaran de percibir esos ingresos aunque estén fundados -entre otras causas- en normas legales o convencionales de cualquier índole.

El Congreso Nacional analizará individualmente los casos y para aquellos que resuelva mantenerlos, votará las partidas presupuestarias respectivas a fin de que queden reflejados en forma explícita los subsidios que se otorguen.

Art. 63.- [PUBLICACION DE BALANCES.] Los entes mencionados en el art. 1°, cuando así corresponda por la naturaleza de su actividad, deberán efectuar sus balances y demás estados de información contable de acuerdo con las normas técnicas y profesionales correspondientes los que serán publicados trimestralmente siguiendo los criterios establecido para las sociedades que coticen en Bolsas. Todos los entes y organismos contemplados en la norma citada, deberán aplicar lo dispuesto en art. 62, último párr. de la ley 19.550, a los efectos de la elaboración de los estados contables o patrimoniales, según corresponda.

Art. 64.- [EJERCICIO DE DERECHOS SOCIETARIOS.] Los derechos societarios correspondientes al sector público nacional en las sociedades o entes con participación de capitales privados, o capitales públicos provinciales o municipales, serán ejercidos por el Ministerio competente por intermedio del secretario correspondiente, quien planteará en

el seno del ente moción de adhesión al régimen de la presente ley cuando éste sea integrado con capital provincial y/o municipal.

Art. 65.- [RADIODIFUSION] Modificase la ley 22.285 de la siguiente forma:

a) Derógase el inc. c del art. 43.

b) Sustitúyese el inc. e del art. 45 por el siguiente:

"No tener vinculación jurídica societaria u otras formas de sujeción con empresas periodísticas o de radiodifusión extranjeras".

c) Deróganse los incs. a y c del art. 46.

Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional de adoptar las medidas necesarias, hasta el dictado de una nueva ley de radiodifusión, para regular el funcionamiento de aquellos medios que no se encuentren encuadrados en las disposiciones vigentes hasta el momento de la sanción de esta ley de emergencia.

Art. 66.- [COMPLEJO FERROVIAL ZARATE-BRAZO LARGO Y PUENTE GENERAL BELGRANO] Derógase la ley 23.037 y sus normas complementarias y reglamentarias. El régimen de explotación del Complejo Ferroviario Zárate-Brazo Largo y del Puente General Belgrano, se regirá por las previsiones de la presente ley.

Art. 67.- Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a delegar en el ministro competente el ejercicio de las competencias que por esta ley tiene asignadas. A su vez, el ministro competente se encuentra autorizado a delegar en los secretarios de su Ministerio las competencias propias a él acordadas por esta ley .

Art. 68.- Sin perjuicio de la aplicación según su régimen propio de las normas de naturaleza federal contenidas

en esta ley, la misma será aplicable al Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Le corresponde al gobernador y al intendente, respectivamente, las competencias que por esta ley se confiere al Poder Ejecutivo Nacional o a sus ministros, excepto las competencias otorgadas al Poder Ejecutivo Nacional en el capítulo II de esta ley, las que residirán en dicho órgano, en cuyo caso, el intendente municipal tendrá las competencias del art. 13. Invitase a las Provincias a adherirse al régimen de la presente ley.

Art. 69.- Esta ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina. Todo conflicto normativo relativo a su aplicación deberá resolverse en beneficio de la presente ley. Sus disposiciones no serán aplicables a la transferencia de acciones prescripta por la ley 23.105.

Art. 70.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.-

Alberto R. Pierri - Eduardo Duhalde - Esther H. Pereyra Arandía de Perez Pardo - Alberto J. Iribarne

Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de agosto del año mil novecientos ochenta y nueve.-

ANEXO I

I. PRIVATIZACIONES O CONCESIONES

- Empresa Nacional de Telecomunicaciones	-Concesión -Privatización
- Aerolíneas Argentinas	-Privatización parcial o total
- Optar	-Privatización
- Buenos Aires - Catering	- Privatización

- Empresa Líneas Marítimas Argentinas	-Privatización parcial o total
- Yacimientos Carboníferos Fiscales	-Privatización parcial -Concesión
- Conarsud	-Privatización
- Dirección Nacional de Vialidad	-Concesiones parciales o totales de reparación y mantenimiento de la red troncal vial nacional y obras de infraestructura especiales
- Ferrocarriles Argentinos	
Transporte de pasajeros y de carga.	-Concesiones
Infraestructura o servicios	-Concesiones
- Empresa Nacional de Correos y Telégrafos	-Concesiones
- Yacimientos Petrolíferos Fiscales	-Concesión, asociación y/o contratos de locación en áreas de exploración y explotación -Sociedades mixtas para áreas de recuperación asistida
- LS 84 - TV Canal 11	-Privatización
- LS 85 - TV Canal 13	-Privatización
- LR 3-Radio Belgrano	-Privatización
- LR 5-Radio Excelsior	-Privatización
- Todos los medios de comunicación administrados por el Estado exceptuados: LS 82 ATC - Canal 7 - LRA 1 - Radio Nacional Buenos Aires Radio Difusión Argentina al	-Privatización

Exterior (RAE) y las emisoras que integran el servicio nacional de radiodifusión

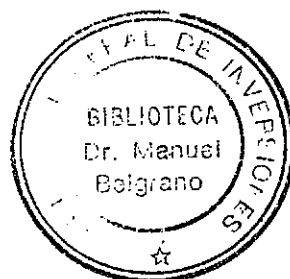
- Subterráneos de Buenos Aires - Privatización o concesión parcial o total
- CEAMSE (Cinturón Ecológico Area Metropolitana Sociedad del Estado) (Sujeta a la adhesión de la Provincia de Buenos Aires). - Privatización o concesión parcial o total
- Casa de Piedra - Concesión parcial o total (Sujeta adhesión Provincias)
- Servicios de prestaciones culturales, recreativas y mantenimiento urbano de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires - Privatización o concesión parcial o total
- Junta Nacional de Granos - Privatización o concesión total o parcial unidades de campaña - elevadores terminales (portuarios)
- Administración General de Puertos. Descentralización y provincialización - Concesión total o parcial de puertos o instalaciones portuarias principales o accesorias
- Casa de Moneda - Concesión
- Talleres Navales Dársena Norte (SACI y N) - Privatización total
- Ex planta industrial expropiada mediante ley n°19123 - Privatización total
- Compañía Azucarera Las Palmas S.A. - Privatización total o parcial

II. TRANSFERENCIAS A JURISDICCIONES PROVINCIALES O MUNICIPALES MEDIANTE CONVENIO

- Obras Sanitarias de la Nación
- Dirección Nacional de Vialidad - Rutas nacionales de interés provincial
- Gas del Estado - Redes de distribución

III. ORDENAMIENTO INSTITUCIONAL EMPRESARIO

- Obras Sanitarias de la Nación.
Créase un ente tripartido entre la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y Obras Sanitarias de la Nación
- Empresa Nacional de Combustible, involucra: YPF, Gas del Estado, YCF
- Empresa Federal de Energía Eléctrica, involucra: Agua y Energía Eléctrica, Hidronor y generación de energía de otras empresas nacionales.



IV. CONCESIONES DE SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION (Prioridad Sector Cooperativo)

- Gas del Estado
- SEGBA
- Agua y Energía
- Obras Sanitarias de la Nación

ANEXO II

I. PRIVATIZACIONES O CONCESIONES

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| - Forja Argentina Sociedad Anónima | - Privatización |
| - Carboquímica Argentina S.A.Mixta | - Privatización |

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| - Petroquímica Río Tercero S.A.Mixta | - Privatización |
| - Polisor S.A. Mixta | - Privatización |
| - Monómeros Vinílicos S.A.Mixta | - Privatización |
| - Petropol S.A. Mixta | - Privatización |
| - Induclor S.A. Mixta | - Privatización |

Participación

	estatal %	Corresponde a:
- Forja Argentina S.A.	100	Ministerio de Defensa
- Carboquímica Argentina S.A. Mixta	42	DGFM
- Petroquímica Río Tercero S.A.	39,455	YPF 30,857% DGFM 8,598%
- Polisor S.A.Mixta	30	DGFM
- Manómetros Vinílicos S.A. Mixta	30	DGFM
- Petropol S.A.Mixta	30	DGFM
- Induclor S.A.Mixta	30	DGFM

3.- DECRETO 1105/89

Dictado el 20/10/89 - B.O. 24/10/89

REGLAMENTACION DE LA LEY 23.696

Visto: la ley 23.696, por la cual se declara el estado de emergencia administrativa, y

CONSIDERANDO:

Que el presente decreto se dicta en uso de las facultades emergentes del art. 86, incs. 1° y 2°, de la Const. Nacional y art. 59 de la ley de impuestos de sellos (t.o.1986)
POR ELLO:

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA DECRETA:

Artículo 1° - Apruébase la "reglamentación de la ley 23.696", que como ANEXO I forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2° - El incumplimiento de los plazos previstos en la reglamentación que se aprueba por el art. 1°, siempre que no exceda los establecidos por la ley 23.696, no afectará la validez de los actos cumplidos fuera de ellos sin perjuicio de la responsabilidad que pueda caber a los funcionarios causantes de la demora. Las actuaciones conducentes a deslindar esa responsabilidad tramitarán en forma independiente.

Art. 3° - Eximense del pago del impuesto de sellos (t.o.1986) a todos los actos que sean consecuencia de lo dispuesto en los capítulos I, II, III, VI y VII de la ley 23.696 y de los artículos correspondientes de su reglamentación.

Art. 4° - Facúltase a los ministros y secretarios de la Presidencia de la Nación a delegar, en los órganos inmediatamente inferiores las competencias a aquéllos otorgada por la reglamentación aprobada por el presente decreto.

Art. 5° - Invítase a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a adherir a las normas reglamentarias aprobada

por el presente decreto.

Art. 6° - Derógase el decr. 1768/86.

Art. 7° - El presente decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación.

Art. 8° - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

CARLOS S. MENEM
Presidente de la Nación

JOSE R. DROMI
Ministro O.S.P.

NESTOR M. RAPANELLI
Ministro de Economía

EDUARDO BAUZA
Ministro Interior

ITALO A. LUDER
Ministro Defensa

ANTONIO E. GONZALEZ
Ministro de Salud y
Acción Social

ANTONIO F. SALONIA
Ministro Educación
y Justicia

DOMINGO F. CAVALLO
Ministro de RR.EE. y Culto

ANEXO I

REGLAMENTACION DE LA LEY 23.696

CAPITULO I

DE LA EMERJENCIA ADMINISTRATIVA

Artículo 1°- Durante el estado de emergencia las pautas para establecer el valor de las tarifas de los servicios prestados por los entes, empresas o sociedades comprendidos en el art. 2° de la ley 23.696, el precio de los combustibles, y las remuneraciones de todo personal que se desempeñe en el Estado Nacional y los entes, empresas o sociedades comprendidos en la norma antes citada serán propuestos por el Ministerio de Economía.

A tales efectos, la información correspondiente será proporcionada por el respectivo ente, empresa o sociedad y elevada al Ministerio de Economía por intermedio del Ministerio competente.

Art. 2°- Las intervenciones decretadas a partir del día 8 de julio de 1989 y hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 23.696, se declaran también fundadas en los arts. 1°

y 2° de la ley 23.696 y regidas por los arts. 3°, 4°, 5° y conchs. de ella.

El plazo a que hace referencia el art. 2° de aquella ley, se computará a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente reglamento.

Las intervenciones dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional desplazan a los órganos de administración y dirección de los entes, empresas o sociedades cualquiera sea su tipo jurídico, con las mismas facultades que aquellas.

Mientras dure la intervención, serán de aplicación para el ente, empresa o sociedad intervenido los regimens de contratación establecidos por la ley 23.696 y por las leyes o reglamentos generales o espaciales para la Administración Pública, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los regimenes de contratación propios de cada ente. Continuarán siendo de aplicación directa las normas regulatorias de contratos de especifica naturaleza propios de la especial actividad del ente, empresa o sociedad intervenido, y los fijados para las operaciones financiadas por organismos internacionales de crédito.

Art. 3°- La reorganización provisional podrá abarcar todos los aspectos de la gestión, empresa o sociedad intervenido.

A los efectos de la reorganización del ente, empres o sociedad por acto administrativo sujetos a la previa autorización del ministerio o secretaria de la Presidencia de la Nación competente, el interventor podrá disponer la extinción transformación, escisión, función o creación de dependencias orgánicas, cualquiera sea su denominación o ubicación estructural, asignándoles incluso a las subsistentes, las misiones, funciones y ámbitos de competencia

que estime corresponder. La reorganización así dispuesta incluíra la reubicación del personal de cualquier jerarquía o, en su caso, la extinción de la relación de empleo con las indemnizaciones que correspondieren, o el pase a disponibilidad previsto en la ley 22.140, según el régimen legal que les resulte aplicable. Esta norma no será de aplicación para las dependencias orgánicas creadas por leyes generales o especiales, sin perjuicio de lo previsto en el art. 61 de la ley 23.696.

Estarán excluidos del derecho a percibir indemnización:

- a) Los que no reunieren al momento de dictarse la medida, los requisitos necesarios para la adquisición de la estabilidad.
- b) Los que se estuviesen desempeñando en violación a las normas sobre incompatibilidad.
- c) Los que se hallaren en condiciones de obtener el el porcentaje máximo del haber de la jubilación ordinaria.

Queda suspendido el reconocimiento y pago de la indemnización, al personal que se encontrare o fuere sometido a sumario administrativo o a proceso criminal del que pudiere resultar su cesantía, exoneración o despido, hasta tanto finalicen las respectivas actuaciones con resolución definitiva o, en su caso, sobreseimiento provisional, firmes. Si resultare que debía corresponderle cesantía, exoneración o despido perderá definitivamente el derecho a la indemnización. Si le hubiere correspondido sanción de suspensión, el importe de ésta le será descontado de la indemnización, todo ello a valores constantes y homogéneos.

El personal que haya percibido la indemnización no

podrá reingresar al servicio del Estado Nacional o de los entes, empresas o sociedades enunciados en el art. 1° de la ley 23.696 durante los cinco (5) años posteriores a su baja, sea como agente permanente, transitorio o contratado. El Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer excepciones fundadas, en cuyo caso el beneficiario de la excepción reintegrará, actualizada, la parte de la indemnización percibida, proporcional a los meses que faltaren para cumplir el período de cinco (5) años, indicado.

La actualización se hará por el índice del salario del peón industrial en la Capital Federal publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Las bajas de personal que se produzcan por aplicación de este artículo serán comunicadas a la Secretaría de la Función Pública de la Presidencia de la Nación en la forma y plazos que ésta determine.

Art. 4° - En el área de la Presidencia de la Nación corresponde al secretario del cual dependa el ente, empresa o sociedad intervenido, el ejercicio de las facultades y competencia conferidas por el art. 4° de la ley 23.696.

Art. 5° - Sin reglamentación.

Art. 6° - La decisión de transformar la tipicidad jurídica de los entes, empresas y sociedades deberá adoptarse dentro del plazo establecido en el art. 1° de la ley 23.696, sin perjuicio de que el perfeccionamiento de tal transformación se concrete en el término que se establezca en el acto que decida la transformación.

El decreto de transformación de la tipicidad jurídica aprobará, asimismo, el régimen o estatuto orgánico del ente, empresa o sociedad.

Art. 7° - El decreto de creación de una nueva

empresa aprobará, asimismo, su estatuto orgánico.

Las adecuaciones presupuestarias que sea menester efectuar, se harán con intervención del Ministerio de Economía

CAPITULO II

DE LAS PRIVATIZACIONES Y PARTICIPACION DEL CAPITAL PRIVADO

Art. 8° - Las normas contenidas en el presente capítulo serán también aplicables, en lo que corresponda, para los entes, empresas y sociedades incluidos en los anexos de la ley 23.696.-

Art. 9° - El proyecto de decreto de declaración de "sujeta a privatización" de los entes, empresas o sociedades enunciados en el art. 8° de la ley 23.696, se iniciará por el ministro o secretario de la Presidencia de la Nación en cuya jurisdicción se encuentre el ente, empresa o sociedad a privatizar, de oficio o por instrucción del Poder Ejecutivo Nacional.-

Art. 10.- El ministro o secretario de la Presidencia de la Nación actuante en la elaboración del decreto de declaración de "sujeta a privatización" deberá indicar los privilegios, cláusulas monopólicas o prohibiciones discriminatorias cuya eliminación o modificación propone, incluyendo una relación de las disposiciones vigentes, estableciendo expresamente las que han de quedar total o parcialmente excluidas o modificadas. La propuesta también deberá expresar el origen y fundamento que en aquel momento tuvo el privilegio, cláusula o prohibición cuya exclusión o modificación se propone, las dificultades que su mantenimiento general al proceso de privatización, los beneficios derivados de su exclusión o modificación y la viabilidad técnica y económica de la actividad a privatizar, una vez eliminado o modificado el privilegio, la cláusula o la prohibición.

Se considerará excluida, en los términos del art. 10 de la ley 23.696, toda norma legal o reglamentaria que establezca privilegios, prohibiciones o monopolios que no sean expresamente ratificados en el decreto de declaración de "sujeta a privatización". En todos los casos en que se pretenda el mantenimiento de un determinado subsidio o privilegio, deberá darse intervención al Ministerio de Economía, quien dictaminará al respecto.

Art. 11.- Luego de sancionada y promulgada la ley que apruebe la declaración de "sujeta a privatización", o a partir de la vigencia de este reglamento en el caso de las sociedades comprendidas en el párr. 2° del art. 8° de la ley 23.696, el ministro o secretario de la Presidencia de la Nación en cuya jurisdicción se encuentre el ente, empresa o sociedad a privatizar iniciará, de inmediato y de oficio, los procedimientos tendientes a la privatización, aplicando estrictamente el principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites, previstos en el art. 1°, inc.b de la ley 19.549 y su modificatoria 21.686 A tal efecto la Autoridad de Aplicación podrá constituir Comisiones de Trabajo específicas con los cometidos que les asigne. En los casos en que se aplique un Programa de Propiedad Participada, un (1) representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social integrará dichas Comisiones. En los supuestos previstos en el tercer párr.del art.11 de la ley 23.696, deberá invitarse al Gobierno de la Provincia que corresponda a designar su representante en dichas Comisiones de Trabajo. Se podrá proceder a la contratación de asesores de las Comisiones de Trabajo cuando ello resultare necesario.

La ejecución de obras por la modalidad de concesión de obra pública estará regida por la ley 17.520 con las

reformas introducidas por los arts. 57 y 58 de la ley 23.696 y su reglamentación, normas que serán también de aplicación para las concesiones de obras alcanzadas por la declaración de "sujeta a privatización". El régimen de la concesión de obra pública será de aplicación analógica, hasta tanto se sancione el cuerpo normativo pertinente, a las concesiones de uso y servicio que no tengan por objeto principal la ejecución de obras nuevas o de mantenimiento, reparación o ampliación, en cuyo caso regirá en forma directa el régimen jurídico de la concesión de obra pública.

Art. 12.- Sin reglamentación.

Art. 13.- Será Autoridad de Aplicación a todos los efectos de la ley 23.696, el ministro o secretario de la Presidencia de la Nación en cuy jurisdicción se encuentre el ente, empresa o sociedad a privatizar.

a) Dentro de los noventa (90) días, contados desde la vigencia de la ley aprobatoria de la declaración de "sujeta a privatización", plazo prorrogable por igual término, por resolución del ministerio o secretario de la Presidencia de la Nación competente, dichos órganos elevarán un informe al Poder Ejecutivo Nacional con la propuesta concreta referida al procedimiento y modalidad más adecuados para hacerla efectiva.

I. El carácter total o parcial de la privatización propuesta y su fundamento.

II. Aquellas de las alternativas de procedimientos enunciadas en el art. 15 de la ley 23.696 que estime adecuadas al caso.

III. La o las modalidades de las enunciadas en el art. 17 de la ley 23.696 que entienda adecuadas

para materializar la privatización.

IV. El procedimiento de selección de los enumerados en el art. 18 de la ley 23.696 que se prevé utilizar y los plazos estimados para cada una de las etapas del procedimiento de privatización.

V. La eventual propuesta sobre las preferencias a que se refiere el art. 16 de la ley 23.696 y la aplicabilidad, en el caso, de un Programa de Propiedad Participada, especificando en este supuesto clases de sujetos adquirentes y proporción del capital accionario comprendido en el Programa.

b) En los casos de los entes, empresas y sociedades incluidos en los ANEXOS de la ley que por el presente se reglamenta y en los casos de sociedades comprendidas en el párr. 2° del art. 8° de la ley 23.696, el plazo referido en el ap. a del presente artículo se computará a partir de la entrada en vigencia de este reglamento.

c) El producido de las privatizaciones efectuadas según el régimen de la ley 23.696 ingresará a rentas generales.

Art. 14.- La copia del informe requerido en el artículo anterior será remitida a la Comisión Bicameral creada en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación por el art. 14 de la ley 23.696.

Art. 15.-

Inc. 1°) Sin reglamentación.

Inc. 2°) Podrán construirse sociedades adoptando cualquiera de las formas jurídicas previstas por la legislación vigente, incluyendo las sociedades comerciales de

derecho común cualquiera sea la proporción con la que el Estado concorra a su situación. Los aportes del Estado podrán consistir en cualquier tipo de bienes. El aporte en propiedad de un bien del dominio público artificial implicará su desafectación de pleno derecho.

La esición de empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas debiera fundarse en razón de conveniencia comprobada y deberá contemplar la biabilidad técnica y económica futura de cada una de las unidades resultantes de aquélla.

Inc. 3º) Las reformas de los estatutos societarios deberán contemplar la modificación o supresión de aquellas dispoiciones que restrinjan o impidan la participación de capital privado.

Inc. 4º) Sin reglamentación

Inc. 5º) La negociación de retrocesiones y la extinción o modificación de contratos y concesiones será procedente en la medida que resulte necesaria para coadyuvar al procedimiento de privatización, debiendo darse intervención al Ministerio de Economía quien, por intermedio de la dependencia de su jurisdicción que resulte competente, determinará su exacta incidencia sobre los recursos del Tesoro Nacional. La vigencia de dichos arreglos estara sujeta a la condición suspensiva de la privatización.

Inc. 6º) Sin reglamentación.

Inc. 7º)

a) Los permisos, licencias o concesiones para explotación de los servicios públicos que se otorguen como consecuencia de un procedimiento de privatización, deberán contemplar:

I. Los servicios específicamente incluidos,

discriminando aquellos cuya explotación se conceda bajo régimen de exclusividad, de los que se concedan en un régimen de competencia.

II. El plazo por el cual se otorga, el que será compatible con una eficiente explotación del servicio, la adecuada amortización de las inversiones que se lleven a cabo y una razonable rentabilidad. Podrá convenirse su prórroga, así como las modalidades para hacerla efectiva.

III. El ámbito geográfico comprendido.

IV. Las obligaciones que, según el caso, se le impongan a la permisionaria, licenciataria o concesionaria, tanto aquellas referidas al pago de un canon, como a la calidad y extensión del servicio o a la modernización de los medios materiales y técnicos afectados a la prestación de éste.

V. Los derechos comprendidos en el permiso, licencia o concesión, incluyendo aquellas disposiciones que pudieran importar el ejercicio por parte del permisionario, licenciatario o concesionario de acciones o derechos contra terceros.

VI. El régimen tarifario, especificando los conceptos que la tarifa debe descubrir, incluyendo la rentabilidad adecuada a la inversión realizada. En la fijación del régimen tarifario deberá intervenir el Ministerio de Economía.

VII. El régimen sancionatorio aplicable.

VIII. Para las concesiones de servicios públicos donde se establezcan cláusulas de rescate o reversión, se preverá un justo régimen

indemnizatorio y el destino de los bienes afectados a la explotación del servicio. En tales casos el rescate y la reversión tendrán carácter excepcional, según fundadas razones de interés público.

IX. La información técnica y económica financiera que el permisionario, licenciatario o concesionario deberá suministrar o tener disposición de la autoridad de control de servicio.

b) El otorgamiento de permisos, licencias o concesiones en las condiciones aquí establecidas, podrá formar parte, total o parcialmente del contrato que se celebre en los términos del art. 17 de la ley 23.696, cuando el ente, empresa o sociedad privatizado haya sido titular, al momento de su privatización, del servicio público a conceder.

c) Las razones de defensa o seguridad nacional que determinen la preferencia al capital nacional deberán fundarse suficientemente e informarse al Poder Ejecutivo Nacional con carácter previo al establecimiento de la preferencia, con intervención del Ministerio de Defensa, el que determinará fundadamente la existencia de tales razones en cada caso comprendido en este inciso.

Inc. 8°) El otorgamiento de beneficios tributarios a la empresa que se privatice deberá utilizarse con criterio restrictivo y sólo cuando ello resulte indispensable para el éxito del procedimiento de privatización, dándose intervención previa al Ministerio de Economía. Asimismo, en cada caso, la

autoridad que conceda los beneficios deberá calcular, juntamente con la Secretaría de Hacienda, el costo fiscal que surja de la aplicación de la medida propuesta para cada año en que ella tenga efecto, para su imputación al cupo fiscal que a tal efecto se incluirá en la ley de presupuesto general de la Nación. Facúltase al Ministerio de Economía para establecer el sistema de utilización de los beneficios tributarios que se acuerden bajo el presente régimen, el que determinará el cupo fiscal que a tal efecto se incluirá en el presupuesto general de la Nación.

Inc. 9º) Deberá darse intervención previa al Ministerio de Economía el que a través de la dependencia que designe, determinará su incidencia en el presupuesto general de la Nación.

Inc. 10) Deberá darse intervención previa al Ministerio de Economía, a través de la dependencia que designe cuando se afectare el presupuesto o Tesoro Nacional.

Inc. 11) Cuando la disposición que se deje sin efecto sea estatutaria, deberá estarse a la reglamentación del inc. 8º del art.15 de la ley 23.696. En los casos en que fuera convencional, resultará de aplicación la reglamentación del inc. 5º del mismo artículo de la ley 23.696.

Inc. 12) Deberá darse intervención previa al Ministerio de Economía.

Inc. 13) Sin reglamentación.

Art. 16.- Las preferencias referidas en el art. 16 de la ley 23.696 consistirán en el otorgamiento de prioridad para la adjudicación en el supuesto de situación de equivalencia de ofertas.

En los casos en que de la oferta participen uno o más de los tipos de adquirentes previstos en los incs. 2º, 3º y

4° del art. 16 de la ley 23.696, a través de un Programa de Propiedad Participada, las preferencias serán otorgadas en relación a la proporción del capital accionario comprendido en dicho Programa.

Art. 17.- Las modalidades reguladas en el art. 17 de la ley 23696 podrán utilizarse atendiendo a las circunstancias de cada caso con el objetivo de llevar a cabo la efectiva privatización en los menores plazos y las mejores condiciones posibles.

Inc. 1°) Las ventas de activos de las empresas podrán ser parciales o totales.

Las ventas parciales podrán serlo de cada uno de los activos, individualmente considerado o por conjuntos que constituyan unidades económicamente operables.

Las ventas totales implicarán, al mismo tiempo, la disolución y liquidación del ente, empresa o sociedad al cual estaban afectados los activos vendidos.

Inc. 2°) La venta de acciones o cuotas parte del capital social podrá ser total o parcial y a uno o más adquirentes. Como principio general se preferirá a la venta total.

La venta de establecimientos o haciendas productivas en funcionamiento podrá comprender la totalidad de aquellos que el ente, empresa o sociedad tenga la explotación, en cuyo caso corresponderá la disolución y liquidación de éste.

La venta de establecimientos o haciendas productivas en funcionamiento podrá comprender la totalidad de aquellos que el ente, empresa o sociedad tenga en explotación en cuyo caso corresponderá la disolución y liquidación de éste.

Inc. 3°) El contrato de locación deberá especificar la existencia o no de opción a compra en oportunidad de su

celebración y en su caso, las causales de resolución de tal opción.

En el supuesto de pactarse la opción a compra, podrá convenirse la imputación o no de los alquileres pagados, como pago a cuenta del precio.

En las condiciones de contratación podrá establecerse que la determinación previa del valor del precio de venta tendrá carácter provisional, pudiendo ajustarse en más o en menos según resulte de las auditorías e inventarios que, por haberse convenido en el respectivo contrato, se practiquen, durante el plazo de la locación.

Inc. 4º) El contrato de administración con o sin opción a compra deberá especificar la existencia o no de opción de compra en oportunidad de su celebración y en su caso las causales de resolución de tal opción.

La administración asumida tendrá carácter oneroso y podrá estar referida a la obtención de resultados positivos en la gestión de la operación encomendada, conforme a criterios previstos en el contrato.

En las condiciones de contratación podrá establecerse que la determinación previa del valor del precio de venta tendrá carácter provisional, pudiendo ajustarse en más o en menos según resulte de las auditorías e inventarios que por haberse así convenido en el respectivo contrato, se practiquen durante la gestión del administrador.

Inc. 5º) La concesión, licencia o permiso que se otorgue se ajustará en lo pertinente a lo dispuesto en el art. 15, inc. 7º de la ley 23.696 y su reglamentación y en los arts. 57 y 58 de las normas citadas.

Art. 18.- En cada caso, la Autoridad de Aplicación deberá redactar el Pliego de Bases y Condiciones que regirá

dicho procedimiento, dándose intervención al Ministerio de Economía cuando se afectaren o pudieren llegar a afectarse fondos del Tesoro Nacional. La redacción deberá asegurar la máxima transparencia y publicidad durante la totalidad del procedimiento de privatización y en cada una de sus etapas, lo cual no obstará a que se procure, asimismo, la mayor celeridad en la tramitación de aquél.

El estímulo a la concurrencia de la mayor cantidad posible de interesados no impedirá que el Pliego de Bases y Condiciones establezca los requisitos que deberán reunir los proponentes y las exclusiones que con carácter general y fundadas en razones de conveniencia debidamente explicadas, resulte necesario aplicar en cada caso. No será exigida la inscripción en el Registro de Contratistas Estatales, sin perjuicio de que deban ponderarse los antecedentes que los inscriptos tuvieran en ellos asentados.

Incs. 1° y 2°) Licitación pública o concurso público

a) El acto de adopción del procedimiento deberá indicar el carácter nacional o internacional de aquél y si lo será con o sin base.

b) El llamado a licitación o concurso público deberá difundirse como mínimo mediante inserción de los correspondientes avisos en el Boletín Oficial de la República Argentina y en tres diarios de amplia circulación en el país.

Los anuncios se harán durante diez (10) días y con no menos de treinta (30) días corridos de anticipación a la fecha de la apertura respectiva computados a partir del inmediato siguiente al de su última publicación.

Sin perjuicio de las publicaciones mínimas

especificadas, procurará darse la mayor difusión al llamado mediante otras publicaciones o la utilización de medios masivos de difusión. En el caso de licitaciones o concursos de carácter internacional podrá disponerse la difusión del llamado en el exterior cuando se estime que ello redundará en una mayor concurrencia de oferentes y no implique incurrir en erogaciones desproporcionadas. La Autoridad de Aplicación podrá asimismo, cursar invitaciones a participar a todas aquellas personas de existencia visible o ideal, locales de capital nacional o extranjero o del exterior, que estime conveniente. En todo caso que lo estime oportuno podrá requerir la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a efectos de que las Embajadas de la República Argentina en el exterior colaboren en la difusión del llamado.

c) El llamado deberá detallar, como mínimo:

- I. El nombre del organismo licitante.
- II. El carácter nacional o internacional de la licitación, la existencia o no de base y en su caso, el monto de ésta.
- III. El objeto del llamado.
- IV. El lugar donde pueden consultarse los Pliegos de Bases y Condiciones y el horario durante el cual pueden llevarse a cabo las consultas.
- V. El precio del Pliego de Bases y Condiciones.
- VI. El lugar de presentación de las ofertas.
- VII. El día, hora y lugar previstos para el acto

de apertura de las ofertas.

- d) El Pliego de Bases y Condiciones deberá estar redactado en términos claros y precisos. Se procurará evitar la utilización de conceptos vagos o ambiguos y en caso de que ello no pueda evitarse, deberá precisarse en el propio pliego el sentido y alcance con que se los utiliza en el caso. Deberá consignar como mínimo:

I. El objeto del llamado, claramente especificado, indicando:

A) La modalidad a través de la cual se llevará a cabo la privatización.

B) La unidad que se licita.

II. Las disposiciones generales relativas al procedimiento, indicando:

A) Horario y lugar para tomar vista de las actuaciones y efectuar presentaciones.

B) Cómputo de los plazos, procedimiento y oportunidad de su prórroga.

C) Procedimiento para la formulación de consultas, plazos para su contestación y forma de hacerlas extensivas a la totalidad de los adquirentes de pliegos.

D) Formas en que habrán de llevarse a cabo las notificaciones y su efectos.

E) Requisitos relativos o certificaciones, traducciones y legalizaciones.

F) Características de los ejemplares oficiales del Pliego de Bases y Condiciones, el régimen y efectos de su adquisición.

G) Las exigencias relativas a la denuncia del

domicilio real o legal y la constitución del domicilio especial de los interesados así como aquellas vinculadas a la designación de un apoderado o representante hábil para recibir las notificaciones y tomar vista de las actuaciones.

III. Las eventuales informaciones técnicas y económico-financieras a entregar o facilitar a los proponentes especificando en su caso, el procedimiento a través del cual cada uno de los interesados pueda llevar a cabo a su costa, los estudios y verificaciones que considere convenientes para la adecuada formulación de su propuesta.

IV. Los requisitos que deberán reunir los proponentes, cuidando de no incluir exigencias que puedan resultar excesivas en oportunidad de la presentación de las propuestas, y que puedan ser cumplidas con posterioridad a la adjudicación por quien resulte adjudicatario. Deberá exigirse que el proponente acredite por la forma que se establezca, tanto su solvencia patrimonial como especialmente, su idoneidad técnica y antecedentes en la actividad que es objeto de privatización.

La adquisición de un ejemplar oficial de Pliego de Bases y Condiciones será requisito para poder formular propuestas.

V. Los requisitos relativos a las ofertas, su contenido, forma y lugar de presentación. Si se optara por un sistema de doble sobre, deberá discriminarse con precisión la información que

habrá de incluirse en cada uno de ellos.

En todo caso, se indicará:

- A) Formalidades de las ofertas y cantidad de ejemplares que deban presentarse.
 - B) Datos, informes y exigencias relativos a los oferentes que aquéllas deben contener, tanto los referidos a su existencia jurídica como los vinculados a sus antecedentes técnicos, empresariales, capacidad económico-financiera y demás informaciones que permitan evaluar sus condiciones.
 - C) Las eventuales exigencias respecto a la propuesta relativa a los planes de explotación y expansión de la unidad que se privatiza, tales como programas de actividad; innovaciones o mejoras en la organización, instalaciones y tecnologías; inversiones futuras; volúmenes ocupacionales, precio ofrecido, forma de pago y todo otro dato que permita la configuración integral de aquélla y su ulterior evaluación.
 - D) Documentación que debe acompañarse a la oferta, tanto relativa al oferente, como a la oferta misma.
 - E) Plazo y lugar para la presentación de las ofertas
 - F) Especificación de las garantías que los oferentes deberán constituir, así como las que corresponda constituir al adjudicatario, especificando monto, porcentajes y formas de constitución.
- VI. Determinación del plazo de mantenimiento de las ofertas y los efectos de su incumplimiento.
- VII. Determinación del día, lugar, hora y

formalidades del acto de apertura.

VIII. Organos, plazos y procedimientos de evaluación de las ofertas y su impugnación.

IX. Organo competente, plazo, forma y efectos del acto de adjudicación.

e) Los pliegos preverán además el procedimiento de tramitación, ajustándose a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia, aplicando en lo que fuere pertinente las regulaciones contenidas en la ley de contabilidad, el reglamento de contrataciones del Estado y la ley de obras públicas.

f) Existirá una garantía de impugnación, que deberá constituir quien formule impugnaciones, que le será devuelta en caso de ser acogida favorablemente su pretensión o que perderá en la misma medida en que tal pretensión sea rechazada. El Pliego de Bases y Condiciones establecerá la forma y el mecanismo de determinación del monto de garantía, cuidando que éste no constituya un obstáculo al ejercicio del derecho de defensa.

g) Podrá incluirse en el Pliego de Bases y Condiciones, cuando se estime conveniente, sistemas de puntajes o porcentuales referidos a distintos aspectos o variables a ser tenidos en cuenta a los efectos de la evaluación, cuidando que tales sistemas se funden en criterios generales y objetivos y no desnaturalicen el principio de concurrencia. En tales casos deberá especificarse cada una de las variables en consideración, el puntaje posible de obtener en

cada una y el porcentaje que ella refleje en la calificación final de la oferta.

- h) La preadjudicación deberá establecer un orden de mérito y deberá ser decidida dentro del plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados desde la apertura, notificándose a todos los oferentes.

Podrá ser impugnada cumpliéndose con la respectiva garantía dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada.

- i) La adjudicación deberá decidirse dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo para impugnar y deberá resolver la totalidad de las impugnaciones.

- j) Las impugnaciones a la adjudicación, que deberán ser también garantizadas en la forma prevista en este reglamento, tramitarán por expediente separado formado por las copias pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal, excepto que se configuren las situaciones previstas por el último párr. del art. 12 de la ley nacional de procedimientos administrativos 19.549.

- k) Las Comisiones de Trabajo previstas en el art. 11 de la presente reglamentación serán los órganos competentes para llevar a cabo la totalidad del procedimiento de selección hasta el proyecto de adjudicación que será elevado al ministro o secretario de la Presidencia de la Nación competente para su resolución o elevación al Poder Ejecutivo Nacional según corresponda.

Inc. 3°) [REMATE PUBLICO.] Los pliegos preverán el procedimiento de tramitación, ajustándose a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia, aplicando en lo que fuere pertinente las regulaciones contenidas en la ley de contabilidad y el reglamento de contrataciones del Estado, sin perjuicio de la aplicación de las normas que resulten pertinentes de los incs. 1° y 2° de este artículo.

Inc. 4°) Sin reglamentación.

Inc. 5°) [CONTRATACION DIRECTA] Los pliegos preverán el procedimiento de tramitación, ajustándose a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia, aplicando en lo que fuere pertinente las regulaciones contenidas en la ley de contabilidad, el reglamento de contrataciones del Estado o la ley de obras públicas según corresponda por la naturaleza de la contratación sin perjuicio de la aplicación de las normas que resulten pertinentes de los incs. 1° y 2° de este art.

Art. 19.- El Ministerio de Economía será consultado sobre las pautas a aplicar en cada tasación. La imposibilidad a que se refiere el art. 19 de la ley 23.696 puede ser técnica o temporal. Se considerará que existe imposibilidad temporal de efectuar la tasación por parte de organismos públicos nacionales, provinciales o municipales cuando no puedan efectuarla dentro del plazo en que resulte necesaria según los objetivos de cada privatización, lo que deberá constar explicado en el informe a que alude el art. 13 de esta reglamentación.

La contratación de tasaciones privadas como así también la de los asesoramientos previstos en el art. 11 de este reglamento, podrán efectuarse directamente, previa compulsas de antecedentes y requerimiento de honorarios de hasta tres (3) posibles postulantes con méritos equivalentes a

juicio de la Autoridad de Aplicación.

Art. 20.- Sin reglamentación.-

CAPITULO III

DEL PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA

Art. 21.- Sin reglamentación.

Art. 22.- El decreto previsto en el art. 13 de esta reglamentación establecerá para cada proceso de privatización:

- a) Los requisitos necesarios para acreditar la condición de empleado, usuario o productor, a los efectos del art. 22 de la ley 23.696.
- b) Los procedimientos a través de los cuales los sujetos adquirentes señalados en el art. 22 de la ley 23.696, expresarán su adhesión al Programa de Propiedad Participada en forma individual.
- c) Los procedimientos a través de los cuales los sujetos adquirentes señalados en el art. 22 de la ley 23.696, expresarán su adhesión al Programa de Propiedad Participada en forma colectiva.

Art. 23.- El acto que disponga las modificaciones estructurales necesarias para adecuar el ente a privatizar a la forma de sociedad anónima, estará expresamente sometido a la condición suspensiva de que la privatización a través de un Programa de Propiedad Participada efectivamente se concrete.

Art. 24.- Cuando resulte necesaria la emisión de acciones nuevas, tal emisión se dispondrá en el mismo acto señalado en el artículo anterior. En él también deberán establecerse las condiciones de emisión. La emisión estará sometida a la misma condición suspensiva establecida en el artículo anterior. En todos los casos en que se proponga la emisión de nuevas acciones, la Autoridad de Aplicación deberá comunicarlo al Ministerio de Economía, el que a través del

órgano correspondiente adoptará juntamente con la Autoridad de Aplicación la decisión pertinente relativa a su emisión, condiciones y monto total.

Art. 25.- Sin reglamentación.

Art. 26.- Las bases conceptuales y los métodos matemáticos para la formulación del coeficiente de participación definido en el art. 27 de la ley 23.696, serán elaborados por una Comisión Técnica, designada por la Autoridad de Aplicación y compuesta por un (1) representante del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, un (1) representante del Ministerio de Economía, un (1) representante de la Secretaría de Planificación de la Presidencia de la Nación y un (1) representante del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Esta Comisión Técnica elaborará también las bases conceptuales y los métodos matemáticos para la formulación de los "criterios de homologación" previstos en el art. 28 de la ley 23.696.

Tales bases conceptuales y métodos, serán aprobados por el Poder Ejecutivo Nacional.

Art. 27.- La elaboración del coeficiente de participación definido en el art. 27 de la ley 23.696, será realizada por la Autoridad de Aplicación para cada proceso de privatización específico, de acuerdo a las bases y métodos elaborados por la Comisión Técnica señalada en el artículo anterior. Una vez elaborado, el coeficiente será aprobado por acto expreso.

Art. 28.- Sin reglamentación.

Art. 29.- Sin reglamentación.

Art. 30.- Sin reglamentación.

Art. 31.- Sin reglamentación.

Art. 32.- Sin reglamentación.

Art. 33.- Sin reglamentación.

Arts. 34, 35 y 36.- A los efectos establecidos en los arts. 34, 35 y 36 de la ley 23.696, el Acuerdo General de Transferencia que instrumente el negocio principal de compraventa de acciones a través del Programa de Propiedad Participada deberá contener como anexos:

- a) La designación del banco fideicomisario.
- b) El contrato de prenda previsto en el art. 34 de la ley 23.696, que deberá contemplar los modos como se implementará en el caso el mecanismo de pago y de liberación de las acciones previsto en su art. 36.
- c) El contrato de fideicomiso con el banco, que deberá contemplar el modo en que se implementarán en el caso los mecanismos de cobro, pago, liberación de acciones y distribución de ellas establecidos en los arts. 35 y 36 de la ley 23.696, y toda otra previsión contractual destinada a la implementación del Programa de Propiedad Participada.

Art. 37.- El Acuerdo General de Transferencia, establecerá los mecanismos y condiciones adecuados a cada caso para recompra a sujetos adquirentes, de acciones comprendidas en un Programa de Propiedad Participada y en su caso, su venta a nuevos sujetos adquirentes.

Art. 38.- Sin reglamentación.

Art. 39.- Sin reglamentación.

Art. 40.- Las decisiones esenciales a las que se refiere el artículo, pueden referirse a cualquier cuestión de ese carácter relativa a la empresa. Las mencionadas en el artículo son sólo ejemplificativas.-

CAPITULO IV

DE LA PROTECCION DEL TRABAJADOR

Art. 41.- Sin reglamentación.

Art. 42.- Sin reglamentación.

Art. 43.- Sin reglamentación.

Art. 44.- En las condiciones de privatización podrá convenirse que el Estado Nacional se hará cargo, total o parcialmente, de aquellas obligaciones cuyas causas se originen antes de la privatización, aunque se exterioricen con posterioridad a ella. En dicho supuesto deberá darse intervención previa al Ministerio de Economía, quien dictaminará al respecto.

En todos los casos los entes que se privaticen deberán entregar, al materializar el traspaso, a cada uno de los trabajadores, un certificado de trabajo conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de previsión y de seguridad social.

En ningún caso será responsable el ente privatizado por los incumplimientos laborales o previsionales anteriores a la privatización, los que estarán a cargo del Estado Nacional.

Art. 45.- Sin reglamentación. -

CAPITULO V

DE LAS CONTRATACIONES DE EMERGENCIA

Art. 46.- Se entenderá por procedimiento de contratación en curso, a aquellos en los que, a la fecha de publicación de la ley 23.696, no se haya perfeccionado el contrato respectivo.

Art. 47.-

Inc. a) Se entenderá por empresas reconocidas, a

aquellas que, constituidas regularmente, no se encuentren inhabilitadas para contratar con el Estado de acuerdo a los regímenes en cada caso vigentes y a la presente reglamentación

También se considerarán empresas reconocidas, a aquellas que, aún no encontrándose inscriptas en los Registros de Contratistas, acrediten su idoneidad técnica, moral, económica y financiera, contando con antecedentes verificables en el país o en el extranjero.

Inc. b) La publicación en cartelera y la información a las Cámaras Empresarias deberá ser simultánea a la solicitud de ofertas.

Las presentaciones de ofertas espontáneas deberán concretarse en el mismo plazo, el que será fijado en cada caso por el órgano o ente, empresa o sociedad contratante, al solicitar las ofertas a que se refiere el inc. a) del art. 47 de la ley 23.696.

Inc. c) El monto máximo de unidades de contratación por el que podrá el órgano o ente, empresa o sociedad contratante disponer la adjudicación y perfeccionamiento del contrato, será fijado por el Ministerio de Economía.

Inc. d) Superado el monto máximo de unidades de contratación que fije el Ministerio de Economía, los órganos y entes, empresas o sociedades enumerados en el art. 1º de la ley 23.696 elevarán al ministro o secretario de la Presidencia de la Nación competente, las propuestas de contratación conforme al presente régimen cuando se hayan completado los requisitos y trámites exigidos.

El anuncio sintetizado tendrá el efecto de edicto, podrá ser agrupado y deberá contener, como mínimo, el procedimiento de contratación, el objeto de la contratación, el órgano comitente, el monto del contrato y el lugar de

presentación de ofertas espontáneas.

Inc. e)

I. El valor de cada unidad de contratación se fijará por el Ministerio de Economía dentro de los quince (15) días de publicada la presente reglamentación.

II. En la solicitud o invitación que el comitente formule según los incs. a y b del art. 47 de la ley 23.696, se hará constar que, en caso de que la contratación no fuese aprobada, el oferente carece de derecho alguno a formular reclamo de ningún tipo.

III. La oferta más conveniente será seleccionada teniendo en cuenta el criterio y principio enunciados en el último párr. del art. 18 de la ley 23.696.-

CAPITULO VI

DE LAS CONTRATACIONES VIGENTES

Art. 48.-

a) Declarada por el ministro o secretario de la Presidencia de la Nación la rescisión de un contrato de locación de obra, con fundamento en lo previsto en el art. 48 de la ley 23.696, el comitente la notificará al contratista y le indicará la fecha y lugar en que deberá proceder a entregar las obras y/o trabajos. En la fecha indicada se llevará a cabo el inventario de los bienes y elementos existentes en la obra, dejándose constancia de su estado, luego de lo cual el comitente recibirá la obra provisionalmente, suscribiéndose el acta

respectiva.

En caso de incomparecencia del contratista, el comitente podrá tomar la obra directamente, practicar las medidas que estime pertinentes y labrar el acta de recepción, en la que se dejará constancia de los mismos recaudos citados en el párrafo anterior. Dicha acta se tendrá por aceptada y reconocida por el contratista que no hubiere comparecido.

- b) Las fianzas, garantías y/o fondos de reparo serán devueltos al contratista, si correspondiere, luego de operado el vencimiento del plazo de garantía y de efectuada la recepción definitiva prevista en el contrato.
- c) A los fines de la aplicación del inc. a del art. 54 de la ley 13.064, al que remite el art. 48 de la ley 23.696, no se considerarán como necesarios para la obra de los equipos, herramientas, instalaciones, útiles y demás enseres del contratista.

Por resolución fundada del ministro o secretario de la Presidencia de la Nación que fuere competente, se podrán disponer excepciones a lo determinado en el párrafo anterior.

En tal caso, si dentro del plazo de noventa (90) días contados desde la fecha de la notificación de la rescisión, contratista y comitente no arribaren a un acuerdo respecto al valor de dichos bienes, este último podrá liquidar de oficio los importes que estime corresponder al contratista por tales conceptos, siguiendo el

criterio que determina el art. 54 de la ley 13.064 en su inc.a, quedando sujeta a decisión judicial o arbitral la cuestión por el remanente pretendido.

El procedimiento establecido precedentemente será aplicable, en lo que resultare pertinente, a los demás contratos del sector público a que se refiere el último párr. del art. 48 de la ley 23.696, debiendo tenerse en cuenta el objeto y particularidades del contrato de que se trate, como asimismo:

- I. En ningún caso el contratista podrá reclamar lucro cesante, beneficios o utilidades dejados de percibir con motivo de la rescisión.
- II. En los casos en que el comitente hubiere entregado materiales o elementos al contratista, éstos deberán ser devueltos al comitente dentro del plazo que éste fije.
- III. A los fines de la liquidación y pago de los créditos del contratista anteriores a la rescisión del contrato, tales como facturas o certificados impagos, actualizaciones por mora o intereses impagos, aquél deberá acreditarlos fehacientemente y presentar un detalle pormenorizado de ellos, efectuando las liquidaciones del caso.

Art. 49.- La necesidad del continuar con la ejecución del contrato, previo acuerdo de partes sobre las bases establecidas en el art. 49 de la ley 23.696, será decidida en cada caso por el ministro o secretario de la Presidencia de la Nación competente, según el siguiente

procedimiento, sin perjuicio de declarar su rescisión conforme con lo dispuesto por el art. 48 de la ley 23.696 cuando su continuación resultara, en cualquier caso, afectada por la situación de emergencia contemplada en la citada norma.

a) El procedimiento será iniciado de oficio o a petición del administrado.

En el primer caso se le notificarán al contratista las nuevas condiciones de ejecución del contrato, con arreglo a los incs. a y d del art. 49 de la ley 23.696, proponiendo además las condiciones de pago de la deuda en mora que pudiere existir, según lo establecido en el inc.

c) del mismo artículo.

El contratista deberá aceptar o rechazar la propuesta dentro del término de diez (10) días hábiles de notificado, proponiendo, en su caso, la aplicación de las restantes condiciones conforme a lo previsto en el citado art. 49. Si las modificaciones fueren aceptadas por el contratista, se formalizará el acuerdo pertinente en los términos del art. 49 de la ley 23.696. Si la propuesta fuere rechazada o no hubiere respuesta en término, se decidirá acerca de la rescisión del contrato con el régimen y efectos establecidos en los arts. 48 de la ley 23.696 y de esta reglamentación.

Respecto de los entes, empresas y sociedades, el ministro o secretario de la Presidencia de la Nación competente, fijará el procedimiento de aprobación de los acuerdos de recomposición o de la resolución de extinción de los contratos.

Si la propuesta es aceptada con variante y/o con el requerimiento de la aplicación de las restantes condiciones del art. 49 de la ley 23.696 y su reglamentación, se procederá, en lo que corresponda, según lo establecido en el inciso siguiente.

- b) El contratista podrá requerir la recomposición del contrato, proponiendo las condiciones ajustadas a lo dispuesto en el art. 49 de la ley 23.696 y de esta reglamentación que estime corresponder, condicionando su propuesta al conocimiento del factor de corrección establecido en el inc. b de dicha norma, si aquél no hubiere sido aún publicado y de resultar necesaria su aplicación.

Presentada la propuesta, el ministro o secretario de la Presidencia de la Nación competente, podrá reclazarla, decidiendo acerca de la rescisión del contrato en los términos del art. 48 de la ley 23.696 si el contratista no aceptará su continuación en las condiciones originarias, o si su continuación, a juicio del ministro o secretario de la Presidencia de la Nación y en cualquier caso, resultara afectada por la situación de emergencia declarada por la ley 23.696.

El ministro o secretario de la Presidencia de la Nación podrá, en su caso, proponer al contratista modificaciones a su requerimiento de recomposición, aplicándose el procedimiento previsto en el inciso anterior, aunque limitado a

la aceptación o rechazo por parte del contratista de la nueva propuesta, todo ello sin perjuicio de su aceptación del factor de corrección cuando fuese publicado, habiendo formulado la reserva en tal sentido antes autorizada. Arribado al acuerdo éste se formalizará conforme con lo dispuesto en el art. 49 de la ley 23.696. En todos los casos, en que las sumas a abonar debieran ser total o parcialmente a cargo del Tesoro Nacional, deberá integrarse a las negociaciones un representante del Ministerio de Economía.

c) El acta acuerdo de recomposición del contrato deberá ser aprobada por el ministro o secretario de la Presidencia de la Nación competente y contendrá como mínimo los elementos que se mencionan a continuación:

I. Comitente.

II. Contratista.

III. Domicilio de ambas partes.

IV. Instrumentos que acrediten la legitimación de quien firme en representación del contratista.

V. Contrato a que se refiere.

VI. Monto reconocido al contratista en virtud de los concepto de los incs. b y c del art. 49 de la ley 23.696, plazo y forma de pago, en su caso recibo de los títulos de deuda pública.

VII. Conformidad expresa del contratista con las liquidaciones que se practiquen el valor de los factores de corrección e índices de reducción, los plazos y condiciones de pago y las bases de cálculo y metodología de aplicación tenidas en

cuenta por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos al establecer los factores de corrección.

VIII. Individualización de los títulos que reciba el contratista.

IX. En su caso, la adecuación del proyecto constructivo y en todo supuesto, el nuevo plazo de obra y el plan de trabajo pertinente y la exención de multa que hubiera correspondido por retraso.

X. La renuncia de pleno derecho, a efectuar cualquier tipo de reclamo administrativo o judicial originado en el régimen de variaciones de costos correspondientes a las certificaciones de obra ejecutada desde marzo de 1989 hasta la fecha de aprobación del acuerdo que aquí se prevé siendo ella extensiva a los valores de los factores de corrección y a los índices de reducción fijados por la resolución del ministro de Obras y Servicios Públicos a que alude el inc. b. del art. 49 de la ley 23.696, bases de cálculo y metodología de aplicación emergentes de ella, que con ajuste el caso resulte.

XI. La renuncia a reclamar gastos improductivos, mayores gastos generales directos e indirectos o cualquier otra compensación o indemnización derivados del menor ritmo o paralización total o parcial de ejecución de la obra, generados en el período indicado, como así también al resarcimiento de los daños y perjuicios por la mora en el pago, mecanismos de actualización,

plazos y condiciones por el mismo concepto, con motivo de las obligaciones vencidas a que se refiere el inc. c del art. 49 de la ley 23.696.

XII. En su caso, la constancia de que las partes suscriben el acta acuerdo ad referendum del ministro o secretario de la Presidencia de la Nación competente en la materia.

XIII. Número de cuotas y monto de cada una.

XIV. Fecha de vencimiento de la primera cuota.

XV. Cláusula de mora.

d) La resolución del ministro de Obras y Servicios Públicos a que alude el inc. b del art. 49 de la ley 23.696, será publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina por tres (3) días consecutivos.

Con carácter previo al acuerdo previsto en el último párr. del art. 49 de la ley 23.696 y para los casos en que el contratista haya solicitado la aplicación del citado factor de corrección, se liquidará la incidencia del factor de corrección y su reducción, sobre las certificaciones de variación de costos efectivamente emitidas y que correspondan a obra ejecutada entre marzo de 1989 inclusive y la última emitida a la fecha de esta liquidación. Sólo se considerará que ha existido distorsión significativa cuando el total de tal incidencia arroje una suma de dinero igual o superior al porcentaje que fije el Ministerio de Obras y Servicios Públicos en oportunidad de dictar la resolución a que alude el inc. c, ap. X precedente, sobre el monto total de la

certificación por variación de costos del período aquí comprendido.

El índice de reducción no será inferior al porcentaje que fije el Ministerio de Obras y Servicios Públicos en la misma oportunidad, aplicado sobre el factor de corrección que se establezca.

La eventual modificación del sistema contractual ajuste para los períodos de certificación posteriores al acuerdo aquí contemplado, se regirá por lo dispuesto en el dechr. 2875/75 ratificado por la ley 21.250, y dechr. 2348/76, y podrá reservarse en el acuerdo, de no estar concluida su tramitación. Esta tramitación no podrá interrumpir la relativa al acuerdo aquí regulado. La falta de reserva no obstará a su aplicación en el futuro conforme a las normas que regulan la materia.

e) A los efectos de la aplicación del inc.e del art. 49 de la ley 23.696 se entenderá que son causales de incidencia directa de la situación de emergencia cualquiera de las siguientes:

I. Distorsión significativa en los términos establecidos en el inciso anterior. Al solo efecto de la prórroga del plazo, se practicará liquidación tomando en cuenta el plan de trabajo vigente a marzo de 1989, aun cuando éste no haya sido efectivamente ejecutado.

II. Situación de mora de la comitente: la prórroga se hará por el período en que la mora se haya mantenido.

- f) El órgano o ente, empresa o sociedad que celebró el acuerdo a través del Ministerio o Secretaría de la Presidencia de la Nación competente, deberá remitir al Ministerio de Economía, dentro de los quince (15) días de aprobada, copia de la pertinente acta acuerdo que suscriba.
- g) Los acuerdos de modificación del régimen de variación de costos contractual, celebrado a partir de junio de 1989 por cualquiera de los órganos, entes, empresas y sociedades indicados en el art. 1° de la ley 23.696, en los que, de aplicarse la metodología establecida en el inc. de de este artículo, no resulte la distorsión significativa allí determinada serán revisados y podrán ser dejados sin efecto. En los casos en que la distorsión significativa quedase comprobada de acuerdo con aquella metodología, por el período indicado en el ap. b del art. 49 de la ley 23.696 se aplicará el factor de corrección allí contemplado o la metodología pactada, según lo que arroje un menor monto a cargo de la comitente. Las diferencias resultantes en favor de la comitente y que hubiesen sido abonadas a la contratista, serán deducidas del primer pago que a aquélla se le efectúe, con la aplicación del régimen de la ley 21.392.
- h) Podrá aplicarse a los créditos resultantes de lo previsto en los incs. b y c del art. 49 de la ley 23.696, lo dispuesto en el art. 55 inc. i de esta reglamentación.-

CAPITULO VII

DE LA SITUACION DE EMERGENCIA EN LAS OBLIGACIONES EXIGIBLES

Art. 50.- El régimen de suspensión de sentencias y laudos arbitrales alcanza a los procesos de ejecución, cualquiera sea el estado en que se encuentren a la fecha de vigencia de la ley 23.696, incluyendo los embargos ejecutorios y otras medidas de ejecución. La suspensión alcanzará a todo requerimiento judicial de pago de sumas de dinero que deba ser satisfecho con fondos del Tesoro Nacional o de los entes, empresas y sociedades enumerados en el art. 1° de la ley 23.696. Los procesos se reanudarán una vez fenecido el plazo establecido en el art. 50 de dicha ley, según el procedimiento de su art. 52.

Art. 51.- La suspensión contemplada en los arts. 50 y 51 de la ley 23.696 alcanza a las costas y otros accesorios que fueran materia de la condena.

Art. 52.- Los funcionarios y profesionales que ejerzan la representación o defensa del Estado Nacional o de los demás entes, empresas y sociedades a que se refiere el art. 1° de la ley 23.696 remitirán nota al Ministerio de Economía haciendo saber el requerimiento de pago, con copia de la resolución en que se funde y de aquella que establezca el criterio con que deberá liquidarse la obligación en lo sucesivo, solicitando se arbitren los recaudos necesarios para poder informar al tribunal interviniente, una vez vencido el plazo de suspensión, la fecha que habrá de cancelarse el crédito.

El Ministerio de Economía procederá a la creación de un Registro de las Obligaciones de Pago que le fueren informadas en los términos del presente artículo y realizará los estudios necesarios para determinar la fecha probable de

cancelación de cada una de ellas, la que será informada a los funcionarios o profesionales que ejerzan la representación o defensa de los intereses del sector público, en el proceso de que se trate en cada caso, antes del 23 de junio de 1991.

A los fines de la fijación del plazo para el pago se tendrá especialmente en cuenta que éste no podrá ser mayor de seis (6) meses, contados a partir del día 23 de agosto de 1991.

Art. 53.- Sin reglamentación.

Art. 54.- Las excepciones comprenderán:

- a) El total de la sentencia por el capital, sus ajustes e intereses, los honorarios y demás costas procesales de los juicios incluidos en el art. 54 de la ley 23.696, que integren la condenación en costas contra los sujetos enumerados en el art. 50 de la misma ley.
- b) Los créditos enunciados en el art. 54 de la ley 23.696 que surjan de una sentencia o laudo que incluya otros créditos no previstos en la enumeración referida, a cuyos fines deberá efectuarse la respectiva discriminación.
- c) Las jubilaciones, pensiones y los haberes de retiro, los cuales se regirán por el régimen que les resulte aplicable en cada caso.

Art. 55.- A los efectos de la aplicación del art. 55 de la ley 23.696 se observarán las siguientes normas de procedimiento:

- a) En cada uno de los entes, empresas y sociedades mencionados en el art. 1° de la ley 23.696, sus interventores o autoridades superiores, deberán constituir dentro de los quince (15) días de

publicado el presente reglamento, una Comisión Asesora con el fin de analizar las propuestas que los particulares formulen, ponderando su legitimidad, oportunidad, mérito o conveniencia y aconsejar la conducta a adoptarse. En el ámbito de las Jefaturas de Estado Mayor Generales de las Fuerzas Armadas esta Comisión será designada por el ministro de Defensa. Dicha Comisión estará formada por cinco (5) miembros seleccionados entre los funcionarios de mayor jerarquía con conocimientos que los tornen aptos para el tratamiento de las cuestiones en litigio. El jefe del Servicio Jurídico Permanente será obligatoriamente uno de los miembros y podrá ser asistido por el o los profesionales del servicio que a tal efecto designe. [ver dect.1757/90, art. 101]

La Comisión contará, a su vez, con cinco (5) miembros suplentes, uno de los cuales deberá ser un profesional letrado del Servicio Jurídico Permanente.

En todos los casos en que las sumas a abonar deban ser total o parcialmente a cargo del Tesoro Nacional, deberá integrarse a la Comisión un (1) representante del Ministerio de Economía.

- b) En los procesos administrativos arbitrales o judiciales en los que el Estado Nacional sea parte, la Comisión Asesora será designada por el ministro o secretario de la Presidencia de la Nación competente, según el ámbito donde tramite el proceso en cuestión. Esta Comisión tendrá la

integración indicada en el inc. a precedente. En este caso, se considera que el concepto de funcionarios de mayor jerarquía comprende el nivel de secretario, subsecretario y asesor de gabinete ministerial o de las secretarías de la Presidencia de la Nación. El jefe del Servicio Jurídico Permanente será obligatoriamente uno de los miembros y podrá ser asistido por el o los profesionales del servicio que a tal efecto designe. [ver de cr. 1757/90, art. 101]

- c) I. Recibida la propuesta transaccional, a partir de lo cual las actuaciones serán calificadas de secreta conforme al art. 38 del reglamento aprobado por de cr. 1759/72 y sus modificatorios, la Comisión Asesora se expedirá a su respecto dentro del plazo de treinta (30) días hábiles administrativos y elevará su informe al ministro, secretario de la Presidencia de la Nación u órgano superior del ente descentralizado, según los casos. La Comisión Asesora se encuentra facultada a requerir mejoras a la propuesta, sin que ello signifique aceptación de derecho alguno, ni conformidad con las propuestas.

- II. En la Administración centralizada, elevado el informe de la Comisión Asesora, el ministro o secretario de la Nación decidirá dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles administrativos prorrogables por única vez y por igual término, acerca de la aceptación o rechazo de la propuesta y sus eventuales mejoras. La notificación del acto de aceptación de la propuesta formaliza y da

vigencia al acuerdo transaccional, el que será puesto en conocimiento del tribunal que pudiere estar interviniendo en la causa.

III. En los entes, empresas o sociedades y en el ámbito de las Jefaturas de Estado Mayor Generales de las Fuerzas Armadas se seguirá el procedimiento indicado precedentemente en aquellos casos en que la suma de dinero comprometida en la eventual transacción no supere a la fecha en que se expida la Comisión, el triple del monto autorizado para la procedencia del recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación previsto en el art. 254 del Cód. de Proc. en lo Civil y Comercial de la Nación. De superarse este monto, el órgano superior del ente, empresa o sociedad y la Jefatura de los Estados Mayores Generales elevará las actuaciones al ministro o al secretario de la Presidencia de la Nación competente, con el informe elaborado por la respectiva Comisión Asesora y sin más trámite. Los órganos de la Administración centralizada, entes mencionados, decidirán dentro del plazo indicado en el ap. II precedente y devolverán las actuaciones al ente, empresa, sociedad o Jefatura de los Estados Mayores Generales para la emisión inmediata del acto aprobatorio de la propuesta según las instrucciones que se le impartan o para su archivo en caso de rechazo de la propuesta transaccional.

IV. En cualquier caso, el órgano competente para

decidir, en definitiva, acerca de la propuesta podrá requerir de la contraparte una mejora de ella.

V. La intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación podrá requerirse cuando la importancia o complejidad de la cuestión así lo aconsejen y será obligatoria cuando el monto de la transacción supere la suma de un mil millones de australes (A 1.000.000.000), actualizable trimestralmente según el índice general de precio mayorista elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

VI. En los casos de significativa o relevante trascendencia jurídica, económica, social o política, el órgano superior del ente, empresa o sociedad, la Jefatura de los Estados Mayores Generales o el ministro o secretario de la Presidencia de la Nación, elevará las actuaciones directamente a la Comisión Asesora de transacciones que se crea en el siguiente inciso.

d) Créase en la jurisdicción de la Procuración del Tesoro de la Nación la Comisión Asesora de transacciones, que tendrá por objeto examinar las propuestas que se formulen en asuntos que revista significativa o relevante trascendencia jurídica, económica, social o política.

La Comisión deberá quedar integrada dentro del plazo de quince (15) días de la vigencia del presente reglamento y recibirá de la Procuración del Tesoro de la Nación el apoyo técnico y administrativo necesario.

I. La Comisión estará constituida por el señor procurador del Tesoro, quien ejercerá su presidencia, y por un (1) representante de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación y un (1) representante del Ministerio de Economía, todos ellos miembros permanentes de aquella.

También se integrará en cada caso con un (1) representante del o los Ministerios o Secretarías de la Presidencia de la Nación en cuya jurisdicción actúen el o los órganos, entes, empresas o sociedades que sean partes de las actuaciones.

Los representantes de los organismos mencionados no podrán revestir jerarquía inferior a la de subsecretario.

El procurador del Tesoro podrá ser suplido -en caso de ausencia o impedimento- por el subprocurador del Tesoro.

En análoga situación, los restantes integrantes de la Comisión podrán ser reemplazados por asesores de gabinete de la máxima categoría o directores generales o nacionales.

II. La Comisión tendrá las siguientes funciones y facultades:

- A) Expedirse sobre las propuestas ponderando su legitimidad, oportunidad, mérito o conveniencia y aconsejando la conducta a adptar.
- B) Avocarse, fundadamente, al conocimiento de transacciones que no hubieran sido sometidas a su consideración y que revistan la señalada

trascendencia.

- C) Pedir, en forma directa, a los jefes de todos los ramos y departamentos de la Administración y a las autoridades superiores o interventores de los entes, empresas o sociedades enumerados en el art 1° de la ley 23.696 y por su conducto a los demás empleados, los informes que crea convenientes, quedando aquéllos obligados a darlos.
- D) Proponer al Poder Ejecutivo Nacional por el conducto pertinente, las pautas generales que deberán observarse en la celebración de las transacciones.
- E) Contratar asesores o efectuar consultas profesionales especializadas, cuando las circunstancias así lo justifiquen, abonando los honorarios que en cada caso se convengan.
- F) Dictar su reglamento interno.

III. Las propuestas de transacción serán remitidas a consideración de la Comisión con el previo pronunciamiento de la Delegación del Cuerpo de Abogados del Estado (ley 12.954) del área en que se tramiten las actuaciones en cuestión o de la Dirección Nacional de Asuntos Judiciales y Fiscales de la Procuración del Tesoro en su caso. El dictamen de la Comisión deberá producirse dentro del plazo máximo de treinta (30) días hábiles administrativos, contados a partir del recibo de las actuaciones respectivas. Dicho plazo quedará automáticamente prorrogado por el tiempo que insuma la contestación de aquellos informes que la Comisión requiera, fundamentalmente, para

su pronunciamiento.

La Comisión se encuentra facultada para requerir mejoras a las propuestas, sin que ello signifique aceptación de derecho alguno ni conformidad con aquéllas.

El dictamen será dirigido directamente al ministro o secretario de la Presidencia de la Nación competente, quienes decidirán conforme a lo previsto en el inc. c, punto II. [ver decr. 1757/90, art. 109]

- e) En caso de que un particular que tenga pendiente más de una cuestión con el Estado Nacional y los demás entes, empresas o sociedades mencionados en el art. 1° de la ley 23.696, haya formulado su propuesta transaccional respecto de parte o de la totalidad de ellas, se les dará tratamiento integral procurando que en cada acuerdo que se celebre se prevean todas las que se refieran a un mismo vínculo jurídico. En estos casos la Comisión Asesora prevista en los incs. a y b será integrada por tres (3) miembros designados por cada Ministerio o Secretaría de la Presidencia de la Nación competente, uno de los cuales deberá ser el jefe del Servicio Jurídico Permanente de aquellos órganos, aplicándose en lo que corresponda lo establecido en el inc. j del presente artículo.
- f) El acuerdo transaccional y en su caso su presentación al juez de la causa, de conformidad con lo prescripto por el art. 838 del Cód. Civil, deberá contener la renuncia o desistimiento de las partes a cualquier reclamo o acción,

administrativa, arbitral o judicial, entablada o a entablarse y al derecho en el que aquéllas se funden o puedan fundarse, respecto del objeto contenido en la transacción celebrada.

g) Mientras se sustancien los trámites originados en las propuestas transaccionales que los particulares puedan eventualmente formular, deberán suspenderse todos los plazos judiciales, arbitrales y administrativos, para lo cual el ministro o secretario de la Presidencia de la Nación, jefe del Estado Mayor General, interventor o autoridad superior del ente, empresa o sociedad de que se trate, impartirá las instrucciones a sus apoderados y/o representantes, para que soliciten y/o acuerden la suspensión pertinente, de conformidad con las normas procesales o procedimentales que resulten aplicables.

h) En todos los casos y con carácter previo a la suscripción del acuerdo transaccional, copia del proyecto de éste -juntamente con las actuaciones que fueren pertinentes- serán girados a la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Economía para que se expida sobre la forma y modalidades de pago previstas, de conformidad con la correspondiente programación de pagos de acuerdo a las efectivas posibilidades del Tesoro de la Nación. [texto según dechr.1757/90,art.107]*

i) Los acuerdos transaccionales podrán contemplar la reinversión parcial o total de la deuda reconocida en la transacción. Para ello y en los casos de contratos se podrá facultar al

particular contratante a emitir órdenes de pago por cuenta y orden del organismo, en las condiciones del acuerdo al que en definitiva se arribe, las que tendrán carácter de cesiones de crédito y cuya aceptación anticipada figurarán en el mismo convenio condicionada a que se emitan con las siguientes modalidades:

- I. Adquisición de insumos o servicios requeridos para la misma u otra obra pública del mismo u otro comitente estatal o una concesión de obra en igual caso.
 - II. Garantía de operaciones de créditos con idéntico destino al señalado en el apartado anterior.
- j) En todos los casos, copia de la propuesta será girada en forma inmediata al Ministerio de Economía, enviándose también copia de todas las actuaciones que se practiquen. El Ministerio de Economía, por intermedio de la dependencia de su jurisdicción que resulte competente, podrá proponer acuerdos globales o mecanismos compensatorios que involucren el estado general de la relación de créditos y deudas de la proponente con el sector público, conforme con lo autorizado por la legislación vigente. Para ello, podrá designar un representante de los órganos o entes, empresas o sociedades del sector público que pudieren estar involucrados en el acuerdo global. Esta decisión podrá ser tomada hasta el momento de la emisión del informe de las Comisiones Asesoras, abriéndose en este caso una nueva etapa de negociaciones por sesenta (60)

días hábiles administrativos como máximo. La aprobación de la propuesta transaccional que involucre a órganos o entes, empresas o sociedades de distinta jurisdicción deberá ser decidida por resolución conjunta de los ministros o secretarios de la Presidencia de la Nación competentes y del ministro de Economía y en caso de falta de acuerdo, por el Poder Ejecutivo Nacional.

A los efectos de dar cumplimiento a lo aquí establecido, las Comisiones Asesoras de Transacciones creadas por el presente artículo deberán exigir de los particulares una declaración jurada en la que conste la no existencia de deudas de éstos con los bancos oficiales, la Dirección Geral de Impositiva, la Dirección Nacional de Recaudación Previsional y la Administración Nacional de Aduanas, copia de las cuales deberán remirse al Ministerio de Economía, conforme lo estipula el primer párrafo de este inciso [párrafo agregado por dechr.1757/90 art. 108]

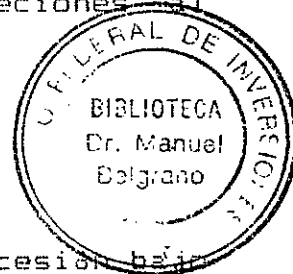
Art. 56.- La reglamentación del presente capítulo será aplicable, en lo que corresponda, a los supuestos previstos en el art. 56 de la ley 23.696.

* El texto anterior disponía: "h) En todos los casos y con carácter previo a la suscripción del acuerdo transaccional, copia del proyecto de éste -juntamente con las actuaciones que fueron pertinente- será girado al Ministerio de Economía, para que, dentro del término de veinte (20) días hábiles, se expida sobre la forma y modalidades de pago

previstas.

Transcurrido el plazo previamente establecido sin que se haya expedido, se considera que no median objeciones al proyecto remitido".-

CAPITULO VII DE LAS CONCESIONES



Art. 57.- Para adjudicar una obra por concesión, bajo cualquiera de sus modalidades, deberá tenerse en cuenta como un elemento básico del contrato su estructura económico-financiera. A los efectos de la valoración de la relación entre inversión y rentabilidad, la estructura económico-financiera deberá expresar la tasa de retorno de la inversión a realizar.

Art. 58.-

- a) A los efectos de la ley, se considerará mantenimiento a aquellos trabajos singulares que acceden a la integralidad de la conservación, entendido aquél como medio y a ésta como resultado.
- b) El destino de los fondos obtenidos por la concesión otorgada para la construcción o conservación de otras obras, no necesariamente conlleva el sistema de concesión para estas últimas.
- c) La estructura económico-financiera de la concesión definirá el alcance de las inversiones previas que deberá realizar el concesionario, cuya entidad será tenida en cuenta en todos los casos, como parámetro de trascendencia en la selección, comparándolo con la incidencia que su costo financiero tendrá sobre el valor de la tarifa o

peaje a cargo del usuario, constituyendo el objetivo global del sistema el abaratamiento de la tarifa o peaje. El pliego de condiciones particulares para adjudicación de concesiones por licitación podrá establecer volúmenes mínimos o máximos de inversión previa.

- d) En el orden nacional será Autoridad de Aplicación para el otorgamiento y ejecución de concesiones de obra pública, el ministro de Obras y Servicios Públicos, quien aprobará el procedimiento que deberá seguirse a estos efectos.
- e) La calificación de interés público y el ejercicio de la opción entre la licitación pública y el concurso de proyectos integrales, serán resueltos en un solo acto por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos.
- f) Toda iniciativa de particulares deberá anexar una garantía de mantenimiento en la forma prevista por la ley 17.804 o fianza bancaria, que no podrá ser inferior al dos por ciento (2%) del monto de la obra, que se consignará posteriormente en la oferta, en el procedimiento de selección que se convoque. Esta garantía será ejecutable en caso de no presentación de la oferta. Si al efectuar posteriormente la oferta, la garantía resultare inferior al porcentual precedentemente estipulado con una tolerancia de un treinta por ciento (30%) el oferente no será considerado autor de la iniciativa.

La garantía de mantenimiento de la iniciativa podrá convertirse en garantía de oferta en caso

de llamarse a licitación o a concurso.

- g) Todos los trámites que se refieran a una concesión de obra pública en curso de aprobación en cualquier instancia, tanto los efectuados bajo el amparo del decr. 1842/87 y del anterior texto del art. 4º, inc.c, de la ley 17.520, como los realizados antes de la vigencia de la presente reglamentación, deberán ser ratificados ante el Ministerio de Obras y Servicios Públicos dentro de los treinta (30) días de publicada la presente reglamentación, con el objeto de adecuar la presentación a sus disposiciones.
- h) Los "lineamientos generales" que debe contener la iniciativa efectuada en los términos del art. 4º, inc.c, de la ley 17.520 deberán contener, como mínimo, la identificación de la obra y su naturaleza, las bases de su factibilidad económica y técnica los antecedentes completos del oferente y en caso de tratarse de empresas argentinas, su capacidad registrada de contratación.
- i) Una vez convocado a concurso de proyectos integrales, los oferentes deberán proponer todas las condiciones contractuales, técnicas y económicas, incluyendo la estructura económico-financiera y los proyectos constructivos que serán volcados en el contrato de concesión y que regirán la construcción de la obra y su explotación.

La mera presentación de la oferta implica el sometimiento del oferente a la ley 17.250, su modificatoria y sus reglamentaciones.

- j) En todo caso en que las ofertas presentadas fueren de equivalente conveniencia será preferida la del que presentó la iniciativa.
- k) Podrá llamarse a la presentación de iniciativas de particulares para una obra pública determinada por la comitente, a construirse mediante concesión.
- I. La publicación se hará del modo y por los plazos que el inc.c,art.4° de la ley 17.520, modificada por la ley 23.696, fija para la presentación de ofertas.
- II. Las iniciativas que se presenten por este procedimiento, acompañadas de la garantía a que alude el inc.f precedente, se considerarán de interés público en lo que hace a la obra determinada por la concedente. Se admitirán alternativas que incluyan la obra que determinó el llamado.
- III. Será considerada iniciadora la propuesta que sea tomada como base para el procedimiento de selección que se seguirá, conforme a los citados incisos y artículo de la ley 17.520 y su modificatoria ley 23.696.-

CAPITULO IX

PLAN DE EMERGENCIA DEL EMPLEO

Art. 59.-

a) Las Provincias, cuyas Municipalidades deseen acogerse a los beneficios del denominado "Plan de Emergencia del Empleo", deberán adherirse a la ley 23.696 por los mecanismos que las Constituciones provinciales establezcan o sancionar normas que se ajusten, en sus principios y objetivos

generales, al contenido de la ley 23.696.

b) El convenio por el cual las Provincias adhieran al presente Plan será aprobado por resolución del Ministerio del Interior.

c) Las Municipalidades presentarán sus proyectos a las respectivas autoridades provinciales, las que los registrarán y remitirán a la autoridad de aplicación.

Asimismo, las Municipalidades podrán enviar sus proyectos en forma directa a la Autoridad de Aplicación a cuyo caso ésta deberá remitir copia de los mismos a las autoridades provinciales para su registración.

d) Será Autoridad de Aplicación del "Plan de Emergencia del Empleo", el Ministerio del Interior, el que aprobará los proyectos respetando, para su distribución entre las jurisdicciones provinciales, los coeficientes fijados por el art. 4° de la ley 23.548. Para la elección de las obras a llevarse a cabo se tendrá en cuenta que se realicen en centros que exhiban los mayores índices de desocupación y subocupación

La evaluación y selección de los proyectos será realizada por una Comisión Honoraria de seis (6) miembros, tres (3) representantes del Ministerio del Interior y tres (3) del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, que serán designados por sus respectivos titulares. La Comisión se dictará su propio régimen de funcionamiento.

Los trabajos a realizar deberán tener un contenido de mano de obra directa (según análisis de precios) no menor al sesenta por ciento (60%).

Para la evaluación de prioridades deberán tenerse en cuenta las obras que tengan mayor contenido de mano de obra y beneficiarios de la misma.

e) Los proyectos deberán demostrar de manera

fehaciente la sustitución de medios mecánicos por ocupación intensiva de mano de obra y que los procedimientos de contratación a aplicar asegurarán celeridad, eficiencia e inmediata creación de nuevos puestos de trabajo, e indicar, asimismo, el porcentaje de mano de obra radicada en el lugar de ejecución a aquellos postulantes que residan en un radio no superior a los treinta (30) kilómetros del lugar de prestación efectiva de las tareas. Dicha circunstancia se acreditará mediante certificado de la autoridad policial del lugar de residencia.

Estos postulantes tendrán prioridad para los puestos de trabajo debiendo ocupar como mínimo un ochenta por ciento (80%) del plantel total afectado a la obra.

f) La obra será licitada, adjudicada, controlada, medida y recibida por la Municipalidad titular del proyecto, la cual será responsable ante el Gobierno Nacional de la ejecución de la obra y del destino de los fondos acordados.

g) Las mediciones de los trabajos y las certificaciones correspondientes se harán quincenalmente.

h) Las demoras en que incurran las Municipalidades para la aprobación de los certificados que no merecieran ser observados, como así también la no entrega de los mismos en el plazo acordado, hará la Municipalidad contratante única responsable de los intereses y daños que se originen, gastos que serán a su exclusivo cargo, no pudiendo, en ningún caso, solicitar el reintegro al Gobierno Nacional.

Para calcular y aplicar la variación de costos se utilizará un promedio del índice de precios al por mayor nivel general y del índice de precios al consumidor nivel general, publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, tomando como base el correspondiente al mes anterior a la

fecha de cotización y como ajuste el del mes anterior de ejecución. Hasta la fecha de su publicación se utilizarán provisoriamente los últimos índices publicados.

i) Dentro del plazo de cinco (5) días de suscripto el contrato, las Municipalidades deberán remitir al Ministerio del Interior los siguientes datos:

- 1) Fotocopia autenticada del contrato correspondiente y cotizaciones solicitadas para la contratación directa.
- 2) Número de personal no estable del contratista a utilizar para la realización de la obra.
- 3) Plazo de ejecución de la obra y fecha de iniciación.
- 4) Plan de trabajo e inversiones y cronograma gral. de la obra.

j) Las contrataciones celebradas como consecuencia de la puesta en marcha de este Plan, se regirán por las disposiciones vigentes en el ámbito local en la medida en que éstas no contraríen las previsiones establecidas en la materia por la ley 23.696 y su reglamentación. La ley 13.064 será de aplicación supletoria.

k) El aporte de la Nación se aplicará exclusivamente al pago de las obras originales y aprobadas conforme lo dispuesto por esta reglamentación y no alcanzará a sus ampliaciones, adicionales y/o trabajos preliminares, anteproyectos, proyectos de obra, dirección técnica e inspección de obra.

Las indemnizaciones a que tenga derecho el contratista particular por hechos o actos imputables al comitente, serán por cuenta exclusiva de las municipalidades contratantes.

1) La Autoridad de Aplicación queda autorizada a delegar las competencias aquí otorgadas de acuerdo a lo dispuesto en el art.67 de la ley 23.696 y a dictar las normas complementarias y aclaratorias correspondientes, pudiendo requerir las informaciones que estime convenientes o necesaria para el mejor cumplimiento de los objetivos del Plan y a solicitar a la Municipalidad comitente el reformulamiento total o parcial del proyecto y/o convenio en función de la disponibilidad de fondos destinada a este fin.

11) Los fondos necesarios para atender el Plan de Emergencia del Empleo serán transferidos por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía a la cuenta especial 550 "Fondos de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias", habilitada en jurisdicción del Ministerio del Interior.

m) La transferencia de los fondos para los respectivos programas se hará de la siguiente forma: el diecisiete por ciento (17%) del monto total dentro de los diez (10) días posteriores al primero del mes siguiente al de la notificación de la firma del contrato y el ochenta y tres por ciento (83%) restante en doce (12) cuotas quincenales y consecutivas, con el ajuste establecido en el inc. h.

n) Los certificados de obra y de variación de costos deberán ser aprobados por el comitente dentro de las veinticuatro (24) horas hábiles siguientes a su aprobación contra la cuenta del Banco de la Nación Argentina en la sucursal que se indique en el contrato de obra.

Para la aprobación de los certificados, el contratista, a partir de la tercera quincena de certificación, deberá acreditar fehacientemente haber cumplido con el pago de los salarios, fondo de desempleo, cargas sociales y con los tributos nacionales, provinciales y municipales. Para la

aprobación del último certificado, deberá presentar dicha documentación y la constancia de haber adelantado el ingreso de las cargas sociales, fondo de desempleo y los tributos nacionales, provinciales y municipales.

8) El Ministerio de Obras y Servicios Públicos realizará inspecciones técnicas, auditorías y los restantes controles que estime necesarios para controlar que la ejecución de las obras, su régimen de pagos y además aspectos de la relación contractual se ajusten a las prescripciones legales y reglamentarias y al texto del respectivo contrato, informando quincenalmente a la Autoridad de Aplicación.

En caso de comprobarse infracciones o irregularidades, la Autoridad de Aplicación dispondrá el cese del giro de fondos, revocando la resolución aprobatoria, y pondrá el caso en conocimiento del Registro de Constructores de Obras Públicas de la Nación y de la Provincia respectiva, a sus efectos, sin perjuicio de las acciones civiles y criminales que correspondan. [texto según dechr. 385/90, 1º; ver res. conjunta MOSP 158/89 y MI 24/89]*

* El texto anterior disponía: Art. 5º .- Será Autoridad de Aplicación del "Plan de Emergencia del Empleo" el ministerio de Obras Y Servicios Públicos.

El convenio por el cual las Provincias adhieran a la ley 23.696 y la determinación y distribución de fondos entre aquéllas, deberán ser aprobados por decreto del Poder Ejecutivo Nacional previa intervención de los Ministerios del Interior, de Economía y de Trabajo y Seguridad Social, con arreglo a las siguientes pautas:

a) La selección de proyectos, para su propuesta de inclusión en el Programa, corresponderá a la Provincia, de acuerdo a los criterios y pautas que fije la Autoridad de

Aplicación. La Provincia deberá pretar asistencia técnica para la elaboración de los proyectos y pliegos de las obras.

b) Los postulantes con prioridad para el puesto de trabajo deberán residir dentro de un radio no superior a los treinta (30) kilómetros del lugar de prestación efectiva de las tareas. Dicha circunstancia se acreditará mediante certificado de la autoridad policial del lugar de residencia.

c) El ministro de Obras y Servicios Públicos, en la resolución que apruebe el proyecto, dispondrá se giren los fondos correspondientes al banco oficial de la Provincia (o municipal, si existiere), en cuya jurisdicción se llevará a cabo la obra.

d) La obra será licitada, adjudicada, controlada, medida y recibida por la Municipalidad titular del proyecto.

La Municipalidad titular del proyecto será responsable ante el Gobierno Nacional, de la ejecución de la obra y de la administración de los fondos acordados.

e) Las mediciones de los trabajos y las certificaciones correspondientes se realizarán quincenalmente. Podrán otorgarse anticipos financieros para pago de quincenas al personal ocupado.

El certificado emitido conforme a las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes constituirá título hábil para que el contratista perciba el importe del mismo de la institución bancaria receptora de los fondos.

f) Las demoras en que incurre la Municipalidad en la aprobación de los certificados que no merecieron observaciones, como así también la no entrega de los mismos en el plazo acordado, hará a la Municipalidad contratante única responsable de los intereses y daños que se originen, gastos que serán a su cargo exclusivo, no pudiendo en caso alguno

solicitar su reintegro al Gobierno Nacional.

g) El índice de variación de precios a utilizar en el contrato, será el de costo de la construcción publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (costos de la construcción en Capital Federal), correspondiente al mes de ejecución de los trabajos. Hasta la fecha de su publicación, se utilizara provisoriamente el último índice publicado. Como excepción y mediante resolución fundada, se podrá autorizar la utilización de otro índice de variación de precios.

h) Dentro de los cinco (5) días de suscripto el contrato, las Municipalidades deberán remitir al Ministerio de Obras y Servicios Públicos los siguientes datos:

I. Fotocopia autenticada del contrato correspondiente.

II. Número de personal no estable del contratista que requerirá la obra.

III. Plazo de ejecución de la obra y fecha de su iniciación.

IV. Cronograma del desarrollo de la contratación.

i) Termina definitivamente la obra y celebrado el acto de recepción provisoria, deberá informarse al Ministerio de Obras y Servicios Públicos de dicha circunstancia.

j) El Ministerio de Obras y Servicios Públicos podrá solicitar los informes que considere conveniente o necesario para el mejor cumplimiento de los objetivos del plan".

CAPITULO X

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 60.- Sin reglamentación.

Art. 61.- Dentro de los noventa (90) días de la vigencia de este reglamento y anualmente, en oportunidad de formular el proyecto de presupuesto, cada Ministerio y

y Secretaría de la Presidencia de la Nación deberá informar la nómina de comisiones, reparticiones, entes, empresas, sociedades u organismos creados por leyes especiales que se proyecta suprimir, transformar, reducir, limitar o disolver.

Art. 62.- Las empresas que se encuentren bajo el control de la Sindicatura General de Empresas Públicas, deberán presentar ante dicho organismo de contralor, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la vigencia de esta reglamentación, la respectiva información conforme a las pautas y modalidades que en cada caso determine. La Sindicatura General de Empresas Públicas emitirá su opinión en cada caso y elevará toda la documentación empresarial con el análisis particular al Ministerio de Economía, y con la antelación suficiente para efectuar por parte del Poder Ejecutivo Nacional la remisión al Honorable Congreso de la Nación en el término de ley.

Art. 63.-

- a) Los entes, empresas o sociedades que por la naturaleza de su actividad deben dar cumplimiento a lo establecido en el art. 63, son los descriptos en el art. 1° de la ley, con excepción de la Administración Pública centralizada. Están alcanzadas, en consecuencia, la totalidad de las haciendas de producción y de erogación cualquiera sea su naturaleza jurídica.
- b) Las normas técnicas y profesionales para la confección de balances o estados contables y el registro de operaciones serán las dictadas por la Sindicatura General de Empresas Públicas, conforme a las normas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción donde el

ente, empresa o sociedad tenga su domicilio legal. Se aplicará asimismo por la analogía lo determinando por el Código de Comercio en su Libro Primero, Título I, Capítulo III.

- c) Cada ente, empresa o sociedad elaborará un Plan de Cuentas que deberá ser sistemático, asegurando un tratamiento homogéneo de la contabilización de echos, operaciones o contingencias, de modo que se obtenga información útil sobre la gestión del ente, empresa o sociedad y de sus sectores más revelantes, contribuyendo a la toma de decisiones y al control del patrimonio de aquél.

El Plan de cuentas será aprobado previa intervención de la Sindicatura General de Epresas Públicas, por la autoridad superior de cada ente, dándose cuenta del mismo al ministro del ramo respectivo.

- d) Los presupuestos que se formulen deberán estructurarse en los mismos rubros y partidos del Plan de Cuentas de ente, empresa o sociedad. Deberán posibilitar la comparación entre lo presupuestado y lo realizado y facilitar el análisis de las variaciones.
- e) Los entes que por su naturaleza jurídica se diferencien de las sociedades, adoptarán y adoptarán y adaptarán sus Planes de Cuentas y Estados Patrimoniales, Estado de Ingresos y Egresos a los que utilizan las sociedades comerciales legisladas por la ley 19.550 (t.o. 1984).
- f) La contabilidad estará organizada mediante registros separados para las distintas secciones

o divisines del ente, empresa o sociedad o bien con un sistema centralizado orientado a la evaluacón de la gesti3n de las distintas unidades operativas.

Tanto en un caso como en el otro la determinaci3n de las unidades operativas o de las divisiones o secciones ser3 propuesta por cada ente al ministro del ramo en el plazo de treinta (30) días para su resoluci3n.

- g) Los entes, empresas o sociedades deber3n confeccionar estados contables trimestrales y anuales los que deber3n ser depositados en la sede social y ante la autoridad administrativa que correspondiere dentro de los setenta y cinco (75) días posteriores a la fecha de cierre del período trimestral o en su caso dentro de los ciento diez (110) días posteriores a la fecha de cierre del ejercicio anual, los que ser3n de consulta pública toda vez que sea requerido. Se publicaran al igual que la memoria, anexos y estados complementarios, en forma sintética en el Boletín Oficial de la República Argentina, sin perjuicio de realizarlo adem3s en cualquier otro medio que se estime pertinente. Los balances y dem3s estados de informaci3n contable que deban efectuar las empresas que se encuentran bajo control de la Sindicatura General de Empresas Púbricas mencionadas en el art. 1º de la ley 23.696, ser3n dictaminados por los profesionales de dicho ente, empresa o sociedad comprendidos en el art. 4º inc. b in fine, de la ley 21.801 (t.o)

Cualquier administrado podrá solicitar copias de los balances y estados trimestrales o anuales a que se refiere este artículo, previo pago del costo de ellas.

Sin perjuicio del cumplimiento de las demás normas de este decreto, no serán de aplicación las referentes a la publicación de los balances para aquellos entes, empresas, sociedades u organismos cuyas operaciones deban permanecer secretas por razones de defensa o seguridad, cuando así lo disponga expresamente el Poder Ejecutivo Nacional.

- h) El ejercicio económico será anual y su cierre se producirá el 31 de diciembre de cada año, salvo el caso de los entes empresas o sociedades que por ley, tuvieran fijada una fecha distinta.

Art. 64.- Sin reglamentación.

Art. 65.- Sin reglamentación.

Art. 66.- Sin reglamentación.

Art. 67.- Sin reglamentación.

Art. 68.- Sin reglamentación.

Art. 69.- Sin reglamentación.-

4.- DECRETO 666/89 - 29/12/89.-

CUMPLIMIENTO DE UN PLAN DE EJECUCION DE LA LEY 23696

VISTO: el expte. 3145/89 de la Subsecretaría de Transporte Terrestre, y

CONSIDERANDO:

Que con la promulgación y publicación de la ley 23696, la Empresa Ferrocarriles Argentinos ha sido incluida en el ANEXO I con la figura de la concesión.

Que corresponde dar cumplimiento a lo dispuesto por el art.11 de la citada ley, estableciendo las alternativas, procedimientos y modalidades particulares de estas concesiones en Ferrocarriles Argentinos.

Que es un objetivo fundamental el aumento de la participación del modo ferroviario en la movilización del tráfico de carga y pasajeros.

Que, sin perjuicio de la implementación de reformas estructurales en Ferrocarriles Argentinos, resulta necesario poner en marcha un Plan de Coyuntura que permita una fuerte disminución de la necesidad de financiamiento de la misma, el incremento del transporte de cargas, de sus ingresos y de la recaudación del servicio de pasajeros urbanos y suburbanos mediante un enérgico control de la evasión.

Que conforme a las facultades conferidas por la ley 23.696, el Poder Ejecutivo Nacional es competente para resolver sobre el particular.

POR ELLO:

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA DECRETA:

Artículo 1° - Ordénase a la intervención de Ferrocarriles Argentinos el cumplimiento de un Plan de Coyuntura para los próximos ciento ochenta (180) días, plazo durante el cual deberá proceder a:

- a) Racionalizar los gastos de explotación, en particular los de combustibles e insumos, revisión de contratos de servicios y adquisiciones, viáticos, horas extras y recargos.
- b) Reordenar el plan de inversiones, ajustándolo a las necesidades imprescindibles del servicio, en particular en relación al incremento del transporte de cargas.
- c) Racionalizar los servicios de trenes de pasajeros interurbanos.
- d) Racionalizar los servicios de trenes de pasajeros urbanos y suburbanos en horas nocturnas.
- e) Transformar la estructura burocrática superior de la empresa, produciendo una descentralización de funciones que optimice la eficiencia operativa.
- f) Impulsar en forma inmediata la licitación para la explotación del ramal Borges-Delta.
- g) Llamar a licitación nacional e internacional, en el plazo de sesenta (60) días, para la implementación del sistema de expendio y control de boletos automático en los servicios de pasajeros urbanos y suburbanos.
- h) Llamar a licitación para la explotación de servicios de encomiendas y paqueterías en trenes de pasajeros.
- i) Incrementar el transporte multimodal.
- j) Promover el aporte de material tractivo y remolcado para la explotación de servicios de carga por empresas operadoras y cargadoras.
- k) Impulsar la incorporación de material rodante mediante la figura del leasing.

- l) Aprovechar la capacidad ociosa de la industria privada ferroviaria nacional para la renovación, mejoramiento y conservación de vías y obras de arte, fabricación, renovación y rehabilitación de locomotoras, coches y vagones (en particular los accidentados) y provisión de equipos, componentes, partes y repuestos.
- m) Reordenar los talleres de mantenimiento y reparación mediante modificación de los regímenes de trabajo, con la participación de los trabajadores.
- n) Vender, alquilar u otorgar en concesión los inmuebles innecesarios para la explotación ferroviaria, utilizando los ingresos resultantes para la adquisición de bienes de capital.
- o) Impulsar las negociaciones para la provincialización de los ramales:
- Puerto Deseado-Colonia Las Heras (Provincia de Santa Cruz).
 - Recreo-Chumbicha-Catamarca (Provincia de Catamarca) y Chumbicha-La Rioja-Paquiá (Provincia de la Rioja).
 - Ingeniero Jacobacci-Esquel (Provincias de Río Negro y Chubut)
- p) Negociar la municipalización de ramales.
- q) Proceder al sinceramiento contable de la empresa, separando los gastos derivados de actividades realizadas con fines sociales.

Art. 2° - Limitase el aporte del Tesoro Nacional, durante el plazo establecido en el artículo anterior, al monto de los gastos totales de personal de la empresa. Los recursos

genuinos ingresados financiarán el total de los gastos de funcionamiento y las inversiones previstas.

Art. 3° - Instrúyase a la intervención de la empresa para que, en la ejecución del Plan de Coyuntura, cumpla los siguientes objetivos:

- a) Fuerte disminución de la necesidad de financiamiento de la empresa.
- b) Incremento del transporte de cargas y de los ingresos correspondientes.
- c) Incremento de la recaudación del servicio de pasajeros urbanos y suburbanos mediante un enérgico control de la evasión.

Art. 4° - Dispónese la ejecución de la ley 23.696 en Ferrocarriles Argentinos por la modalidad de concesión integral de explotación de líneas o sectores de la red ferroviaria nacional. Se entiende por concesión integral de explotación aquella en la cual la concesionaria asume, en el sector objeto de la contratación la explotación comercial, la operación de trenes y atención de estaciones, el mantenimiento del material rodante, infraestructura y equipos y todas las demás actividades complementarias y subsidiarias. En los casos en que no sea posible implementar la concesión integral de explotación se recurrirá a concesiones parciales de servicios.

Art. 5° - Designase como Autoridad de Aplicación, conforme al art. 13 de la ley 23.696, al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, quien llamará a licitación pública para las concesiones indicadas en el art. 4° con facultad de efectuar la subdivisión de la red ferroviaria nacional en los sectores que considere adecuados, de preparar los pliegos de licitación y de establecer para cada caso si la misma será de carácter nacional o internacional.

Art. 6° - Establécese que la adjudicataria de cada licitación deberá constituir una Sociedad Anónima Concesionaria, conforme a los arts. 163 a 307 de la ley de sociedades 19.550. El estatuto podrá prever una categoría de acciones para el personal que reviste en relación de dependencia de Ferrocarriles Argentinos, a la fecha de la adjudicación de cada licitación, en la línea o sector de la red sujeta a concesión, dentro del Programa de Propiedad Participada (capítulo III de la ley 23.696) y en las condiciones que la Autoridad de Aplicación considere conveniente.

Art. 7° - Constitúyese una Comisión Asesora, a los efectos de la participación en los procesos licitatorios, integrada por dos (2) representantes de Ferrocarriles Argentinos, dos (2) de la Secretaría de Transportes, tres (3) de las organizaciones sindicales ferroviarias y tres (3) de los sectores empresarios. La Comisión dependerá directamente de la Autoridad de Aplicación y deberá informar permanentemente a la Comisión Bicameral creada por el art. 14 de la ley 23.696.

Art. 8° - Establécese que en la preparación de los Pliegos de Licitación para cada concesión se contemplará en forma preferencial la transferencia total o parcial del personal que reviste en relación de dependencia de Ferrocarriles Argentinos, a la fecha de la adjudicación de cada licitación, en la línea o sector de la red sujeta a concesión. Deberán aplicarse las normas de protección del empleo, situación laboral, encuadramiento sindical y seguridad social contenidas en el capítulo IV de la ley 23.696.

Art. 9° - Créase una Comisión ad hoc, con el fin de proponer modificaciones al reglamento general de Ferrocarriles

y al reglamento interno técnico operativo, aplicables a las concesionarias. El reglamento general permitirá la incorporación de nuevas modalidades de explotación técnica, surgidas en la evolución tecnológica, que posibiliten el logro de una explotación más económica o eficiente del sistema. A tal fin, los concesionarios podrán proponer al Ministerio de Obras y Servicios Públicos las reglamentaciones adecuadas en sustitución del reglamento interno técnico operativo vigente en Ferrocarriles Argentinos y cualquier otro tema que sea necesario suprimir, modificar o aclarar con el fin de que no interfiera con los objetivos de la concesión.

Art. 10.- Llámase a licitación pública nacional o internacional, de acuerdo a lo que se indica en cada caso, para la concesión de los siguientes servicios y sectores de la red ferroviaria nacional:

- a) Servicios de pasajeros en los corredores Buenos Aires-Mar del Plata y Buenos Aires-Rosario (licitación internacional).
- b) Explotación del corredor Rosario-Bahía Blanca (licitación internacional).
- c) Ramales secundarios de carga Chucul-Casilda y Dalmacio Vélez Sársfield-Casilda (licitación nacional).

En el plazo de ciento veinte (120) días deberán realizarse los estudios correspondientes y, en su caso, confeccionarse los pliegos de condiciones pertinentes.

Art. 11.- Comuníquese a la Comisión Bicameral creada por el art. 14 de la ley 23.696.

Art. 12.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.-

5.- RESOLUCI&N F.A. 156/89 - 28/12/89.-

CREA LA ADMINISTRACION DE LOS FERROCARRILES SUBURBANOS

VISTO: las instrucciones recibidas del Mnisterio de Obras y Servicios P&ublicos, y

CONSIDERANDO:

Que es objetivo de la empresa aumentar su participaci&on en el transporte de pasajeros urbanos y suburbanos.

Que en tal sentido se estima necesario una especializaci&on dentro de la empresa para atender el transporte citado.

Que tal pol&itica de reestructuraci&on encarada por la empresa es uno de los medios por los cuales puede alcanzarse el objetivo antedicho.

Que conforme a dicha pol&itica es necesario instrumentar medidas tendientes a la obtenci&on de aquella meta

Que una de las medidas conducentes a tal fin resulta la creaci&on de la Administraci&on de los Ferrocarriles Suburbanos, la que tendr& a su cargo la explotaci&on del servicio ferroviario del transporte de pasajeros dentro del &area metropolitana de Buenos Aires.

Que otra de las medidas, debe ser la que defina la jurisdicci&on de la red que integrará dicha Administraci&on.

POR ELLO: en uso de las atribuciones conferidas por el decr. 1536/89 y lo establecido en el art.4°,inc.e, de la ley 18.360.

EL INTERVENTOR EN FERROCARRILES ARGENTINOS RESUELVE:

Art&iculo 1° - Créase a partir de la fecha, la Administraci&on de los Ferrocarriles Suburbanos la que tendr& dependencia directa de la intervenci&on de la empresa.

Art. 2° - La red ferroviaria que integrará la Administración creada se detalla en el ANEXO I.

Art. 3° - Apruébase la estructura orgánica básica de dicha Administración la que se detalla en el ANEXO 2.

Art. 4° - Encomiéndose a todas las gerencias de la empresa a cumplimentar las tareas necesarias para la implementación en tiempo y forma de la Administración de los Ferrocarriles Suburbanos hasta su constitución definitiva.

Art. 5° - Las gerencias de línea sufrirán una profunda reorganización, en base a las políticas de reestructuración de la empresa y a lo establecido en el art.1° de la presente resolución.

Art. 6° - Regístrese, comuníquese y archívese.

JULIO L. SAVON

Interventor

Ferrocarriles Argentinos

ANEXO 1

ADMINISTRACION DE LOS FERROCARRILES SUBURBANOS

ZONA SUR:

Plaza Constitución-La Plata-Río Santiago

Plaza Constitución-Glew-Altamirano

Temperley-Ezeiza-Cañuelas-Lobos

Temperley-Berazategui

Estación Buenos Aires-González Catán-Villars

Puente Alsina-Libertad-M.C.Gral. Belgrano

Once-Moreno-Luján-Mercedes

Merlo - Empalme Lobos

Haedo- Temperley

ZONA NORTE

Retiro - Pilar

Lacroze - Gral. Lemos

Retiro - Villa Rosa

Retiro-J.L.Suárez-Zárate

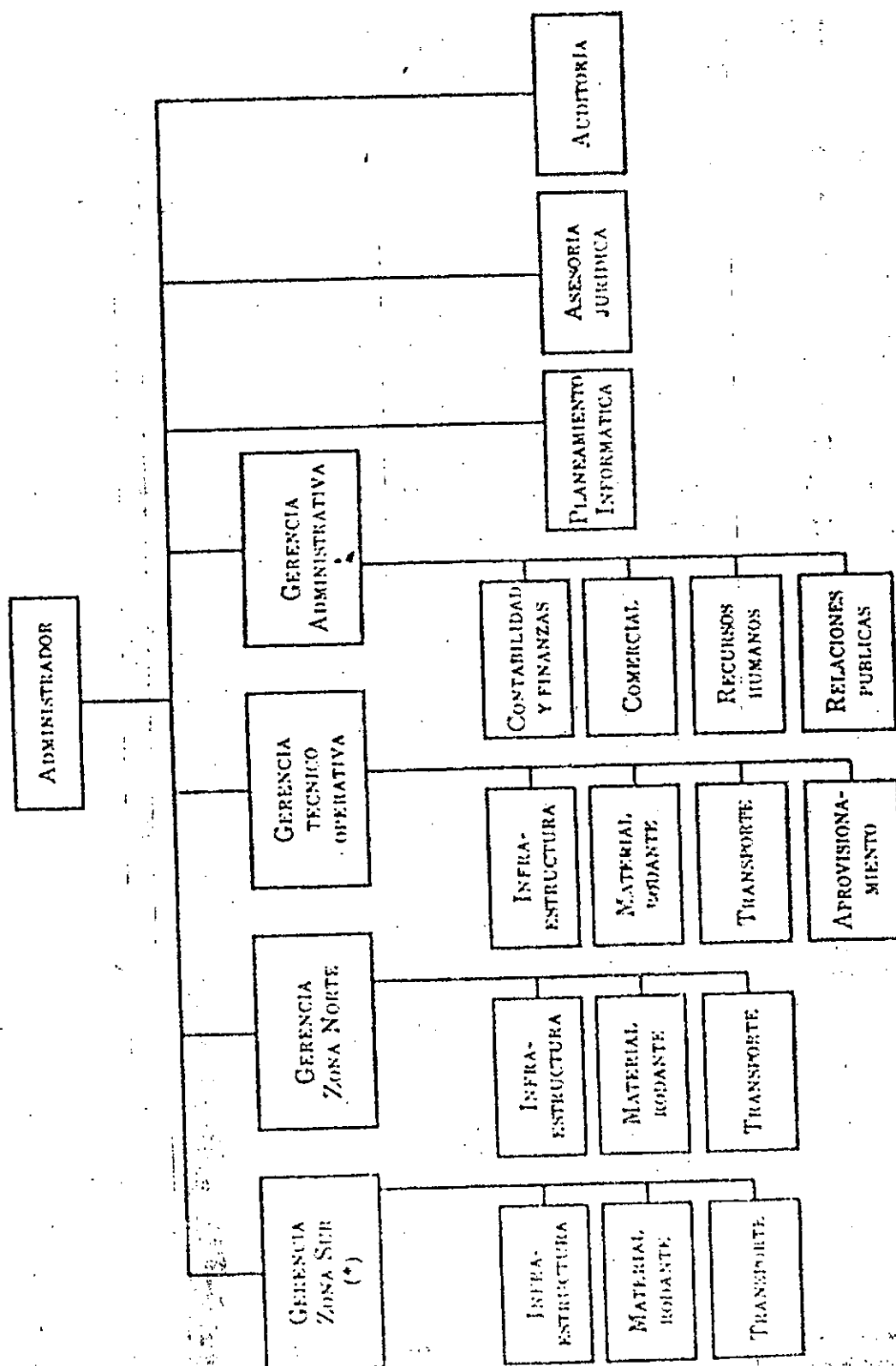
Retiro - Mitre

Retiro - Tigre

Victoria - Capilla del Señor

ANEXO 2

ADMINISTRACIÓN DE LOS FERROCARRILES SUBURBANOS



* Incluye un sub-gerente.

6.- DECRETO 502/91 - 25/3/91.-

FERROCARRILES METROPOLITANOS S.A. - CREACION - ESTATUTO-
APROBACION

Fecha: 25 marzo 1991.

Publicación: B.O. 27/3/91.

Citas legales: ley 19.550 (t.o.1984); XLV-B.1310; D.435/90; L-A.168; D.12/90; L-B.1339; L-C.2524; D.1930/90; L-D.3777; D.407/91; LI.A.379; ley 23.696: XLIX-C.2444; D.612/90; L.B.1339.-

Art. 1° - Escíndese de la Empresa Ferrocarriles Argentinos la Administración de los Ferrocarriles Suburbanos creada por res. 156 -F.A. del 28 de diciembre de 1989, ratificada por dec.47 del 4 de enero de 1990 y créase sobre la base de dicha escisión la empresa Ferrocarriles Metropolitanos Sociedad Anónima, sujeta al régimen de la ley 19.550 y cuyo capital pertenece al Estado nacional, a través del Ministerio de Economía, en una proporción del noventa y nueve por ciento (99%) y a Ferrocarriles Argentinos, en el uno por ciento (1%) restante.

Art. 2° - Apruébase el estatuto de Ferrocarriles Metropolitanos S.A. que, como anexo I, forma parte integrante de este decreto y que será registrado por la Inspección General de Justicia.

Art. 3° - A partir de la hora cero (0) del día 1° de abril de 1991, Ferrocarriles Metropolitanos S.A. tomará a su cargo la explotación de los servicios urbanos y suburbanos de pasajeros sobre la Red Ferroviaria Metropolitano, así como la de sus actividades colaterales, complementarias y subsidiarias con el personal, materiales equipos y demás elementos afectado a la Administración de los Ferrocarriles Suburbanos de Ferrocarriles Argentinos, cesando entonces esta Empresa en la

explotación de los servicios y actividades mencionados.

Art. 4° - También a partir de la hora cero (0) del día 1 de abril de 1991 Ferrocarriles Metropolitanos S.A. pasará a ser titular de los bienes inmuebles de propiedad ferroviaria ubicados en el Area Metropolitana de Buenos Aires, según está definida en el art. 17 del presente decreto y de los derechos y bienes muebles afectados a la operación del transporte sobre la Red Ferroviaria Metropolitana. Ambas empresas convendrán qué bienes serán de uso exclusivo de Ferrocarriles Argentinos.

En cuanto al personal que hasta la hora cero (0) del día 1 de abril de 1991 se encuentre designado en la Administración de los Ferrocarriles Suburbanos de Ferrocarrile Argentinos o afectado de algún modo a la misma a partir de dicha hora se lo considerará temporariamente adscripto a Ferrocarriles Metropolitanos S.A.

Art. 5° - Ferrocarriles Argentinos y Ferrocarriles Metropolitanos S.A. deberán convenir en el plazo de treinta (30) días corridos a partir de la fecha determinada en el art. 3° la forma y el plazo para transferir a Ferrocarriles Metropolitanos S.A. los antecedentes y títulos de propiedad correspondientes a los bienes indicados en el art. 4° del presente decreto.

También convendrá la transferencia a Ferrocarriles Metropolitanos S.A. de la titularidad de los contratos en ejecución o pendientes de ejecución, celebrado por Ferrocarriles Argentinos si en ellos se encuentran comprendido o afectados, bienes de los mencionados en el art. 4° del presente decreto.

Art. 6° - Habida cuenta de los límites de la Red Ferroviaria Metropolitana establecida por la precitada res. I. 156 F.A.-89 ratificada por dec. 47/90 Ferrocarriles

Metropolitanos S.A. y Ferrocarriles Argentinos iniciarán formalmente en el plazo de treinta (30) días corridos a partir de la fecha determinada en el art.3° del presente decreto, las tratativas para establecer la delimitación física entre ambas empresas en materia de estaciones, vía, señalamiento y telecomunicaciones, talleres, almacenes generales y locales, establecimientos de mantenimiento de material rodante, depósitos, campamentos, puestos de control zonal y material rodante (tractivo y remolcado) y todo otro tipo de instalación fija. La tarea de delimitación deberá quedar completada dentro del plazo de noventa (90) días corridos contados desde el comienzo de las tratativas.

Art. 7°- En forma simultánea con el cumplimiento del cometido establecido en el art.6° ambas empresas convendrán las modalidades del uso comportatido cuando ello fuera conveniente de las instalaciones, equipos y servicios acordando también los cargos que deberá abonar la empresa usuaria.

Para la correcta aplicación de lo dispuesto precedentemente se tendrá en cuenta:

- a) La administración, conservación y mantenimiento de toda la infraestructura de circulación y de operación de la red ferroviaria metropolitana, aún de los sectores que resultaren de uso exclusivo de Ferrocarriles Metropolitanos S.A.
- b) Los programas en curso de reparación y mantenimiento del material rodante (tractivo y de remolque) de ambas empresas cualquiera fuera la propietaria y/o usuaria, no deberán sufrir alteraciones en su ejecución, fundadas en la escisión dispuesta por el art.1° de este decreto, sin perjuicio de lo que se convenga sobre el

reparto de las cargas económicas.

Art. 8° - Todo el servicio de trenes que se desarrolle en la red ferroviaria metropolitana deberá ser diagramado o bajo programa. Ferrocarriles Metropolitanos SA deberá coordinar adecuadamente con Ferrocarriles Argentinos y cualquier otro operador ferroviario su accionar de manera de compatibilizar las respectivas necesidades de tráfico sobre dicha Red. Ello no obstante la operación ferroviaria en la misma será responsabilidad de Ferrocarriles Metropolitanos SA

Art. 9° - Ferrocarriles Metropolitanos S.A. deberá desarrollar su funcionamiento en base a una estructura orgánica-funcional estrictamente adecuada a las reales necesidades de la Empresa y a una planta de personal con la cantidad de puestos de trabajo necesarios y suficiente para el cumplimiento eficiente de sus funciones.

A los fines de la cobertura de los cargos vacantes en dicha empresa, se la exceptúa por única vez y por el término de noventa (90) días corridos a partir de la fecha determinada en el art.3° del presente decreto, de la restricción impuesta en el art.27 del dec.435/90 modificado por su similar 612/90..

El personal que Ferrocarriles Metropolitanos S.A. incorpore a su planta deberá tener domicilio acreditado en el Area Metropolitana de Buenos Aires.A los agentes que provinieren de Ferrocarriles Argentinos se les reconocerá su antigüedad en la actividad ferroviaria y se tendrá en cuenta su aptitud profesional.

En el término de noventa (90) días corridos a partir de la fecha determinada en el art.3°del presente decreto Ferrocarriles Metropolitanos S.A. deberá reintegrar a Ferrocarriles Argentinos el personal adscripto que no fuera

incorporado a la planta de la empresa nombrada en primer término.

Art. 10.- El Ministerio de Obras y Servicios Público por intermedio de la Subsecretaría de Transporte será el órgano de interpretación de este decreto y el encargado de resolver las cuestiones interempresarias designadas en la creación de Ferrocarriles Metropolitanos S.A. respecto de las cuales esta empresa y Ferrocarriles Argentinos no lograsen alcanzar acuerdos dentro de los plazos previstos.

Art. 11.- Ferrocarriles Metropolitanos S.A- queda comprendida en los alcances de los decs.435/90,1757/90,1930/90 y 407/91 con sus modificaciones, aclaraciones y normas de aplicación dictadas por autoridad competente, con la salvedad establecida en el art.9°.

Art. 12.- En el plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de iniciación establecida en el art.3°del presente decreto Ferrocarriles Metropolitanos S.A. deberá elevar con intervención del Ministerio de Economía el plan de acción y presupuesto correspondiente al año 1991 -excluido el primer cuatrimestre por esta única vez- con reducción a lo estrictamente indispensable de los aportes con que el Tesoro nacional habrá de concurrir para el financiamiento del total de gastos e inversiones en el lapso indicado, hasta tanto Ferrocarriles Metropolitanos S.A. complete la puesta en funcionamiento de su propia administración lo que deberá ser cumplido dentro del plazo de sesenta (60)días a partir de la fecha determinada en el art.3° del presente decreto, Ferrocarriles Argentinos continuará a cargo de la percepción de los ingresos y la atención de los egresos originados en los servicios y actividades asignados a Ferrocarriles Metropolitanos S.A. Tales ingresos y egresos se tendrán por

definitivos sin lugar a reclamos interempresarios.

Art. 13.- La creación de Ferrocarriles Metropolitano S.A. no implica la transferencia de pasivos de Ferrocarriles Argentinos a la nueva empresa, salvo que así se hubiere dispuesto en forma expresa por el presente decreto.

Art. 14.- No le serán aplicables a Ferrocarriles Metropolitanos S.A. los regímenes de las leyes de obras públicas, de contabilidad, de procedimientos administrativos ni en general, las normas o principios del derecho administrativo.

Art. 15.- Ferrocarriles Metropolitanos S.A. en materia de tarifas, deberá:

a) Establecer el nivel de las tarifas ordinarias y sus condiciones de aplicación y proponer al Ministerio competente su aprobación. El pronunciamiento del Ministerio competente deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días corridos de la presentación de la propuesta. En su defecto, las tarifas propuestas se tendrán por aprobadas.

b) Celebrar convenios con empresarios de transporte y propietarios de material rodante ferroviario o de elementos complementarios del mismo, para realizar servicios especiales o combinados.

Art. 16.- Toda prestación de servicios realizada por Ferrocarriles Metropolitanos S.A. a favor de organismos nacionales de la provincia de Buenos Aires o de la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, será facturada y percibida en las mismas condiciones que si el servicio hubiera sido prestado al público; o si se tratara de servicios especiales, como el transporte de correspondencia o el

mantenimiento de las líneas telegráficas a la tarifa que se fije con el procedimiento indicado en el artículo anterior.

Art. 17.- A los fines del presente decreto el Area Metropolitana de Buenos Aires se considerará integrada por los siguientes partidos de la Provincia de Buenos Aires:Avellaneda Almirante Brown-Berazategui-Berisso-Brandsen-Capana-Cañuelas-Ensenada-Escobar-Esteban Echeverría-Exaltación de la Cruz-Florencio Varela-General Las Heras-General Rodriguez-General Sarmiento-La Matanza-La Plata-Lanús-Lobos-Lomas de Zamora-Luján-Marcos Paz-Mercedes-Merlo-Moreno-Morón-Pilar-Quilmes-San Fernando-San Isidro-San Martín-San Vicente-Tigre-Tres de Febrero-Vicente López y Zárate.-

Art. 18.- La transformación dispuesta por el presente decreto estará exenta de todo impuesto, tasa o contribución nacional existente o a crearse, como también de todo arancel y honorario.

Esta exención comprende, pero no se limita, a los impuestos, tasas y contribuciones que gravan las actas, operaciones, ingresos y resultados que sean consecuencia directa o indirecta de la transformación dispuesta.

Asimismo comprende, pero no se limita, a los impuestos que gravan los instrumentos que deban otorgarse para la formalización o como consecuencia directa o indirecta de la transformación de la que se trata.

Art. 19.- Manténgase a favor de Ferrocarriles Metropolitanos S.A. la totalidad de los beneficios tributarios impositivos y arancelarios otorgados a Ferrocarriles Argentinos mientras todas sus acciones pertenezcan al Estado.

Art. 20.- Dentro del plazo de noventa (90) días contados desde la fecha establecida en el art. 3° del presente decreto, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, con la

intervención de la Subsecretaría de Transporte elevará al Poder Ejecutivo la propuesta de privatización de los servicios de Ferrocarriles Metropolitanos S.A. en el marco de la ley 23.696.

Art. 21.- Comuníquese, etc. -MENEM-CAVALLO

ANEXO I

ESTATUTO DE FERROCARRILES METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA

TITULO I- Denominación. Régimen legal. Domicilio.

Duración

Art. 1° - La Empresa Ferrocarriles Metropolitanos Sociedad Anónima funcionará con sujeción al régimen de la ley 19.550-capítulo II, sección V. arts. 163 a 307 (t.o. 1984) a las demás normas legales y reglamentarias que le resulten aplicables y a las demás normas del presente estatuto. En el cumplimiento de las actividades propias de su objeto social y en todos los actos jurídicos que formalice podrá usar indistintamente su nombre completo o del de Ferrocarriles Metropolitanos S.A. o bien la sigla FE.ME.SA.

Art. 2° - El domicilio legal de la sociedad se fija en la ciudad de Buenos Aires, en el lugar que determine el directorio, pudiendo establecer administraciones regionales, delegaciones, sucursales, agencias y representaciones dentro y fuera del país.

Art. 3° - La duración de la Sociedad será de cien (100) años a contar desde la fecha de inscripción de este Estatuto en el Registro Público de Comercio.

TITULO II - Objeto

Art. 4° - La sociedad tiene por objeto llevar a cabo por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, la explotación del servicio de transporte ferroviario de pasajero urbanos de superficie y subterráneo en el Area Metropolitana

de Buenos Aires, pudiendo desarrollar las actividades complementarias y subsidiarias que le resulten convenientes; la intervención en todo lo referente a la construcción, explotación y administración de nuevas líneas que surjan de acuerdo a las políticas ferroviarias que para dicha Area Metropolitana fijen las autoridades competentes, así como también la intervención en los estudios de concesiones, permisos y otras formas de participación privada que las misma dispusieren.

Art. 5° - Para el cumplimiento de sus fines Ferrocarriles Metropolitanos S.A. tiene las siguientes atribuciones y obligaciones:

1. Ejecutar las políticas que en materia de transporte sean establecidas en general y en particular para el Area Metropolitana de Buenos Aires por las autoridades competente.
2. Aprobar su estructura organica y funcional.
3. Dictar sus propios reglamentos internos de administración y explotación y las normas relativas a control y auditoria interna, pagos, adquisiciones, contrataciones y demás inversiones y erogaciones en general.
4. Proponer las modificaciones y ampliaciones a la red de explotación y organizar los servicios que la integran en procura de una mejor racionalización, mayor productividad y reducción de los costos.
5. Contratar la ejecución de trabajos y la fabricación de elementos ferroviarios bajo formas de contratación privada.
6. Designar, contratar, promover, retrogradar,

trasladar, suspender o separar de sus cargos, al personal empleado en la empresa, cuya relación jurídica con la misma se regirá por las normas del derecho laboral o civil, según la modalidad de presentación de servicios, con exclusión de las normas del derecho administrativo.

7. Fijar los sueldos y demás retribuciones al personal que por este estatuto está facultada a designar.
8. Contratar empresas consultoras, auditoras, agentes, corredores y comisionistas en las condiciones corrientes de plaza y sin relación de dependencia para todos los objetos específicos del transporte y de las demás actividades administrativas o comerciales de Ferrocarriles Metropolitanos S.A.
9. Adquirir bienes muebles o inmuebles y enajenar lo incluidos en su patrimonio.
10. Constituir, modificar, transferir o extinguir toda clase de derechos reales. Celebrar contratos de locación.
11. Aceptar donaciones o legados con o sin cargo.
12. Realizar operaciones financieras y bancarias con instituciones de créditos oficiales o privadas, del país o del exterior.
13. Formar parte de sociedades y efectuar aportes a las mismas de cualquier naturaleza.
14. Contratar mutuos y préstamos de uso.
15. Celebrar contratos de publicidad de sus servicio y sobre sus bienes.
16. Adquirir fondos de comercio, registrar patentes

y adquirir licencias industriales o comerciales sobre procedimientos técnicos aplicables a la explotación ferroviaria.

17. Hacer pagos, incluso los que no sean los ordinarios de la administración, novaciones o transacciones, conceder créditos, quitas o esperas y efectuar donaciones.
18. Exonerar total o parcialmente cargos por pasajes almacenajes, depósitos, servicios; conceder franquicias y renunciar a prescripciones operada cuando estas medidas respondan a razones de política comercial.
19. Estar en juicio como actora, demandada o en cualquier otro carácter, ante cualquier fuero o jurisdicción, inclusive en el extranjero y hacer uso de todas las facultades procesales para la mejor defensa de los intereses de Ferrocarriles Metropolitanos S.A.
20. Otorgar poderes generales o especiales.
21. Gestionar de los poderes públicos, concesiones, permisos, autorizaciones, licencias, privilegios, exenciones de impuestos, tasas, gravámenes o recargos de importación y cuantas más facilidades sean necesarias o convenientes a los efectos de posibilitar el cumplimiento del objeto de la sociedad.
22. Dirigirse, gestionar y contratar en forma directa con las provincias, municipios y organismos nacionales, provinciales o municipales.
23. Otorgar concesiones totales o parciales de sus obras por servicios o proponerlas cuando sean de

competencia de las autoridades.

La enumeración precedente es enunciativa y no taxativa. La sociedad podrá realizar en general, todos los actos jurídicos y operaciones financieras, industriales o comerciales necesarias para el logro de su objetivo social.-

TITULO III - Capital. Acciones

Art. 6° - El capital social se fija en la suma de dos billones de australes (A 2.000.000.000.000) totalmente integrado y estará representado por dos millones (2.000.000) de acciones ordinarias, nominativas, no endosables, cuyo valor nominal será de un millón de australes (A 1.000.000) cada una. Cada acción dará derecho a un (1) voto en las asambleas.

Art. 7° - Por resolución de la Asamblea, el capital social podrá elevarse hasta el quintuplo del monto fijado en el art. 6°. Toda resolución de aumento de capital social, será elevada a escritura pública, publicada en el Boletín Oficial e inscripta en el Registro Público de Comercio.

Art. 8° - Las acciones serán ordinarias o preferidas nominativas al portador o escriturales. Tanto las acciones como los certificados provisionales que se emitan, contendrán las menciones que establece el art. 12 de dicha Ley.

La sociedad podrá emitir títulos representativos de una o más secciones.

TITULO IV - Dirección y administración

Art. 9° - La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio integrado por un presidente, un vicepresidente y uno (1) a tres (3) directores, los que serán designados por la Asamblea con mandato por tres (3) ejercicios, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

También podrán designarse de uno (1) a tres (3) directores suplentes que reemplazarán a los titulares en caso

de ausencia, licencia, renuncia, incapacidad, inhabilidad o fallecimiento previa aceptación por el Directorio cuando la causal de sustitución sea temporaria.

Si se produjeran vacantes en el Directorio de modo tal que le impidiera sesionar válidamente, la Comisión Fiscalizadora designará reemplazantes provisorios cuyo mandato se extenderá hasta la elección de nuevos titulares, a cuyo efecto, deberá convocarse a Asamblea dentro de los sesenta (60) días de efectuadas las designaciones por la Comisión Fiscalizadora.

Art. 10.- Para desempeñar el cargo de presidente, vicepresidente o director, se requiere ser argentino nativo o naturalizado con diez (10) años de ejercicio de la ciudadanía y mayor de treinta (30) años de edad, tener notoria experiencia y probada capacidad de conducción de empresas en el sector público o privado.

No podrán ser designados presidente, vicepresidente o directores:

- a) Los alcanzados por las prohibiciones e incompatibilidades a que hace referencia el art.310 de la ley 19.550.
- b) Los que por el desarrollo de sus actividades privadas estén ligados directamente a empresas proveedoras de equipos, materiales o servicios de los ferrocarriles, salvo que medie la previa desvinculación total de las mismas.

Art. 11.- En garantía del correcto cumplimiento de sus funciones, los directores depositarán en la caja de la sociedad la suma de cincuenta millones de australes (A 50.000.000) en dinero en efectivo, valores o títulos de la deuda pública.

Art. 12.- El Directorio se reunirá por lo menos una vez al mes y además, cada vez que lo convoque el presidente o quien lo reemplace, o cuando lo soliciten por lo menos dos (2) de sus miembros.

Art. 13.- El Directorio sesionará válidamente presidido por el presidente -o por el vicepresidente cuando corresponda- y con la asistencia de la mayoría de los miembros que lo integran, adoptando sus resoluciones por simple mayoría de votos de los miembros presentes. El presidente o vicepresidente, cuando lo reemplace, tendrá en todos los casos derecho a voto y a doble voto en caso de empate.

Art. 14.- El Directorio tendrá amplias facultades para organizar, dirigir y administrar la sociedad, sin otras limitaciones que las que resulten de las leyes que le fueren aplicables, del presente estatuto y de las decisiones de las asambleas, correspondiéndole:

- a) Ejercer la representación legal de la sociedad por intermedio del presidente o vicepresidente en su caso sin perjuicio de los mandatos generales y especiales que se otorguen, en cuya virtud tal representación podrá ser ejercida por terceras personas, si así lo dispusiera el Directorio.
- b) Conferir poderes especiales -inclusive los enumerados en el art. 1881 del Código Civil- o generales, incluso para querellar criminalmente y revocarlos cuando lo creyere conveniente.
- c) Comprar, vender, donar, ceder, permutar y dar o tomar en comodato toda clase de bienes muebles e inmuebles, semovientes, buques, aeronaves y derechos, inclusive marcas y patentes de invención
- constituir servidumbre como sujeto activo o

pasivo, hipotecas navales, prendas o cualquier otro derecho real y en general realizar todos los demás actos y celebrar dentro y fuera del país, los contratos que sean atinentes al objetos de la sociedad, inclusive arrendamientos por el plazo máximo que fije la ley.

- d) Asociarse con otras personas de existencia visible o jurídica, conforme a la legislación vigente y celebrar con las mismas, contrato de colaboración empresaria para la realización de uno o más negocios u operaciones determinadas.
- e) Tramitar ante las autoridades nacionales, provinciales, municipales y extranjeras todo cuanto sea necesario para el cumplimiento del objeto de la sociedad y coordinar sus actividades y operaciones con otras personas visibles o jurídicas.
- f) Aprobar la dotación del personal, efectuar nombramientos permanentes o transitorios, fijar las retribuciones, conceder premios y estímulos, disponer promociones, pases, traslados y remociones, aplicar las sanciones disciplinarias que pudiesen corresponder y disponer su separación. Las precedentes atribuciones podrán ser materia de delegación interna.
- g) Emitir previa resolución de la Asamblea, dentro o fuera del país, en moneda nacional o extranjera, debentures u otros títulos de deudas con garantía real, especial o flotante, conforme a las disposiciones legales que fueren aplicables.
- h) Transar, judicial o extrajudicialmente, toda clase

de cuestiones comprometer en arbitros o amigables componedores, promover y contestar toda clase de acciones judiciales y administrativas y asumir el papel de querellante en jurisdicción penal o correccional, otorgar toda clase de fianzas y prorrogar jurisdicciones dentro o fuera del país, renunciar al derecho de apelar o a prescripciones adquiridas, absolver o poner posiciones en juicio hacer novaciones, otorgar quitas y esperas y en general efectuar todos los actos que según la ley requieren poder especial.

- i) Obtener préstamos en dinero y celebrar toda clase de operaciones financieras y bancarias con entidades financieras de la Nación, de las provincias y de las municipalidades, mixtas o privadas, incluyendo las similares extranjeras-oficiales o privadas- o internacionales.
- j) Aprobar las estructuras orgánicas de la sociedad, mantener, suprimir o trasladar la dependencia de la misma y crear administraciones regionales, agencias o sucursales dentro y fuera del país, construir y aceptar representaciones.
- k) Someter a la consideración de la Asamblea, la memoria inventario, balance general y estado de resultados de la sociedad, proponiendo el destino de las utilidades del ejercicio.
- l) Dictar los reglamentos y disposiciones de carácter técnico, el régimen de contrataciones de la sociedad y demás reglamentaciones que hagan el objeto de la misma o para el mejor ejercicio de las facultades.

11) Someter a la consideración y aprobación de la autoridad competente las tarifas de los servicios que la sociedad presta.

m) Requerir a las autoridades competentes el dictado de un régimen de multas y sanciones por infracciones a las normas reglamentaria a aplicar a propietarios, usuarios, poseedores, inquilinos, proveedores y demás responsables, sean personas físicas o jurídicas y a los establecimientos industriales, comerciales y de cualquier otra naturaleza.

n) Conceder becas, convenir el dictado de cursos de capacitación con universidades y otras entidades de enseñanza, públicas o privadas, nacionales o extranjeras y contribuir al sostenimiento de cursos de perfeccionamiento, universitarios o especializados.

ñ) Celebrar convenciones colectivas de trabajo con las asociaciones profesionales representativas de su personal.

o) Exhonerar toda o parcialmente los cargos por pasajes, fletes, estadías, almacenajes, depósitos, servicios y conceder franquicias, cuando estas medidas respondan a razones de política comercial

p) Resolver cualquier duda o cuestión que pudiera suscitarse en la aplicación del presente estatuto a cuyo efecto el Directorio queda investido de amplios poderes, sin perjuicio de dar cuenta oportunamente a la Asamblea.

La enumeración que antecede es enunciativa y no taxativa y en consecuencia el Directorio tiene todas las

facultades para administrar y disponer de los bienes de la sociedad y celebrar todos los actos que hagan el objeto social salvo las excepciones previstas en el presente estatuto, incluso por intermedio de apoderados especialmente designados al efecto, a los fines y con la amplitud de facultades que en cada caso se determine.

Art.15.- Las remuneraciones de los miembros del directorio serán fijadas por la Asamblea debiendo ajustarse a lo dispuesto por el art.261 de la ley 19.550 y las normas que en materia de política salarial y jerarquización, establezca el gobierno nacional.

Art. 16.- Son facultades y deberes del presidente del Directorio y en su caso, del vicepresidente en ejercicio de la Presidencia:

- a) Ejercer la presentación legal de la sociedad:
tener a su cargo la parte ejecutiva de la misma,
y cumplir y hacer cumplir el presente estatuto,
los reglamentos y las resoluciones que tomen la Asamblea y el Directorio.
- b) Convocar y presidir las reuniones del Directorio
con voto en todos los casos y doble voto en caso
de empate.
- c) Ejercer los actos reservados al Directorio cuando
razones de emergencia o necesidad perentoria torne
impracticable la citación del mismo sin perjuicio
de su obligación de informarle en la primera
reunión que se celebre.
- d) Informar periódicamente al Directorio sobre la
gestión de los negocios de la sociedad.
- e) Absolver y poner posiciones y reconocer documento,
en juicios sin perjuicio de que tal facultad

puedan ejecutarla otros Directores o representantes de la sociedad, con poder suficiente al efecto.

- f) Firmar letras de cambio como librador, aceptar endosante, librar y endosar cheques y otorgar papeles de comercio contra fondos de la sociedad sin perjuicio de las delegaciones de firmas o de poderes que el Directorio confiera.

Art. 17.- El presidente, vicepresidente y los directores responderán personal y solidariamente por el irregular desempeño de sus funciones. Quedarán exentos de responsabilidad quienes hubieran participado en el acto violatorio de disposiciones legales o reglamentarias o hubiese dejado constancia de su disconformidad o desidencia.-

TITULO V - Régimen de explotación.

Art. 18.- En relación con la explotación de sus servicios Ferrocarriles Metropolitanos S.A. podrá:

- a) Proponer al Poder Ejecutivo Nacional la habilitación, clausura temporaria o definitiva y el levantamiento o reubicación de ramales, desvío y otros servicios.
- b) Establecer las normas técnicas relativas a los materiales y elementos de uso y consumo de Ferrocarriles Metropolitanos S.A. determinando la cantidad y características correspondientes y los requisitos para librarlos y mantenerlos en servicio, así como su radiación y baja.
- c) Solicitar del Gobierno nacional y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires la declaración de utilidad pública de los bienes necesarios para el tendido de nuevas líneas o ampliación de las

existentes y promover los procedimientos judiciales de expropiación de los mismos.

- d) Establecer en base a estudios técnico-económicos los horarios, la corrida y composición de los trenes de pasajeros, así como la tripulación y velocidad a emplear.
- e) Coordinar con otras empresas ferroviarias la utilización compartida de infraestructura de vías y señalamiento y comunicación u otros bienes.
- f) Habilitar al personal para la conducción de locomotoras y demás vehículos automotores ferroviarios, afectados al servicio público.

TITULO VI - Régimen de contrataciones

Art. 19.- Ferrocarriles Metropolitanos S.A. efectuará las contrataciones conforme a los principios básicos de publicidad y competencia de precios de acuerdo al presente Estatuto, debiendo asimismo ordenarse el régimen a que deberán ajustarse los proveedores, especialmente en lo referente a capacidad técnica, solvencia moral y financiera. En sus relaciones con terceros, Ferrocarriles Metropolitanos S.A. se regirá exclusivamente por el derecho privado. Se considerarán terceros no solamente las personas jurídicas privadas sino también el Estado nacional, provincial y municipios.

Art. 20.- Ferrocarriles Metropolitanos S.A. ajustará su accionar en materia de contrataciones a los procedimientos corrientes de licitación pública o privada y contratación directa, según convenga o se adapte mejor a los intereses de la gestión empresarial. El Directorio de Ferrocarriles Metropolitanos S.A. ordenará el régimen en la materia delegando en cada uno de los niveles las facultades que correspondan a efectos de facilitar una adecuada agilidad en la gestión y una

correcta delegación en las funciones.-

TÍTULO VII - Régimen contable, económico y financiero.

Art. 21.- La contabilidad general y de costos de Ferrocarriles Metropolitanos S.A. deberá ajustarse a los principios generales aceptados en la materia. Se organizará de tal modo que simultáneamente permita la preparación de presupuestos, el control integral y presupuestario, el seguimiento de la gestión de cada una de las dependencias y servicios en forma independiente aunque posibilitando su ulterior consolidación.

Art. 22.- La fiscalización de la sociedad será ejercida por tres (3) síndicos titulares que durarán en el ejercicio de sus funciones tres (3) ejercicios.

La Asamblea designará a propuestas de la Sindicatura General de Empresas Públicas los síndicos titulares así como tres (3) síndicos suplentes, quienes reemplazarán a los titulares en caso de remoción, vacancia temporal o definitiva o de sobrevenir una causal de inhabilitación para el cargo. Tanto los síndicos titulares como los suplentes podrán ser reelegidos indefinidamente.

Art. 23.- Los síndicos tendrán las obligaciones y responsabilidades que resultan de la legislación vigente. Actuarán como cuerpo colegiado bajo la denominación de Comisión Fiscalizadora.

Art. 24.- La Comisión Fiscalizadora se reunirá por lo menos una vez por mes y también a pedido de cualquiera de sus miembros dentro de los cinco (5) días de formulado el pedido. La Comisión Fiscalizadora adoptará sus decisiones por mayoría de votos, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Síndico disidente y labrará acta de sus reuniones. Será presidida por uno de los Síndicos elegidos por

mayoría de votos en la primera reunión de cada año, reunión en la que también se elegirá el reemplazante para el caso de ausencia.

Art. 25.- Las autoridades de Ferrocarriles Metropolitanos S.A. están obligadas a facilitar las tareas de análisis, verificación y control a cargo de los síndicos y a este objeto deberán

- a) Mantener actualizado los registros contables principales y auxiliares.
- b) Remitirles todos los informes y antecedentes que requieran para el ejercicio de sus funciones.
- c) Facilitarle el libre acceso a todas las dependencias, libros y comprobantes.
- d) Proporcionarles los medios materiales necesarios para el cumplimiento de sus tareas.

TITULO IX - Asambleas

Art. 26.- La Sociedad celebrará anualmente no menos de una asamblea ordinaria a los fines determinados en el art. 234 de la ley 19.550. Podrá igualmente celebrar asambleas extraordinarias para la consideración de los asuntos previstos en el art. 235 de la citada ley. Asimismo, sin perjuicio de ello, las asambleas podrán tratar y resolver cualquier otro asunto siempre que haya concluido en el orden del día de la convocatoria.

Serán convocadas por el directorio, la Comisión Fiscalizadora o a pedido del tenedor o tenedores de los certificados representativos del capital social.

Art. 27.- La convocatoria, tanto para las asambleas ordinarias como para las extraordinarias, se llevará a efecto según lo que dispone el art.237 de la ley 19.550 sin perjuicio de lo que el mismo artículo establece respecto de la asamblea

unánime. Las Asambleas sesionarán y resolverán conforme a las disposiciones de los arts. 243 y 244 de la ley citada.

Art. 28.- Corresponde a la Asamblea Ordinaria:

- a) Designar y remover al presidente, vicepresidente, los directores titulares y suplentes, síndicos titulares y suplentes, y fijar las remuneraciones del presidente, vicepresidente, directores y síndicos titulares.
- b) Considerar, aprobar o modificar el balance, inventario, memoria y estado de resultados que presente el Directorio, como así también el informe de la Comisión Fiscalizadora.-

TITULO X - Balance y cuentas

Art. 29.- El ejercicio financiero de la sociedad comenzará el 1 de enero de cada año y concluirá el 31 de diciembre del mismo año. La Asamblea podrá modificar la fecha de comienzo y terminación del mismo, debiendo inscribirse la resolución pertinente en el Registro Público de Comercio con las comunicaciones que reglamentariamente correspondan.

Art. 30.- Al fin de cada ejercicio, el Directorio confeccionará un inventario y balance detallando del activo y pasivo de la sociedad, un estado de resultados y una memoria sobre la marcha y situación de la misma, de acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, todo lo cual será sometido a la consideración de la Asamblea Ordinaria, con un informe escrito de la Comisión Fiscalizadora.

Art. 31.- De las utilidades realizadas y liquidadas, que resulten del balance anual, se destinarán:

- a) Cinco por ciento (5%) para el fondo de reserva legal hasta completar el veinte por ciento (20%) del capital social.

b) El remanente quedará a disposición de la Asamblea la que podrá resolver su destino, por sí o a propuesta del Directorio.-

TITULO XI - Liquidación

Art. 32.- La liquidación de la sociedad, cualquiera fuere la causa que la origine, se regulará por lo establecido en los arts. 101 y 112 de la ley 19.550.-

7.- DECRETO 1141/91 - 11/6/91.-

Contratos de concesión del servicio público prestados por Ferrocarriles Argentinos que se realicen conforme lo prescripto en la ley 23.696 - Normas aplicables.

Fecha: 14 junio 1991.

Publicación: B.O. 21/6/91.

Citas legales: ley 12.346; 1920-1940, 776; ley 2873; 1889-1919, 239; ley 5315, 1889-1919, 737; D.90325/36; t.1952: 1920-1940, 1055-1106; ley 19.076: XXXI-B, 1309; D.6205/83: XXIII-B, 963; D.8302/57: XVII-A, 603; ley 23.696: XLIX-C, 2444.-

Art. 1° - En todos los contratos de concesión del servicio público actualmente prestado por Ferrocarriles Argentinos, que se realicen conforme a lo dispuesto por la ley 23.696, no serán aplicables las siguientes disposiciones legales:

- a) Los arts. 15 y 18; incs. 1°, 2° y 3° (texto modificado por el dec.-ley 6205/63 de la ley 2873
- b) El art.2° Incs.15,20 y 26 del título IV de la ley 2873 (texto modificado por el dec.ley 8302/57).
- c) Los arts.9, 10 y 12 de la ley 5315.
- d) El art.124 del reglamento general de ferrocarril, aprobado por el dec.90.325/36.

Art. 2° - En todos los contratos de concesión de servicio público actualmente prestado por Ferrocarriles Argentinos, que se realicen conforme a lo dispuesto por la ley 23.696, serán aplicables a los concesionarios parcialmente, las disposiciones legales que seguidamente se mencionan con el texto que para cada una se consigna:

- a) Ley 2873.

Art. 19: El Poder Ejecutivo nacional o las autoridades que él determine tienen derecho preferente para

transportar por ferrocarril las fuerzas militares y los materiales de guerra que quisieren.

Art. 20: El Poder Ejecutivo nacional o las autoridades que él determine tendrán derecho para exigir despacho de un tren extraordinario.

b) Art. 6° de la ley 12.346:

Las tarifas de pasajeros, encomiendas y cargas de toda empresa de transporte con excepción de las ferroviarias, deberán ser sometidas a la aprobación de la Comisión Nacional de Coordinación del Transporte, rigiendo mientras tanto, las vigentes.

Igual requisito regirá la modificación de las ya aprobadas, respetándose los derechos de jurisdicción de las provincias y municipalidades dejadas a saber en el art. 3°.

c) Art. 3° de la ley 19.076:

La transmisión del dominio se hará con carga y quedará sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones:

a) Que el adquirente realice las construcciones necesarias para la recepción, almacenamiento y despacho en la forma y término que establezca la reglamentación de la presente ley.

b) Omitido en Boletín Oficial.

c) Que el uso de las instalaciones no sea interrumpido durante un período superior al que fije en cada caso la reglamentación.

d) Reglamento general de ferrocarriles, aprobado por dec. 90.325/36.

Art. 123.- Las empresas establecen un horario de verano y otro de invierno, que comenzará a regir el 1 de diciembre y el 1° de mayo, respectivamente o un único, si así resultare conveniente, pudiendo adelantar o retardar esas

épocas, si así conviniera a las necesidades del servicio público. Los horarios expuestos al público serán reemplazados cada vez que sufran modificaciones. Los horarios de servicio de trenes deberán editarse en las épocas establecidas para los cambios de horario, menos cuando no se introduzcan modificaciones en el servicio. Los horarios de servicios serán con el formato de doce (12)cm.por veinticuatro (24)cm.y deberá indicarse con claridad.

- a) Todos los trenes que circulen con horario llevarán las locomotoras aisladas o acopladas con cada uno y su numeración, designando con impar los ascendentes y con número par los descendentes. Por ascendente se entiende la marca de los trenes desde km.cero(0) de la línea en dirección al término de la vía y por descendente la marcha en dirección contraria. En los ramales se dan los trenes que arranquen ascendentes por la vía principal o de una estación en dirección a la terminal y descendentes los que marchen en dirección contraria.
- b) El itinerario detallado de cada tren con horario fijo, debiendo constar respecto a la estación de la línea, la hora de llegada y de salida.
- c) El cruce con otros trenes que se hará por medio de una X; el paso a otros trenes por una P y el paso por medio de otros signos serán seguidos del número de cada vagón.
- d) La distancia entre las estaciones y desde la partida -con una cifra decimal- incluir los empalmes y cruces a nivel con otros trenes.
- e) La formación ordinaria de los trenes de pasajeros

y mixtos y sus respectivas combinaciones.

- f) Las instrucciones generales que las creyeren convenientes agregar para el mejor desenvolvimiento de la marcha y seguridad de los trenes.-

Art. 4°.- En todos los contratos de concesión del orden público, actualmente prestado por Ferrocarriles Argentinos a realizarse conforme a lo dispuesto por ley 1175, las disposiciones legales que se indican, regirán para los concesionarios redactadas según el siguiente texto:

d) Ley 2873,

Art, 5°,inc.3°. Establecer los propios medios de locomoción y mantenerlos en toda la extensión del ferrocarril para el servicio del mismo sin perjuicio del sistema de comunicaciones de acceso público, que pueda ser técnica y operativamente apropiada.

Art. 7° - Ningún material rodante podrá ser para el servicio público sin el previo reconocimiento certificado habilitante, el cual deberá ser otorgado por el concesionario del servicio público por medio de un técnico designado conforme a los procedimientos derivados de la ley de ejercicio profesional de ingeniería. Cuando por la reparación general o derioro grave, se retirase del servicio público algún material rodante, no podrá restituirse al servicio sin nuevo reconocimiento y autorización.

Art. 12.- La formación y marcha de los trenes, se ajustará a los reglamentos generales que dicte el Poder Ejecutivo nacional para todo aquello relacionado con la seguridad del servicio público a prestar.

Art. 13.- La autoridad de aplicación aprobará los horarios e itinerarios de los trenes de pasajeros que presten

las empresas concesionarias y sean subsidiados por el Estado.

Art. 33.- Las tarifas relativas al transporte de las personas y al exceso del equipaje así como sus modificaciones deberán ponerse en conocimiento del público, inmediatamente de su implementación por avisos colocados en todas las estaciones

Art. 44.- Las tarifas relativas al transporte de pasajeros y mercaderías serán razonables y justas. Deberán ser comunicadas a la autoridad de aplicación y exhibidas en debida forma para el conocimiento de los usuarios del servicio.

Art. 45.- Los contratos de concesión de servicios ferroviarios garantizarán el trato igualitario a los usuarios que requieran servicios equivalentes.

Art. 46.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la autoridad de aplicación podrá disponer el tratamiento prioritario de transportes destinado a la atención de emergencias siempre que los mismos no puedan ser transportados por otros medios que cubran las necesidades en la cantidad y rapidez necesarias.

Art. 49.- Las tarifas serán uniformes para todos los que se sirvan del ferrocarril, sin embargo la empresa podrá reducir los precios de tarifa, en favor de los cargadores que aceptasen plazos más largos que los que correspondiesen según el orden del registro o de los que se obliguen a proporcionar en períodos dados, un minimum de toneladas de carga u otras modalidades tarifarias especiales o reducidas. La concesión a uno o muchos remitentes será extensiva a todos los que la pidan, sujetándose a iguales condiciones.

Art. 68.- Los concesionarios no podrán aplicar tarifas inferiores, equivalentes a un precio que iguale los costos variables del servicio al que se aplica dicha tarifa.

Título IV - Art.2ºinc.21: Acordar prioridades en el

transporte a los tráficos a que se hace mención en el art.46.

b) Reglamento general de ferrocarriles, aprobado por dec.90.325/36.

Art. 67.- Todo material rodante en servicio deberá estar provisto del certificado de habilitación firmado por el representante técnico de la empresa concesionaria. Dicho certificado de habilitación firmado por el representante técnico de la empresa concesionaria. Dicho certificado será colocado en lugar visible y en él se hará constar que ha sido sometido a los ensayos periódicos reglamentarios.

Art. 122.- Los horarios de los trenes de pasajeros subsidiados por el Estado serán establecidos con la anuencia de la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario. Los horarios se llevarán a conocimiento del público mediante aviso colocado en todas las estaciones y lugares que dicha Dirección Nacional determine. Igual procedimiento se seguirá con los cambios que se introdujeran.

Art. 4° - En todos los casos de concesión del servicio público actualmente prestado por Ferrocarriles Argentinos, que se realicen conforme a lo dispuesto por la ley 23.696, no serán aplicables los beneficios otorgados por el art.9° de la ley 19.076, sin que esta inaplicabilidad afecte los derechos adquiridos.

Art. 5° - Comuníquese a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado ley 23.696.

Art. 6° - Comuníquese,etc. - MENEM - CAVALLO.